



Centro de Estudios Internacionales

Aprobación presidencial en contextos de inseguridad:
el impacto de las identidades partidistas y la percepción de inseguridad en la
popularidad de Andrés Manuel López Obrador

TESIS

que para obtener el título de

Licenciada en Política y Administración Pública

presenta

Arantxa Gómez Aguilar

Directora de tesis: Dra. Melina Altamirano Hernández

Ciudad de México, México, 2025

Índice

Introducción.....	6
Capítulo I. Percepciones ciudadanas sobre el desempeño presidencial en contextos de alta inseguridad.....	13
I.1 La ciudadanía ante el trabajo del Ejecutivo.....	14
I.1.1 Evaluación del trabajo presidencial.....	16
I.1.2 Percepciones sobre la militarización de la seguridad pública.....	20
I.2 Determinantes de la evaluación de una ciudadanía vulnerable a la delincuencia.....	22
I.2.1 Miedo y aversión al riesgo.....	23
I.2.2 Cálculo costos-beneficio de las políticas de seguridad.....	26
I.2.3 Posiciones ideológicas y combate a la inseguridad.....	28
I.3 Partidos políticos, afinidades y evaluaciones sobre el desempeño gubernamental.....	31
I.3.1 Afinidades partidistas conjugadas con escenarios de alta inseguridad.....	35
I.4 Hipótesis.....	38
I.5 Conclusiones.....	40
Capítulo II. Inseguridad, gestión y partidismo: evidencia de América Latina y México.....	42
II.1 Crimen, violencia y estrategias de manejo de seguridad en América Latina.....	43
II.1.1 Percepciones ciudadanas frente a las tendencias de crimen y violencia en América Latina.....	47
II.1.2 Estrategias de seguridad para hacer frente al crimen en América Latina.....	53
II.2 Alternancia democrática, el nuevo siglo y los altos niveles de crimen y violencia en México.....	55
II.2.1 Cambio político: contexto e implicaciones	56
II.2.2 La gestión gubernamental y el manejo de la inseguridad (2000 – 2018).....	58
II.3 Andrés Manuel López Obrador al frente de la gestión de seguridad pública en México.....	66
II.3.1 “Abrazos, no balazos”: la campaña, el discurso y las promesas de seguridad de López Obrador en 2018.....	67
II.3.2 La continuidad disfrazada.....	71
II.4 El partidismo como filtro evaluador de los mexicanos.....	74
II.5 Conclusiones.....	79
Capítulo III. La opinión pública frente a la gestión gubernamental en México.....	82
III.1 Evaluaciones ciudadanas de los gobiernos en contextos de alta inseguridad (2000 – 2018).....	83
III.1.1 La ciudadanía mexicana en favor de la mano dura frente al crimen.....	87
III.1.2 El declive de las evaluaciones ciudadanas.....	91
III.2 La relevancia de la identidad partidista de la ciudadanía mexicana.....	97
III.2.1 La identidad morenista.....	98
III.2.2 Evaluaciones ciudadanas en la alternancia (2010).....	102
III.3 Análisis empírico.....	104
III.3.1 Datos y metodología.....	105
III.3.1.1 Variable dependiente.....	107
III.3.1.2 Variables independientes y de control.....	109
III.3.2 Pruebas y modelos.....	114
III.3.3 Hallazgos e interpretación de modelos.....	114
III.4 Conclusiones.....	121
Reflexiones finales.....	123
Bibliografía.....	129
Anexos.....	136

Agradecimientos

Este trabajo es, sin duda, el resultado de un rompecabezas compuesto por las ideas, enseñanzas y consejos que me acompañaron a lo largo de su elaboración. Estoy profundamente agradecida con todas las mentes que me sostuvieron, impulsaron e inspiraron a escribir esta tesis. En particular, con Melina Altamirano, a quien debo innumerables días de orientación, paciencia y ayuda invaluable. Su mentoría ha sido para mí no sólo una guía imprescindible en este proceso, sino también un pilar constante de apoyo y un ejemplo a seguir que valoro y espero poder emular a lo largo de mi carrera.

Al Colegio de México le debo mucho: cuatro años y medio de cultivo intelectual, académico y cultural. Me llevo la mejor experiencia como estudiante en esta institución. Es, verdaderamente, un gran privilegio haber sido formada e instruida por tan excelentes docentes. No sólo conservo enseñanzas de mis profesores, sino también las de mis compañeras y compañeros, en quienes también encontré un recinto de conocimiento, diálogo y amistad.

Agradezco profundamente a María Fernanda Somuano por su lectura rigurosa y detallada. No sólo fue autora de buena parte del sustento conceptual de este trabajo, sino también una guía clave para fortalecer y completar este proyecto. Su impulso fue, sin duda, un motor fundamental para concretar esta tesis. A Joy Langston le agradezco su acompañamiento tan cercano desde meses antes de optar por ser mi lectora. Su experiencia y visión académica fueron esenciales para el desarrollo de este trabajo. Ha sido un honor contar con la atención, lectura y mentoría de ambas profesoras. Las tres académicas que guiaron mi trabajo son un referente que aspiro a tomar como modelo a lo largo de mi trayectoria.

A Ena y a Carlos siempre les voy a agradecer su apoyo incondicional y su compromiso con mi educación. Su constante presencia y acompañamiento han sido fundamentales para todos mis

avances. La formación que me brindaron fortaleció mi camino académico, me enseñó el valor de la disciplina y cultivó en mí una curiosidad intelectual que me acompañará siempre. A Abi le debo una vida de respaldo firme, siempre presente cuando más lo necesito. A Justine, Carmen, Theo y Javier, en quienes encuentro un lugar seguro y de inspiración, les agradezco todo el impulso que me han dado y la confianza que han depositado en mí. A todas estas personas les reconozco un papel esencial en mi desarrollo personal y académico.

Pasé por la Licenciatura en Política y Administración Pública con una sensación de tranquilidad y entusiasmo, en gran medida por las personas que estuvieron a mi lado en las aulas. Sin Montse, Ricardo, Emilio, Joss, Bernardo, Ochoa, Diego y Abel, muy seguramente, mi estancia en el Colegio no hubiera sido tan placentera y enriquecedora. Les debo muchos años de aprendizaje, compañía y risas, incluso en medio de la presión y la incertidumbre que muchas veces acompañaron nuestros retos académicos. A Carlos, Miriam, Valentina y Rodrigo les agradezco su amistad más sincera, su lealtad firme y su compañía constante a lo largo de este camino. A todos les debo valiosas enseñanzas, la inspiración que supieron transmitirme y el afecto y cariño que dejaron a su paso.

Por último, a las personas que han sido víctimas del crimen y violencia en México, les dedico un espacio en estas páginas. A quienes se han acostumbrado a vivir con miedo, a quienes han sufrido las consecuencias de la impunidad y a quienes han perdido lo que ninguna reparación puede devolver, deseo que algún día se les honre con un país donde la justicia sea efectiva y donde el combate al crimen no represente una amenaza para la vida ni para la dignidad. Que este trabajo se sume, en alguna medida, a la labor académica comprometida con la construcción de un país donde la seguridad y la justicia sean una realidad.

Introducción

El sexenio de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) marcó un hito en la evolución del crimen y la violencia en México. El país finalizó 2023 con 30,523 víctimas de homicidio, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), a partir de cifras reportadas en las fiscalías estatales.¹ Esta estadística muestra una reducción de mil víctimas respecto a 2022 y de casi cuatro mil en comparación con lo reportado en 2021.² Sin embargo, el número de víctimas anuales continúa por arriba de las treinta mil, por sexto año consecutivo, según el SESNSP.³ Esto significa que la primera administración morenista se posicionó como el periodo más violento de la historia reciente del país.⁴

No obstante, el presidente López Obrador cerró su administración con un alto nivel de aprobación, de alrededor de 64.4%, aunque la cifra oscila entre los sesenta y setenta puntos porcentuales, según la fuente encuestadora.⁵ Se trata de un grado de respaldo popular histórico, pues el grado de aprobación de Enrique Peña Nieto (2012 – 2018) se mantuvo entre el 22 y el 30% y entre el 44 y el 68% para Felipe Calderón (2006 – 2012).⁶ El nivel de aprobación de López Obrador se mantuvo constante durante los seis años de gobierno, por encima de los cincuenta

¹ Pablo Ferri, “México mantiene los altos niveles de violencia y registra 30.523 asesinatos en 2023”, en *El País*, publicado el 16 de enero de 2024, <https://elpais.com/mexico/2024-01-16/mexico-mantiene-los-altos-niveles-de-violencia-y-registra-30523-asesinatos-en-2023.html>.

² *Loc. cit.*

³ *Loc. cit.*

⁴ *Loc. cit.*

⁵ Mitofsky, “Aprobación presidencial de Andrés Manuel López Obrador, promedio julio 2024”, en *Mitofsky: Reinventing Research*, publicado en julio de 2024, <https://www.mitofsky.mx/post/aprobacion-presidencial-de-andres-manuel-lopez-obrador-promedio-julio-2024>.

⁶ Ma. Fernanda Somuano, “Aprobar al Presidente: una comparación entre Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto”, *Foro Internacional*, num. 4, vol. 58, 2018, pp. 634-642.

puntos porcentuales. En contraste, la desaprobación disminuyó, “a 35.4% en julio de 2024 desde un pico de 49.2% en julio de 2020”.⁷

El contraste entre las cifras en materia de seguridad y los niveles de aprobación presidencial al cierre del sexenio sugiere que la población mexicana utilizó un lente relativamente benevolente al evaluar el desempeño de AMLO en comparación con administraciones pasadas. La ciudadanía, en promedio, ha mostrado un apoyo a la gestión presidencial que llegó al poder en 2018 bajo la candidatura de un partido relativamente nuevo, el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena). Esta discrepancia motiva la necesidad de estudiar por qué, a pesar de los altos grados de inseguridad y violencia, el presidente concluyó su término con un alto nivel de aprobación.

El empeoramiento de la situación de la seguridad ha tenido repercusiones graves y reales en la ciudadanía y en el país, en general. Un aumento en la tasa de homicidios demuestra un déficit en las estrategias de seguridad por las que se ha optado. Sin embargo, la popularidad de las medidas gubernamentales no siempre va en el mismo sentido de su eficacia. Si bien se observa que la tasa nacional de los crímenes cometidos por la delincuencia organizada ha incrementado año tras año desde 2016, el presidente anunció que la percepción social de inseguridad llegó a su nivel más bajo en diez años en 2023, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana.⁸

A pesar de que la injerencia e involucramiento del crimen organizado ha aumentado un 64.2% en los últimos ocho años, la ciudadanía no necesariamente percibe un empeoramiento equiparable en niveles de inseguridad.⁹ Para finales de 2023, “el porcentaje total de la población adulta que percibió a su ciudad insegura en términos de delincuencia bajó a 59.1 por ciento tras

⁷ Mitofsky, “Aprobación presidencial de Andrés Manuel López Obrador, promedio julio 2024”, en *Mitofsky: Reinventing Research*, publicado en julio de 2024, <https://www.mitofsky.mx/post/aprobacion-presidencial-de-andres-manuel-lopez-obrador-promedio-julio-2024>.

⁸ Andrés Manuel López Obrador, “Percepción social de inseguridad llega a su nivel más bajo en diez años, destaca presidente,” conferencia de prensa, 18 de enero de 2024, lopezobrador.org.mx

⁹ Índice de Paz México 2023, “El cambiante panorama de la delincuencia organizada,” www.indicedepazmexico.org

ubicarse en 73.7 al inicio de la administración de AMLO, en diciembre de 2018. Es decir, hubo una reducción de 14.6 puntos porcentuales”.¹⁰ No obstante, aún con las variaciones en la percepción de la mejora o empeoramiento de la situación, el problema de la inseguridad en el país continúa siendo la principal preocupación para la ciudadanía, 54.5% de los ciudadanos así lo perciben, aunque la proporción ha disminuido ligeramente desde el 59.6% en abril de 2024.¹¹ Estos datos revelan que la percepción ciudadana del desempeño gubernamental no está determinada, solamente, por la realidad nacional de inseguridad, sino que parece tener una causalidad más compleja. Además, es posible que las percepciones sobre la situación de la seguridad no tengan un efecto determinante en los niveles de aprobación de la gestión presidencial, sino que su impacto esté mediado por las afinidades partidistas de las personas.

Esta investigación tiene el objetivo de aportar conocimiento sobre los determinantes de la aprobación ciudadana de la gestión gubernamental en México. Decido estudiar la aprobación presidencial de López Obrador, en medio de una coyuntura de inseguridad crítica, a partir de un análisis del efecto del partidismo político. El estudio de las implicaciones del partidismo en México es particularmente relevante en este periodo dados los cambios profundos en las identidades partidistas registrados en los últimos años. La base social de Morena ha ido ampliándose en un periodo relativamente corto. Para la elección de Claudia Sheinbaum, en julio de 2024, 36 % de los votantes en México se identificaron como morenistas, en comparación con el 2016 donde la cifra no llegaba al 20%.¹² En cambio, el electorado que se autoidentificó con el PAN-PRI-PRD en 2024 alcanzó sólo los 14 punto porcentuales.¹³

¹⁰ Andrés Manuel López Obrador, “Percepción social de inseguridad llega a su nivel más bajo en diez años, destaca presidente,” conferencia de prensa, 18 de enero de 2024, lopezobrador.org.mx

¹¹ *Loc. cit.*

¹² Rodrigo Castro *et al.*, “Las claves de la victoria: ¿ideología, programas sociales o aprobación presidencial?” en *Nexos*, publicado el 25 de septiembre de 2024, <https://datos.nexos.com.mx/las-claves-de-la-victoria-ideologia-programas-sociales-o-aprobacion-presidencial/>.

¹³ *Loc. cit.*

La pregunta de investigación que guía esta tesis es: ¿cómo influyen las identidades partidistas y las percepciones de inseguridad de la ciudadanía mexicana en la evaluación del trabajo de Andrés Manuel López Obrador (2018 - 2023)? El argumento principal que propongo es que la identidad partidista funciona como un lente que filtra las percepciones ciudadanas sobre la cuestión de inseguridad en el país e influye en la aprobación de la gestión presidencial. En este trabajo estudio la manera en que ciertas experiencias con el crimen y violencia, a la par de la identidad con el partido en el cargo, moldean las evaluaciones ciudadanas del trabajo del Ejecutivo federal. Si bien ha habido numerosos estudios sobre los factores que influyen en la aprobación presidencial en México, esta investigación pone un peso central en la dimensión del partidismo, en un contexto donde la proporción de personas simpatizantes por el partido en el poder excede los registrados en sexenios precedentes. Para probar este punto, utilizo como fuente primaria el Barómetro de las Américas, en su encuesta de 2023, tomando en cuenta la muestra correspondiente a México. Dado que el objetivo es estudiar la evaluación ciudadana del desempeño de López Obrador, selecciono el año 2023 por corresponder al último año completo de su sexenio.

Las aportaciones de esta tesis van en dos sentidos. En primer lugar, me propongo contribuir a un cuerpo de literatura que ha analizado la aprobación presidencial de administraciones pasadas con un análisis actualizado del último sexenio. Dado que López Obrador dejó su cargo como primer presidente morenista recientemente, este trabajo es uno de los primeros intentos por entender los determinantes de su alto grado de aprobación. En segunda instancia, propongo un foco específico para estudiar la evaluación ciudadana del trabajo gubernamental: el partidismo y su interacción con las percepciones de inseguridad y experiencias de victimización. Si bien la relación entre la aprobación y afinidad por el partido en el cargo parece automática, sostengo que merece mayor análisis dada la fuerza del morenismo reciente y el empeoramiento de la situación

de seguridad en el país. En este contexto, es importante entender cómo las identidades partidistas pueden condicionar las evaluaciones retrospectivas que realiza la ciudadanía en áreas clave como la seguridad y con ello modificar los mecanismos de rendición de cuentas en esta materia.

El primer capítulo de esta tesis presenta un marco teórico para comprender los conceptos clave para el análisis. Se discute la literatura existente en tres ámbitos clave: estudios sobre aprobación presidencial, la influencia del manejo de la seguridad y la identidad partidista como variable clave en este estudio. A partir de esta revisión, planteo la pregunta central de investigación, mis dimensiones de análisis y las características de la variable dependiente. Este primer apartado presenta el argumento y deriva cinco hipótesis empíricas que se ponen a prueba en capítulos posteriores.

El segundo capítulo contextualiza la problemática de la inseguridad en México y América Latina entre 2000 y 2024. Se describen las tendencias generales de la situación de la seguridad en la región y las características del manejo gubernamental específico en esta área. En un primer apartado, analizo la situación de violencia y criminalidad en América Latina, donde discuto las respuestas gubernamentales y las percepciones ciudadanas sobre la seguridad pública, de manera general, para sentar un precedente de la problemática. Después, enfoco el estudio en México, para examinar las estrategias de seguridad de los gobiernos anteriores a López Obrador (en las últimas dos décadas, 2000-2018), donde destaco la creación de nuevas instituciones, la estrategia de militarización y sus implicaciones. Finalmente, me concentro en el periodo de López Obrador (2018-2024), sus políticas e intervenciones de seguridad pública, como la Guardia Nacional, el contraste con sus promesas de campaña y el contexto de violencia que caracterizó a su administración. El capítulo concluye con una discusión sobre la evolución del partidismo en México.

El tercer capítulo se centra en el análisis de la opinión pública mexicana durante el primer sexenio morenista, en relación con los altos niveles de inseguridad y criminalidad en el país. De esta manera, analizo de manera empírica cómo las percepciones ciudadanas sobre la gestión gubernamental están influenciadas por factores como la identidad partidista, la victimización directa, la percepción de inseguridad en el entorno inmediato y la confianza en las instituciones, especialmente en las Fuerzas Armadas. En este capítulo realizo un estudio cuantitativo, donde estimo cinco modelos de regresión logística para poner a prueba las hipótesis previamente formuladas. Además, evalúo cómo estas dimensiones interactúan con las estrategias de seguridad implementadas por el gobierno de López Obrador y discuto los hallazgos de mi análisis estadístico.

A partir de la literatura teórica, la descripción contextual y el análisis empírico, logro llegar a tres conclusiones generales. Primero, que la afinidad política influye significativamente en las percepciones ciudadanas sobre la gestión del gobierno, incluso en contextos de alta inseguridad. Los simpatizantes del partido Morena tienden a evaluar más positivamente el desempeño del presidente López Obrador, independientemente de experiencias personales de victimización o percepción de inseguridad en su entorno inmediato. Segundo, es claro que existe un apoyo popular a las estrategias de seguridad basadas en la mano dura contra el crimen, como el uso de la Guardia Nacional, lo que se puede atribuir a la percepción generalizada de eficacia y profesionalismo asociado a las Fuerzas Armadas.

Tercero, los hallazgos sugieren que las experiencias de victimización y las percepciones de inseguridad disminuyen la aprobación gubernamental, pero que este efecto está moderado por la identidad partidista y la confianza en las instituciones armadas. La expansión de la base social de Morena debe ser foco de estudio, pues tiene implicaciones importantes tanto para la vida política de la ciudadanía mexicana, como para la democracia del país. Destaca la amplia popularidad del

Ejecutivo en un contexto de alta violencia y criminalidad, así como el apoyo por políticas que han demostrado ser perjudiciales para el combate a la inseguridad. Esta investigación muestra que la dimensión del partidismo es crucial para explicar estas tendencias. La identidad morenista es un fenómeno reciente, pero de tal dimensión y potencia, que debe ser estudiado y evaluado para entender las potenciales consecuencias reales y simbólicas que puede tener en la ciudadanía mexicana.

Capítulo I. Percepciones ciudadanas sobre el desempeño presidencial en contextos de alta inseguridad

Las percepciones ciudadanas sobre la gestión del Ejecutivo federal son un indicador útil de legitimidad, del margen de acción del que dispone y, en general, del poder y del éxito de la administración.¹⁴ La pregunta de investigación que busco responder con esta tesis es: ¿cómo influyen las identidades partidistas y las percepciones de inseguridad de la ciudadanía mexicana en la evaluación del trabajo del presidente López Obrador? Mi investigación se centra en una dimensión particular para el análisis de las percepciones ciudadanas: las afinidades partidistas de la población.¹⁵

El argumento que sostengo es que la identidad partidista funciona como un filtro de las percepciones ciudadanas de la situación de inseguridad e influye en la aprobación de la gestión presidencial. En este sentido, inserto mi propuesta en un cuerpo de literatura que se ocupa de los determinantes de la aprobación presidencial, por medio de explicaciones y rasgos variados. Por ejemplo, el trabajo de Somuano encuentra al menos tres determinantes clave de la aprobación presidencial en México: la evaluación del manejo de la economía, la percepción sobre la seguridad pública y la evaluación del combate a la corrupción.¹⁶ Mediante de un análisis comparado entre los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, la autora demuestra que, aunque el contexto varía, estos tres factores se mantienen como los más influyentes en las evaluaciones ciudadanas del Ejecutivo.¹⁷

¹⁴ Ma. Fernanda Somuano, “Aprobar al Presidente: una comparación entre Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto”, *Foro Internacional*, num. 4, vol. 58, 2018, p. 631.

¹⁵ Vale la pena aclarar que utilizo el término afinidades como análogo de identidades, por lo que se deben entender como sinónimos, además de “partidismo”, en esta investigación

¹⁶ Ma. Fernanda Somuano, “Aprobar al Presidente: una comparación entre Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto”, *Foro Internacional*, num. 4, vol. 58, 2018, pp. 654 – 662.

¹⁷ *Loc. cit.*

A partir de esta revisión de literatura, especifico las dimensiones de análisis esenciales para la investigación y las sitúo en un diálogo con los trabajos existentes. El capítulo se divide de la siguiente manera. En un primer apartado, exploro los argumentos teóricos sobre las percepciones ciudadanas con respecto al desempeño presidencial, de manera general. En esta sección se encuentran la definición de la variable dependiente que guía a este estudio. Un segundo apartado explora las determinantes de la evaluación ciudadana de las estrategias de seguridad. De ahí que surgen tres subsecciones dedicadas a cada una de estas determinantes: miedo y aversión al riesgo, un cálculo de costo y beneficio y la posición ideológica de los individuos. En la tercera y cuarta sección de este capítulo se introduce la discusión de la identidad partidista, el papel de los partidos políticos en las evaluaciones ciudadanas y su relevancia en la evaluación del trabajo del Ejecutivo. El quinto apartado de este capítulo se lo dedico a las hipótesis que busco poner a prueba. Y, por último, cierro con un apartado de conclusiones.

I.1 La ciudadanía ante el trabajo del Ejecutivo

El objetivo de esta tesis es analizar los determinantes de las percepciones ciudadanas sobre la administración del presidente en un contexto de altos niveles de crimen y violencia. La aprobación presidencial de la ciudadanía parte de una evaluación general de varios aspectos de gobierno: económicos, sociales, políticos y de seguridad. La centralidad del manejo de la seguridad pública, en esta investigación, se debe a que, en México, la vulnerabilidad de la población frente al crimen posiciona la gestión de la situación como cuestión clave para el rechazo o el acuerdo general con el desempeño del Ejecutivo presidencial.

Por manejo de la seguridad pública me refiero a la estrategia gubernamental para garantizar a la ciudadanía una vida libre de inseguridad física. José Alfredo Montes de Oca sostiene que “el

concepto de seguridad pública sugiere, fundamentalmente, el estudio de la prevención del delito, la procuración y la administración de justicia, así como la reinserción social”.¹⁸ Además, la seguridad de la ciudadanía “representa una función integral del Estado, que comprende diversos elementos de vida de los gobernados como el patrimonio, la integridad física y los aspectos emocionales, que contribuyen al desarrollo armónico de las personas”.¹⁹ Por lo tanto, en relación con la percepción integral de la seguridad ciudadana, Zepeda y Moloeznik arguyen que “la expresión seguridad ciudadana se refiere al derecho de todo ciudadano a su seguridad, frente a riesgos o amenazas no institucionales sobre su persona y su patrimonio, es decir, a una condición de protección del ciudadano frente al riesgo por daños a la integridad física y psicológica.”²⁰

En países con territorios amplios, las dinámicas de criminalidad y violencia varían significativamente entre regiones. Las administraciones federales tienen la tarea de proveer a la ciudadanía de una seguridad pública que salvaguarde sus derechos, así como de defender al territorio de enemigos y ataques externos. Es labor de los gobiernos subnacionales, también, llevar el control del delito y el orden social. Dichas estrategias parten de un diagnóstico acerca de los riesgos que enfrenta la población y de una visión acerca de las intervenciones gubernamentales óptimas para prevenir y enfrentar las amenazas a la paz social. En este sentido, es relevante porque al estudiar la aproximación del gobierno a la seguridad pública, también se esclarece la manera en que éste observa a la ciudadanía, a los riesgos que viven y los miedos que tienen y los valores por los cuales prioriza una estrategia sobre otra.

¹⁸ José Alfredo Martín Montes de Oca, “La seguridad ciudadana ante la seguridad pública: un estudio preliminar”, *DIGNITAS*, num. 12, 2018, p. 16, <https://dignitas.codhem.org.mx/index.php/dignitas/article/download/56/52>.

¹⁹ *Ibid.*, p. 20.

²⁰ *Loc. cit.*

En América Latina, región caracterizada durante las últimas décadas por la presencia de actores criminales que socavan la seguridad de las personas, parece no existir una sola respuesta *correcta* o de efectividad probada para hacerles frente. No obstante, hay evidencia de que los planes de seguridad basados principalmente en medidas punitivas y de mano dura frente al crimen tienden a vulnerar más a la ciudadanía, sin aportar necesariamente resultados óptimos.²¹ Ahora bien, más allá de los indicadores basados en la incidencia delictiva, ¿cómo forma la ciudadanía sus percepciones acerca de las estrategias gubernamentales ante la inseguridad? Pero, además, ¿cómo influye la percepción de inseguridad en la percepción del desempeño del gobierno?

1.1.1 Evaluación del trabajo presidencial

La *variable dependiente* de este estudio es el nivel de aprobación de la ciudadanía respecto a la manera en que el actual gobierno se ha desempeñado. Es importante distinguir entre la aprobación presidencial general y la evaluación ciudadana del desempeño en áreas específicas de gobierno. Este estudio se centra en la aprobación general que expresa la ciudadanía hacia la figura presidencial de Andrés Manuel López Obrador. Aunque sería valioso analizar la percepción ciudadana sobre áreas concretas de su gestión, esta tesis se enfoca en la aprobación presidencial en términos generales, tanto por limitaciones de información como por un interés específico en comprender cómo se forma esa evaluación global.

Los presidentes necesitan un grado significativo de apoyo social para llevar a cabo con éxito intervenciones políticas en materia de seguridad pública.²² De acuerdo con la literatura son varios los factores que determinan la evaluación ciudadana del trabajo presidencial. El estudio de

²¹ La tasa de homicidios en México en el 2022 fue de 25 por 100,000 habitantes, con base en las cifras del INEGI. Ver: Crimen en México, “Reporte de mayo 2024 sobre la delincuencia en México”, <https://elcri.men> para más datos.

²² Vidal Romero *et al*, “Presidential Approval and Public Security in Mexico's War on Crime”, *Latin American Politics and Society*, num. 2, vol. 58, 2016, p. 101.

Somuano parte de una revisión hemerográfica, donde identifica los temas que los ciudadanos consideran más relevantes, y los divide en tres grupos generales: los factores económicos, la seguridad pública y la corrupción.²³

Hay extensa literatura, sobre todo enfocada al caso estadounidense, que sugiere que la dimensión económica tiende a pesar más que los demás aspectos en la percepción ciudadana del Ejecutivo.²⁴ Se trata de una serie de cuestiones económicas, desde el panorama nacional hasta las finanzas personales, que suelen ser determinantes para el electorado. El esfuerzo de Somuano, empero, va hacia el caso mexicano entre 2006 y 2018 para comprobar si, en efecto los factores económicos sostienen el mayor peso en la aprobación presidencial. Además, incorpora una dimensión de combate a la corrupción para observar su relevancia en la evaluación mexicana del presidente.²⁵

Aunado a lo anterior, los aspectos de seguridad pública y violencia han cobrado mayor relevancia, sobre todo a partir del segundo año de la administración de Felipe Calderón.²⁶ El tema de inseguridad, como el económico, es multidimensional. Somuano lo operacionaliza mediante tres dimensiones: la evaluación general del desempeño del presidente en los temas de seguridad, el impacto directo de la inseguridad en la vida del ciudadano y la percepción que tiene el individuo de la inseguridad en su colonia o barrio.²⁷

Los hallazgos de Somuano apuntan a que la aprobación ciudadana de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto tienen que ver con aspectos como el partidismo, que cobra una importancia

²³ Ma. Fernanda Somuano, “Aprobar al Presidente: una comparación entre Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto”, *Foro Internacional*, num. 4, vol. 58, 2018, p. 651.

²⁴ *Loc. cit.*

²⁵ *Ibid.*, p. 653.

²⁶ *Ibid.*, p. 652.

²⁷ *Loc. cit.*

clara en ambos casos.²⁸ Sostiene que aquéllos que se identifican con el partido del presidente tienen una mayor probabilidad de evaluarlo mejor que quienes simpatizan con partidos de la oposición o que quienes se consideran independientes (o apartidistas).²⁹ El efecto de la corrupción (o del manejo de la corrupción) también tiene un efecto generalizado para ambos casos, aunque menor al de los factores económicos y de seguridad pública.³⁰ Sin embargo, Somuano encontró que el tema económico prevaleció como el más importante en la evaluación del desempeño de los dos presidentes.³¹

Lo cierto es que además de los temas económicos, la cuestión de seguridad pública prevalece como una preocupación clave para los mexicanos y, por lo tanto, determinante de su aprobación o rechazo al Ejecutivo Federal. Romero, Magaloni y Díaz-Cayeros argumentan que un alto nivel de aprobación puede impulsar la colaboración de los ciudadanos en la lucha contra el crimen, pues pueden fungir un papel como proveedores de información y también reducir sus incentivos para ayudar encubiertamente a los criminales.³² Financiar e implementar las políticas que prefieren es más fácil para un mandatario con altos niveles de popularidad, ya que tiene más influencia para negociar el apoyo y la colaboración de las autoridades subnacionales y los partidos de oposición en la legislatura.³³ En este contexto, los autores sostienen que el apoyo a un presidente es una condición necesaria para la implementación exitosa de una política de seguridad pública.³⁴ Por este motivo, la aprobación presidencial es una dimensión tan importante de estudiar bajo contextos donde el manejo de seguridad es relevante.

²⁸ *Ibid.*, p. 661.

²⁹ *Loc. cit.*

³⁰ *Loc. cit.*

³¹ *Ibid.*, p. 662.

³² Vidal Romero *et al.*, “Presidential Approval and Public Security in Mexico's War on Crime”, *Latin American Politics and Society*, num. 2, vol. 58, 2016, p. 101.

³³ *Loc. cit.*

³⁴ *Loc. cit.*

En su investigación, los autores arguyen que, cuando la seguridad pública es un tema de gran relevancia, la responsabilidad del presidente aumenta a los ojos del público. En este escenario, una intervención política, independientemente de la dirección de la política o de sus resultados concretos, que transmita la idea de que el Ejecutivo "está haciendo algo" en materia de seguridad pública tiende a generar respaldo ciudadano y aumentar la aprobación presidencial.³⁵ Parto, entonces, del supuesto de que altos niveles de aprobación hacia la figura presidencial reflejan, al menos en parte, una percepción de que el gobierno está actuando frente al problema de inseguridad, más allá de resultados objetivos.³⁶

En países con altos niveles de inseguridad, la frustración de la ciudadanía puede incentivar a que los gobernantes tomen medidas de corte más duro y punitivo.³⁷ Comúnmente conocidas como estrategias de *mano dura*, representan una tendencia más radical de represión del crimen por medio de un puño de hierro y, donde, según Alisha Holland, se utiliza la debilidad institucional para socavar los principios básicos de las reformas judiciales de la "tercera ola".³⁸ En línea con el hartazgo de la ciudadanía, por experimentar constantes amenazas por parte de actores criminales o situaciones de alta inseguridad, se ha observado que las personas prefieren una toma de decisiones más unidireccional y fuerte por parte del gobierno, que una más democrática, suave y participativa.³⁹ Casi como si las personas buscaran ayuda y una salida rápida a lo que se enfrentan frenéticamente. Y, aunque tiene sentido que la urgencia y la preocupación plaguen las solicitudes populares, la mano dura se puede caracterizar de mejor manera como una tríada de reformas de justicia penal que promueven la comisión discrecional de delitos, restringe los derechos al debido

³⁵ *Ibid.*, p. 101.

³⁶ *Ibid.*, pp. 115 - 117.

³⁷ Alisha C. Holland, "Right on Crime? Conservative Parties and Mano Dura Policies in El Salvador", *Latin American Research Review*, 2010, p. 46.

³⁸ *Loc. cit.*

³⁹ *Loc. cit.*

proceso e involucran a los militares en la vigilancia policial.⁴⁰ Las políticas de mano dura, en esencia, son medidas formales que abren puerta a un abuso informal.⁴¹

La militarización de la seguridad pública resulta problemática por una serie de factores. Con estas políticas, se vuelve más común, en vez de una excepción, la detención de personas con base en juicios discrecionales, misma que vulnera la garantía y protección de derechos humanos.⁴² Casos que ponen lo anterior de manifiesto son varios en América Latina. El Salvador es, quizás, el ejemplo estelar de esto.⁴³ La popularidad de estas detenciones, inmersas en discrecionalidades, tiende a sustentarse en un discurso que se justifica al atribuir la inseguridad a alta impunidad previa, corrupción y poca atención a los más vulnerables frente al crimen.⁴⁴ La participación de las Fuerzas Armadas en la seguridad interna es un cambio radical que no se puede ignorar con respecto a la separación de asuntos militares de los civiles.⁴⁵ Aunada a la utilización de poder discrecional, la ambigüedad y el uso distintivo de los militares en las políticas de mano dura se produce cuando las Fuerzas Armadas asumen un papel más permanente en el control del crimen organizado, de pandillas o común.⁴⁶

I.1.2 Percepciones sobre la militarización de la seguridad pública

Con base en esta concepción más general de lo que implica la militarización de la seguridad pública, resulta pertinente analizar el apoyo popular a estas medidas. Así ha sido el caso salvadoreño, por ejemplo, donde, a pesar de ser una táctica arriesgada, ha recibido un respaldo

⁴⁰ *Loc. cit.*

⁴¹ *Loc. cit.*

⁴² *Loc. cit.*

⁴³ *Loc. cit.*

⁴⁴ *Ibid.*, p. 47.

⁴⁵ *Loc. cit.*

⁴⁶ *Ibid.*, p. 48.

apabullante.⁴⁷ Ante todo, vale la pena recordar que las políticas de mano dura han surgido en países con altos índices de delincuencia común y organizada.⁴⁸ Así es el caso de El Salvador, Ecuador, Honduras, Brasil y Colombia.⁴⁹ Diferentes investigaciones se han preocupado por explicar el apoyo a estas medidas; elaboro sobre esto en la siguiente sección. Me enfoco, empero, en el apoyo mexicano a las medidas de corte más duro en años recientes y su implicación sobre la evaluación del desempeño presidencial.

A partir del argumento de Romero *et al*, es interesante observar cómo, a pesar de la implementación de medidas de seguridad poco eficientes o que, incluso socavan el bienestar general, el sólo hecho de presentar alternativas para hacer frente a la inseguridad le brinda al presidente un apoyo popular significativo.⁵⁰ Para Holland, los temores a la delincuencia tampoco se traducen claramente en preferencias políticas. Las encuestas de opinión pública en América Latina sugieren que las preocupaciones por la delincuencia y la victimización están asociadas con un mayor apoyo a los gobiernos autoritarios, las restricciones al debido proceso, la justicia por mano propia y la acción policial al margen de la ley.⁵¹ En este sentido, es relevante observar si la ciudadanía se siente satisfecha en mayor o menor medida con un gobierno que escoge la militarización como solución a las preocupaciones y solicitudes populares.

En suma, el análisis que propongo surge de una preocupación por observar a qué responden las evaluaciones ciudadanas y sus perspectivas sobre la gestión gubernamental. En aras de obtener

⁴⁷ *Ibid.*, p. 49

⁴⁸ Robert Muggah and Katherine Aguirre Tobón, “Citizen security in Latin America: theories of crime and violence”, *Strategic Paper 33*, Igarape Institute, 2018. .

⁴⁹ Amnistía Internacional, “Américas: Intentos de militarización de la seguridad pública en la región son una amenaza para los derechos humanos”, *Amnistía Internacional*, 29 de noviembre de 2022, <https://www.amnesty.org/es/latest/news/2022/11/americas-intentos-de-militarizacion-de-la-seguridad-publica-en-la-region-son-una-amenaza-para-los-derechos-humanos>.

⁵⁰ Vidal Romero *et al*, “Presidential Approval and Public Security in Mexico's War on Crime”, *Latin American Politics and Society*, num. 2, vol. 58, 2016, p. 101.

⁵¹ *Ibid.*, p. 50.

una imagen más o menos clara sobre el sentimiento que la población tiene sobre la situación de seguridad pública y la forma en que se ha manejado, busco vincular esta dimensión a los altos niveles de aprobación presidencial. Aunado a lo anterior, cuestiono la percepción de la ciudadanía sobre la pertinencia del uso de las Fuerzas Armadas en las labores de prevención y combate a la inseguridad.

I. 2 Determinantes de la evaluación de una ciudadanía vulnerable a la delincuencia

Existe un cuerpo vasto de literatura que se asoma a las condiciones de seguridad de América Latina, región que ha llamado la atención de los expertos históricamente, y que propone explicaciones tanto teóricas como empíricas ante las coyunturas actuales. No obstante, el creciente interés por estos temas se debe no sólo a un aumento en la inseguridad de esa región, sino también a una clara tendencia de los recientes gobiernos a optar por estrategias cada vez más ofensivas, agresivas y hostiles. Como se ha visto, estudios previos sugieren que esta estrategia no es la más efectiva.⁵² Además, se ha documentado que las políticas de mano dura en contra del crimen tienen efectos diferenciados y perjudiciales para (ciertos) sectores poblacionales. No obstante, estas estrategias a menudo resultan ampliamente populares.⁵³

La literatura existente brinda distintas explicaciones a la percepción pública del manejo de la seguridad. Estas explicaciones, en esencia, proponen mecanismos sobre cómo percibe la ciudadanía el manejo de la seguridad pública en contextos de alta violencia e inseguridad, desde distintas aproximaciones. Las explicaciones existentes se pueden dividir en tres tipos de razonamientos. Primero, algunas investigaciones atribuyen la dirección que toma la evaluación de la gestión de seguridad a los sentimientos de miedo y aversión al riesgo que las personas experimentan. Segundo, un conjunto de aproximaciones enfatiza cálculo de compensación, o *trade*

⁵² *Ibid.*, p. 46.

⁵³ *Ibid.*, p. 54.

off, entre los beneficios que reciben de las políticas de seguridad y los *costos* que estas pueden significar en la vida de los individuos. Tercero, existen las justificaciones al apoyo o reprobación de las estrategias de seguridad basadas en la ideología de los ciudadanos. A continuación, presento brevemente cada una de estas lógicas.

1.2.1. Miedo y aversión al riesgo

El miedo se asocia comúnmente con un aspecto individual, lejos de tener implicaciones sociales, y mucho menos políticas. Sin embargo, el miedo puede convertirse en un factor importante en la construcción de preferencias por políticas y candidatos, independientemente de lo que estas opciones puedan implicar en términos de valores democráticos. Brian J. Gerber y Grant W. Neely sostienen que el grado de riesgo que los individuos le asignan a ciertas situaciones o actividades, que implican posibles daños, ayuda a moldear sus actitudes hacia las políticas públicas sobre esas cuestiones.⁵⁴ Es decir que la forma en que un individuo percibe el riesgo tiene implicaciones políticas importantes.

Hay relativamente pocos estudios que explican cómo esas percepciones de riesgo influyen específicamente en las preferencias hacia políticas gubernamentales diseñadas para gestionar posibles peligros en cuanto a la seguridad pública. Gerber y Neely muestran que los ciudadanos utilizan el riesgo percibido de manera racional: un mayor riesgo percibido generalmente genera apoyo a un gobierno más proactivo en iniciativas dirigidas a gestionar o minimizar estos peligros potenciales.⁵⁵ Los autores prueban que esta relación entre sensación de riesgo y preferencia por una respuesta de política generalmente se mantiene, incluso cuando existen costos manifiestos para la población asociados a la intervención gubernamental.⁵⁶ La excepción, arguyen los autores,

⁵⁴ Brian J. Gerber y Grant W. Neely, "Perceived Risk and Citizen Preferences for Governmental Management of Routine Hazards", *The Policy Studies Journal*, vol. 33, num. 3, 2005, p. 395.

⁵⁵ *Ibid.*, p. 396.

⁵⁶ *Loc. cit.*

parece ser cuando los individuos saben menos sobre el ámbito de la cuestión sustantiva, pero esta dimensión se explora en subtemas siguientes.

En este sentido, vale la pena comprender la naturaleza del riesgo en la configuración de la preferencia política de un individuo. Establecer si las percepciones de riesgo contribuyen de forma independiente al apoyo de un individuo a las políticas gubernamentales ayuda a explicar cómo ve el público la gestión gubernamental de los peligros en general. Y tener en cuenta las actitudes de los ciudadanos hacia las respuestas gubernamentales a los peligros que se encuentran habitualmente ilumina la relevancia política de las percepciones de riesgo en la vida diaria de los individuos.⁵⁷ Es decir, si bien es claro que la ciudadanía tiende a formar sus opiniones sobre la gestión gubernamental en función de los riesgos que considera más cercanos y potenciales, es importante también analizar el proceso completo de la construcción de preferencias por políticas que combatan dicho riesgo.

Hay cuatro factores clave que reconocen los autores como determinantes de las preferencias por políticas que gestionen directamente los riesgos.⁵⁸ Dicen los autores, la preferencia de un individuo por la acción gubernamental para abordar diversos peligros potenciales es una función de: a) confianza, tanto en términos de confianza general en el gobierno como en la experiencia política de los funcionarios públicos y especialistas; b) ideología política; c) grado de conciencia sobre el tema; y d) el papel del riesgo percibido en sí.⁵⁹ Con base en esto, esperan que a medida que aumenta la confianza en el gobierno, también aumenta el apoyo a la intervención gubernamental para abordar un peligro. Este efecto es el mismo para la conciencia e información del problema. Además, si la ideología se liberaliza, el apoyo a la intervención gubernamental en

⁵⁷ *Ibid.*, p. 397.

⁵⁸ *Ibid.*, p. 398.

⁵⁹ *Ibid.*, p. 399.

un ámbito político se incrementa. Y, de igual forma, en tanto que la percepción de la gravedad de los peligros aumenta, así también el apoyo a la intervención gubernamental.⁶⁰

Vale la pena mencionar que, en los modelos propuestos, los autores se percatan de que el tipo de riesgo percibido es clave. A partir de su análisis, los autores concluyen que, en el área de la política criminal, tanto la confianza del gobierno como la competencia percibida de los funcionarios son importantes para explicar las preferencias de los ciudadanos por más instancias de aplicación de la ley.⁶¹ Lo interesante de sus hallazgos es que la influencia de la ideología y el nivel de conocimiento que los ciudadanos tienen del tema están estrechamente relacionados. Es probable que la ideología afecte las preferencias políticas a medida que la complejidad técnica de un tema disminuye, porque existe un punto de referencia experiencial y, por lo tanto, los individuos utilizan un marco ideológico para interpretar eventos. En breve, la influencia ideológica, arguyen, es más evidente cuando se aborda un peligro, cuando los temas son más cercanos, conocidos y familiares.⁶²

Un segundo análisis basado en el miedo y en la percepción de amenazas de la ciudadanía sirve como base para esta investigación. Leonie Huddy *et al*, aunque basados en las experiencias ciudadanas después de los eventos de septiembre 11 en Estados Unidos, exploran no sólo las reacciones políticas ante las amenazas, sino también cómo la sensación de seguridad interactúa con la amenaza para influir en el apoyo a las políticas de seguridad nacional. La amenaza no sólo motiva conductas protectoras, sino que también promueve el apoyo a políticas gubernamentales protectoras.⁶³ Y, sobre todo, los individuos, ante una percepción de amenaza y una sensación de

⁶⁰ *Ibid.*, pp. 400 – 404.

⁶¹ *Ibid.*, p. 408.

⁶² *Loc. cit.*

⁶³ Leonie Huddy *et al.*, “The Political Consequences of Perceived Threat and Felt Insecurity”, *The Annals of the American Academy of Political and Social Science*, vol. 614, 2007, p. 131.

miedo pueden preferir renunciar a ciertas libertades, que continuar coexistiendo con la posibilidad de un riesgo.⁶⁴

El estudio sugiere que esto depende centralmente de la experiencia combinada de amenaza e inseguridad. Según los datos que proponen, una sensación de inseguridad personal juega un papel central en la disposición a perder libertades personales en respuesta a una amenaza externa.⁶⁵ A partir de esta idea, suponen que en la medida en que los ciudadanos se sienten inseguros y experimentan miedo, demandan mayores políticas protectoras. En consecuencia, los actores gubernamentales inscriben en su agenda estrategias que cumplan con esta exigencia y por lo tanto, implementan políticas ofensivas. La sensación de seguridad juega un papel central en la forma en que las personas enfrentan eventos estresantes y, a su vez, se traduce en apoyo a políticas gubernamentales protectoras.⁶⁶ Y, aunque pueden resultar en métodos hostiles, la ciudadanía prefiere sacrificar algunas libertades individuales, con tal de que los riesgos disminuyan y el sentimiento de miedo cese.

1.2.2. Cálculo costos-beneficio de las políticas de seguridad

Existe otro cuerpo de literatura que propone que el apoyo a la actuación policial punitiva no está relacionado con valores conservadores sino que es una respuesta ante amenazas a la seguridad material.⁶⁷ Que, de hecho, va de acuerdo con lo argumentado por Laterzo: la ideología a secas no es suficiente para entender las percepciones ciudadanas en cuanto a temas de seguridad, es necesario considerar factores que tengan que ver con el contacto que se tiene con la situación

⁶⁴ Ibid., p. 135.

⁶⁵ Ibid., p. 150.

⁶⁶ Loc. cit.

⁶⁷ Lucía Tiscornia y Verónica Pérez Bentancur, “Dilemmas of substitution: Why the urban poor support punitive policing in a Latin American city”, *Journal of Urban Affairs*, 2022, <https://doi.org/10.1080/07352166.2022.2112902>, p. 2.

de inseguridad, en general. Lucía Tiscornia y Verónica Pérez Bentancur observan que, a pesar de haber niveles muy desiguales de violencia en América Latina, e incluso dentro de los países, hay una demanda bastante alta de políticas que gestionen y hagan frente a la crisis de seguridad general. En este contexto, las estrategias gubernamentales destinadas a combatir el crimen han privilegiado las prácticas punitivas. La actuación punitiva -el uso sistemático y preferencial de la fuerza orientada al castigo- ha recibido un amplio apoyo en la opinión pública en gran parte de América Latina.⁶⁸

Aunque varias investigaciones han demostrado que las políticas punitivas tienen efectos diferenciados en la sociedad -que tienen que ver con ciertas características socioeconómicas y demográficas de la población, en la mayoría de los casos- las estrategias ofensivas y agresivas se tienden a justificar como un mal necesario para reducir la incidencia del crimen y la violencia, incluso cuando amenaza con socavar los derechos individuales y a pesar de la falta de evidencia de su eficacia para reducir el crimen y la violencia.⁶⁹ En este sentido, lo lógico sería que las personas que sufren consecuencias negativas, los daños colaterales, de estas políticas tuvieran una clara preferencia en contra de ellas. Sin embargo, la evidencia sugiere que el apoyo a las prácticas punitivas no se ve amenazado, ni siquiera cuando son perjudiciales para sectores de la población.⁷⁰

Con base en esta idea, las autoras teorizan un mecanismo para explicar esta percepción casi generalizada de los ciudadanos. Tiscornia y Pérez Bentancur sostienen que los ciudadanos se enfrentan a un *dilema de sustitución*.⁷¹ En breve, el deseo de no ser víctimas del crimen los lleva a preferir estrategias de seguridad punitivas, aun cuando pueden sufrir las consecuencias negativas. Esto, en esencia, tiene que ver con la sensación de amenaza y miedo a la violencia y el crimen de

⁶⁸ *Ibid.*, p. 1.

⁶⁹ *Loc. cit.*

⁷⁰ *Ibid.*, p. 2.

⁷¹ *Loc. cit.*

actores ilícitos presente en los individuos. La necesidad de sentirse protegida lleva a la ciudadanía a hacer un cálculo, casi inconsciente, al encontrarse con el dilema de sustitución.

La implementación de estrategias de seguridad orientadas al castigo severo del crimen puede (y probablemente, según la evidencia, sí lo hará) implicar un daño a los individuos. No obstante, incluso estando conscientes de los efectos que estas medidas pueden tener sobre ellos, los ciudadanos prefieren tener una garantía de protección que tener que enfrentarse a la delincuencia y la violencia descontroladas. En este cálculo, las externalidades negativas, los efectos secundarios y los costos de las políticas punitivas son menores que los beneficios que perciben. Por lo tanto, para los ciudadanos es lógica la compensación y ven conveniente optar por candidatos y políticas que castiguen el crimen con dureza y prometan lidiar con la inseguridad general.

1.2.3. Posiciones ideológicas y combate a la inseguridad

La ideología de los individuos también es un factor determinante en los procesos de evaluación, en las formaciones de preferencias y en la manera en que se percibe el actuar gubernamental. El apoyo popular a políticas de *mano dura* suele estar profundamente asociada a una ideología conservadora, que privilegia una visión punitiva y confrontativa hacia el crimen. No obstante, en tiempos recientes se ha observado que el apoyo a estrategias de este corte rebasa los límites imaginarios de la ideología: conservadores y progresistas optan por propuestas que castiguen fuertemente el crimen, a pesar de las implicaciones sociales que esto pueda tener. América Latina es un caso claro que pone de manifiesto la popularidad de las estrategias ofensivas en la gestión de la seguridad pública.

Isabel G. Laterzo presenta el caso de Argentina y Brasil, países donde -con niveles de violencia y crimen variados- el electorado optó por candidatos que se mostraran fuertes y agresivos

en contra de las pandillas y grupos de crimen organizado. Sin embargo, llama la atención la elección casi uniforme a través de los distintos espectros ideológicos de la población. Dice la autora, un trabajo sobre las actitudes y el comportamiento de los votantes progresistas no esperaría un apoyo tan fuerte para un candidato punitivo y hostil; de hecho, estas propuestas deberían ser mayoritariamente populares entre los votantes conservadores y autoritarios.⁷² Sin embargo, sobre todo en el caso de América Latina, es notorio que los votantes con tendencias más progresistas sí privilegian el voto por candidatos que son considerablemente conservadores en cuestiones de seguridad y manejo del crimen.⁷³

Llama la atención no sólo el surgimiento de candidatos cada vez más punitivos, sino que obtengan un apoyo no condicionado a la ideología de los individuos, como se espera que sea el caso en casi todos los ámbitos. Laterzo argumenta que para comprender este comportamiento es imprescindible reconsiderar la forma en que interactúan la ideología y las preferencias por una política punitiva contra el crimen.⁷⁴ Por lo tanto, expone que los factores instrumentales pueden mediar el efecto de la ideología sobre las preferencias por candidatos punitivos entre los progresistas. Por factores instrumentales se refiere a las explicaciones -experiencias de victimización, percepciones del origen del crimen, desconfianza en las políticas ya implementadas- para entender las preferencias de políticas de seguridad.⁷⁵

Estos factores pueden y tienden a desencadenar sentimientos como la indignación moral, ira o miedo y pueden llevar a los ciudadanos a (re)considerar la eficacia de las políticas propuestas. Con base en estos elementos, los progresistas que, de otro modo no deberían apoyar a candidatos

⁷² Isabel G. Laterzo, “Progressive Ideology and Support for Punitive Crime Policy: Evidence from Argentina and Brazil”, *Comparative Political Studies*, vol. 57, num. 6, 2023, p. 1000.

⁷³ *Loc. cit.*

⁷⁴ *Ibid.*, p. 1001.

⁷⁵ *Loc. cit.*

punitivos, tienen más probabilidades de elegir a candidatos que proponen políticas de seguridad más agresivas.⁷⁶ Tras un análisis riguroso, Laterzo afirma que, en efecto, la popularidad de los políticos punitivos entre los ciudadanos no se debe a un aumento del conservadurismo en general.⁷⁷ En cambio, el alto nivel de apoyo a candidatos con propuestas de este tipo está claramente asociado a la mayoría de los factores instrumentales que afectan a los progresistas ideológicos.⁷⁸

En breve, la ideología de los ciudadanos está mediada por una serie de factores que, más bien, tienen que ver con experiencias y antecedentes. Es decir que, si bien la forma en que un ciudadano se identifique en un espectro ideológico arroja señales importantes sobre sus preferencias políticas, puede no ser una explicación suficiente para la percepción que tiene sobre el manejo de seguridad. Esto puede ser particularmente más notorio cuando la ciudadanía debe hacer un juicio inmerso en un ambiente de violencia, crimen e inseguridad, en general. En América Latina las divisiones ideológicas son claras e importantes, pero parece haber cierto consenso en las percepciones del manejo de la seguridad pública.⁷⁹ Las experiencias de victimización e inseguridad pueden llevar al desarrollo de nuevas identidades políticas, o a la redefinición de identidades políticas anteriores.⁸⁰ De igual manera, la percepción de que la inseguridad tiene que ver con grupos de crimen organizado o pandillas puede tener repercusiones en ciudadanos progresistas, que usualmente conciben a las políticas sociales como potencial solución.⁸¹

Si bien los ciudadanos conservadores suelen apoyar a candidatos punitivos independientemente de si estos factores instrumentales están en juego o no, la interacción de la ideología con otros catalizadores se vuelve aún más evidente. En este sentido, Laterzo comprueba

⁷⁶ *Loc. cit.*

⁷⁷ *Ibid.*, p. 1002.

⁷⁸ *Loc. cit.*

⁷⁹ *Ibid.*, p. 1006

⁸⁰ *Ibid.*, p. 1007.

⁸¹ *Loc. cit.*

que tanto las explicaciones instrumentales como las ideológicas juegan un papel en el apoyo a los candidatos punitivos. Es decir que los votantes están claramente clasificados ideológicamente según el apoyo a políticas y candidatos más agresivos cuando los factores instrumentales no están presentes. Sin embargo, a la luz de los factores instrumentales, los progresistas apoyan más a los candidatos punitivos, mientras que los conservadores suelen mantenerse firmes en sus preferencias.⁸²

I. 3 Partidos políticos, afinidades y evaluaciones sobre el desempeño gubernamental

La manera en la cual la ciudadanía percibe y procesa las cuestiones políticas está basada en distintos factores que tienen que ver con experiencias y vivencias individuales y colectivas, pero también con intereses, valores socioeconómicos y culturales, e identidades.⁸³ Contrario a lo que se supone comúnmente, los partidos políticos no sólo buscan ganar y derrotar a sus opositores en las elecciones, también son agentes que construyen interpretaciones de la realidad política, a la vez que exhiben sus propuestas como soluciones óptimas a ciertos problemas. En este sentido, no sólo elaboran estrategias para resolver problemas públicos, sino que moldean los temas en sí mismos. Los partidos diseñan categorías de cuestiones, jerarquizan los asuntos y comunican de tal manera que la ciudadanía tiene una exposición diferenciada a ciertas problemáticas. Pero la información que recibe el público ya ha sido curada y enmarcada de acuerdo con las ideas e inclinaciones del partido. En este sentido, es importante comprender cómo un ciudadano se identifica con un partido político y la manera en que forma sus preferencias políticas, así como sus percepciones sobre el gobierno.

⁸² *Ibid.*, p. 1022.

⁸³ *Ibid.*, p. 878.

Noam Lupu arguye que los apegos partidistas a menudo determinan no sólo cómo vota la gente, sino también cómo evalúan su gobierno.⁸⁴ Estos vínculos se desarrollan con el tiempo, se transmiten de padres a hijos y se adaptan o refuerzan a lo largo de la vida electoral de un individuo.⁸⁵ Como se ha expuesto, estas identidades están en constante contacto e interacción con factores exógenos al individuo, pero también con procesos internos, y en este diálogo continuo se determinan las actitudes y juicios que tiene una persona. Es decir, no sólo la evaluación del manejo gubernamental está en juego con otros factores, sino que la misma identidad partidista puede sufrir cambios debido a experiencias o cuestiones del individuo. En algunos casos, han surgido nuevos partidos políticos con el tiempo y con ellos, nuevas afinidades y percepciones ciudadanas.⁸⁶

El análisis de Lupu parte de teorías recientes del partidismo, como una identidad social, pero incorpora un elemento importante que tiene que ver con los ajustes comparativos.⁸⁷ Ese concepto sugiere que los individuos se autoclasifican en grupos de identidad no sólo cuando piensan que se parecen o encajan en ese grupo, sino también cuando piensan que su grupo difiere de otros grupos.⁸⁸ Lupu se refiere a las marcas partidistas, o branding, para referirse a las características ideológicas y visiones distintivas de los partidos. Las percepciones de los votantes sobre las marcas de los partidos están determinadas por observaciones del comportamiento del partido a lo largo del tiempo. Los ciudadanos tienen alguna concepción de la marca de un partido basada en experiencias pasadas y en las observaciones que hacen en el presente.⁸⁹ En este sentido,

⁸⁴ Noam Lupu, "Partisanship in Latin America", en Carlin, Ryan E. et al (eds.), *The Latin American Voter: Pursuing Representation and Accountability in Challenging Contexts*, University of Michigan Press, 2015, p. 226.

⁸⁵ *Loc. cit.*

⁸⁶ *Loc. cit.*

⁸⁷ Noam Lupu, "Party Brands and Partisanship: Theory with Evidence from a Survey Experiment in Argentina", en *American Journal of Political Science*, vol. 57, num. 1, 2013, p. 49.

⁸⁸ *Loc. cit.*

⁸⁹ *Ibid.*, p. 51.

Un votante sentirá la mayor afinidad con el partido cuyo partidario prototípico cree que se parece más a él, en relación con todos los demás partidos.

Como sucede con otras identidades sociales, la identidad partidista está determinada por la semejanza o ajuste entre la imagen que el votante tiene de sí mismo y su imagen del prototipo del partido.⁹⁰ Pero también tiene que ver con cómo observa a las demás opciones de partidos. Es decir, se trata del grado en que un votante cree que se parece al prototipo de un grupo y difiere del de otro grupo. Por lo tanto, un ciudadano se siente más apegado a un partido cuando su prototipo se parezca más a él y los de otros partidos sean muy diferentes.⁹¹ El modelo de las marcas de los partidos sugiere, entonces, que el partidismo responde a las acciones de las elites partidistas observadas por los votantes.⁹² En breve, Lupu sostiene que los vínculos partidistas se basan no sólo en el conocimiento de las marcas de los partidos, sino también en la medida en que los votantes ven a los partidos como distintos entre sí. Las identidades sociales se construyen no sólo sobre la afinidad percibida con el endogrupo sino también sobre las diferencias percibidas con los exogrupos.⁹³

De nuevo, las posiciones ideológicas intervienen en este proceso, pues influyen en los vínculos partidistas. Los ciudadanos tienden a identificarse con el partido ideológicamente más próximo a ellos. Sin embargo, quienes se encuentran en los extremos del espectro ideológico tienden a sentir afinidades mucho más fuertes con sus partidos que quienes se encuentran más en el centro del espectro.⁹⁴ Además, otros factores sistemáticos pueden reforzar el partidismo. La heterogeneidad social puede empujar a los ciudadanos a formar vínculos más fuertes con los

⁹⁰ *Ibid.*, p. 52.

⁹¹ *Loc. cit.*

⁹² *Loc. cit.*

⁹³ *Loc. cit.*

⁹⁴ Noam Lupu, "Partisanship in Latin America", en Carlin, Ryan E. et al (eds.), *The Latin American Voter: Pursuing Representation and Accountability in Challenging Contexts*, University of Michigan Press, 2015, p. 230.

partidos, por ejemplo.⁹⁵ En contextos marcados por divisiones socioeconómicas, culturales o regionales, los partidos tienden a representar intereses diferenciados de manera más visible.⁹⁶ Esta representación de grupos específicos fomenta vínculos afectivos más sólidos entre ciertos sectores de la población y los partidos. Así, el partidismo no sólo cumple una función instrumental o ideológica, sino también identitaria: funciona como un atajo cognitivo que permite a los ciudadanos interpretar la política desde un marco coherente con su pertenencia social. Green, Palmquist y Schickler argumentan que la identidad partidista se construye de manera similar a otras identidades sociales, como la religiosa o étnica, y tiende a mantenerse estable en el tiempo, reforzada por la pertenencia grupal.⁹⁷

De igual manera, la polarización partidaria puede aclarar las diferencias entre los partidos. Cuanto más alejados estén los partidos políticos, más fácil será para los ciudadanos distinguir entre las opciones. Y si los ciudadanos pueden distinguir más claramente los partidos, puede que les resulte más fácil formar un vínculo partidista.⁹⁸ Con base en esto, el partidismo es una cuestión clave e imprescindible de entender, pues tiene implicaciones importantes en el comportamiento político.⁹⁹ Más aún, la identidad partidista de un individuo puede elucidar una serie de características y rasgos de sus condiciones de vida, sus experiencias y de sus preferencias. Los partidos políticos en América Latina no sólo tienden a determinar las elecciones de voto entre los ciudadanos, sino que proveen al electorado de información sobre un abanico de cuestiones.

Los partidos son agentes que simplifican situaciones complejas, como pueden ser cuestiones y problemas políticos, y la presentan a un público de manera más sencilla, agregando

⁹⁵ *Ibid.*, p. 231.

⁹⁶ *Loc. cit.*

⁹⁷ Donald Green *et al.*, “Chapter 2: Partisan Groups as Objects of Identification”, en *Partisan hearts and minds: political parties and the social identities of voters*, New Haven, Yale University Press, 1961.

⁹⁸ *Loc. cit.*

⁹⁹ *Loc. cit.*

juicios y valores, ideas y perspectivas. De esta manera, se vuelve mucho más simple para la ciudadanía digerir la información y tomar decisiones. En esencia, la identidad partidista es un lente que funciona para evaluar el proceso de formación de percepciones de los individuos. La manera en que evalúan al gobierno, su desempeño y la gestión de ciertos problemas puede estar profundamente relacionado con la afinidad a cierto partido.

I.3.1 Afinidades partidistas conjugadas con escenarios de alta inseguridad

El apartado anterior sirve como recordatorio de las funciones de los partidos políticos y de la importancia del foco de afinidades partidistas. Con base en esas premisas, resulta pertinente hacer un análisis más específico, para comprobar si las identidades partidistas cristalizan estas evaluaciones de la misma manera o si demuestran un comportamiento diferenciado al estar inmersas en contextos de altos niveles de crimen y violencia. En breve, una vez que se sabe cómo el partidismo funciona como fuente de información y determinante de la evaluación de desempeño del gobierno, hay que insertarlo en un escenario más complejo, donde la delincuencia y la vulnerabilidad ciudadana también está en juego, para entender los efectos que puede tener sobre la aprobación o rechazo de la gestión gubernamental.

Una de las conclusiones más contundentes de estudios como el de Gerber y Neely es que los individuos no pueden trasladar efectivamente el riesgo percibido en el desarrollo de preferencias políticas cuando operan con información limitada sobre el fondo del problema.¹⁰⁰ Es decir que, si bien la sensación de peligro y miedo arrojan información importante al individuo, la manera en que se forma una preferencia política depende en gran medida, también de lo que la persona sabe sobre el problema. Lo mismo sucede bajo la perspectiva del cálculo de costos –

¹⁰⁰ Brian J. Gerber y Grant W. Neely, “Perceived Risk and Citizen Preferences for Governmental Management of Routine Hazards”, *The Policy Studies Journal*, vol. 33, num. 3, 2005, p. 409.

beneficios: el conocimiento que el ciudadano tiene sobre la cuestión de seguridad precisa lo que percibe como costos y lo que obtiene en retribución. Es aquí donde los partidos políticos y, en específico, el partidismo entra en juego, pues proveen una explicación para entender cómo obtienen información sobre ciertos temas y problemas los ciudadanos.

Shanto Iyengar hace un análisis sobre la atribución de responsabilidades por parte de la ciudadanía hacia el gobierno y utiliza tres predictores de opiniones: identificación partidista, orientación ideológica y conocimiento factual sobre el tema.¹⁰¹ En este sentido, su estudio sostiene que las diferencias partidistas caracterizarán las opiniones sobre el tema de los ciudadanos comunes y corrientes.¹⁰² Pero, al tratarse de temas más apremiantes, como lo es la seguridad pública, habría que comprobar que sea el mismo caso. Particularmente, sostengo que la identidad partidista de los ciudadanos ha sido un factor clave para la construcción de percepciones sobre el desempeño general y el manejo de la seguridad en el gobierno morenista. Con base en la evidencia presentada, intuyo que el mecanismo causal de este vínculo se asemeja a una relación de oferta y demanda.

Como sostienen las teorías sobre la formación de percepciones, hay una serie de cuestiones que un individuo toma en cuenta al evaluar una situación y construir una preferencia clara. En el ámbito de la seguridad, hay un componente claro que tiene que ver con las sensaciones de riesgo, peligro y miedo. En este sentido los altos niveles de crimen, violencia e inseguridad, pueden impulsar la demanda de que el gobierno implemente políticas que alivien estos sentimientos de temor y ansiedad. No obstante, las percepciones ciudadanas suelen estar influenciadas por otros factores, y uno de ellos es el peso que atribuyen a los mensajes y discursos que filtran la

¹⁰¹ Shanto Iyengar, "How Citizens Think about National Issues: A Matter of Responsibility", *American Journal of Political Science*, vol. 33, num. 4, 1989, p. 888.

¹⁰² *Loc. cit.*

información y contribuyen a la comprensión de los sucesos políticos. Los partidos políticos funcionan como un vehículo para comunicar de manera efectiva y sencilla la información que piden los ciudadanos; sin embargo, aunada siempre a cierto sesgo de valoración y de ideas.¹⁰³

Los gobiernos elaboran políticas que abordan las demandas de los votantes. Sin embargo, la manera en que presentan estas estrategias está influida por las orientaciones del partido gobernante. En este sentido, el tipo de medidas por las que el gobierno opta es justificada por medio de discursos e ideas que exhiben una perspectiva clara por parte de la élite partidista gobernante. Como se ha estudiado en la literatura, los partidos políticos cumplen la función de movilizar a su electorado en función de ciertos valores e ideales que resuenan o resultan más coherentes para ciertos individuos. De ahí que la diversidad de posiciones ideológicas en los partidos políticos resulte en el apoyo de ciertos sectores de la población.

Con base en esto, los partidos políticos desarrollan las propuestas de políticas a partir de lo que el electorado pide. Sin embargo, los partidos presentan sus proyectos con tintes ideológicos y sesgos evidentes, pues se trata de atender a un sector poblacional específico que, al recibir esa información, sea lógico continuar simpatizando con ellos. En este sentido, cuando la ciudadanía se encuentra sumergida en un clima de impunidad, crimen y violencia, resulta coherente que los partidos involucren en su agenda dichos temas, no sólo para ganar el apoyo de las personas, pero también para preservar el que ya tienen. La evaluación que tienen los ciudadanos de la seguridad pública, entonces, no es cosa menor, ya que la identificación con un partido u otro puede depender de ello. Si un partido político no sólo se enfoca en los temas más apremiantes, sino que, también, los presenta de forma tal que gana la confianza de un electorado preocupado, enojado, desconfiado

¹⁰³ Noam Lupu, “Partisanship in Latin America”, en Carlin, Ryan E. et al (eds.), *The Latin American Voter: Pursuing Representation and Accountability in Challenging Contexts*, University of Michigan Press, 2015, p. 226.

y exhausto, es razonable que la identificación partidista sea una determinante en la valoración del manejo de la seguridad pública.

I.4 Hipótesis de trabajo

La literatura que exploro ha provisto al análisis de las percepciones de una diversidad de focos, como la ideología y las sensaciones de riesgo, y se ha complejizado a partir de la integración de nuevas variables. Sin embargo, intuyo que, si bien las evaluaciones sobre la actuación del gobierno pueden ser entendidas a partir de un lente partidista, también es posible hacerlo con las valoraciones en cuanto a las estrategias desplegadas para la seguridad pública. En este sentido, es mi objetivo integrar las dimensiones sugeridas en la literatura con un análisis de identidades partidistas para examinar si existe un peso significativo de este rasgo. Así, concluir también a qué responden las percepciones ciudadanas en cuanto a la gestión gubernamental. Por lo tanto, formulo cuatro hipótesis que busco poner a prueba, para mostrar su interacción con la cuestión central del estudio: las afinidades partidistas como filtros para entender los temas públicos y evaluar la estrategia y desempeño gubernamental en tema de la seguridad.

En este sentido, desarrollo dos hipótesis que buscan analizar el efecto independiente de la exposición al crimen y violencia. Es decir que construyo dos hipótesis que no toman en cuenta a la identidad partidista de las personas, en aras de encontrar cómo los contextos de inseguridad moldean las percepciones sobre el trabajo presidencial. Para explorar la exposición a la inseguridad, utilizo dos dimensiones, de las cuales partes las dos hipótesis, para tener una idea más clara sobre el escenario de inseguridad y la vulnerabilidad ciudadana. Primero, utilizo las experiencias de victimización de las personas y, segundo, busco entender las percepciones que tienen sobre seguridad en su entorno inmediato (su vivienda o su localidad).

H1: Las personas que hayan sido víctimas del crimen y violencia serán menos propensas a evaluar positivamente el trabajo del Ejecutivo.

H2: Las personas que perciban a su entorno inseguro serán menos propensas a evaluar positivamente el trabajo del Ejecutivo.

Sin embargo, diseño dos hipótesis adicionales que buscan anclar a la variable independiente clave, la identidad partidista, como filtro principal de evaluación, aun cuando la ciudadanía esté expuesta al crimen y violencia. Como en la formulación anterior, parto de dos dimensiones de vulnerabilidad, reflejadas en cada una de las siguientes hipótesis. Así, bajo las condiciones actuales de inseguridad en México, para probar los efectos del filtro partidista, elaboro las primeras dos hipótesis.

H3: Las personas que se identifican con el partido del presidente (Morena) serán más propensas a evaluar positivamente el trabajo del Ejecutivo, independientemente de su experiencia de victimización.

H4: Las personas que se identifican con el partido del presidente (Morena) serán más propensas a evaluar positivamente el trabajo del Ejecutivo, independientemente de su percepción de inseguridad en su entorno (en su localidad o vivienda).

Por último, me parece pertinente, a partir de la literatura vinculada y de la que parto, analizar la confianza en las instituciones por parte de la ciudadanía. Como bien señalan Romero *et al*, gran parte de la literatura se ha centrado en evaluar la aprobación presidencial en relación con el desempeño del ejecutivo en materia de economía.¹⁰⁴ Son pocos los trabajos que vinculan la aprobación presidencial con la seguridad pública, probablemente porque el crimen tiende a

¹⁰⁴ Vidal Romero *et al*, “Presidential Approval and Public Security in Mexico's War on Crime”, *Latin American Politics and Society*, num. 2, vol. 58, 2016, p. 102.

relacionarse como responsabilidad de las autoridades locales. Vale la pena recordar que la literatura muestra que en ambientes plagados por violencia y donde la ciudadanía vive en perpetua inseguridad, los gobiernos tienden a implementar políticas de corte más agresivo e intervenciones duras para hacerle frente al crimen.¹⁰⁵ En coherencia con esto, la última hipótesis busca vincular el cuerpo de literatura sobre aprobación presidencial y los trabajos enfocados en contextos de altos niveles de inseguridad, con el partidismo como determinante en la evaluación ciudadana. En este sentido, dada la actual presencia de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública, bajo la estrategia desplegada por el gobierno morenista, esbozo la siguiente hipótesis.

H5: Los ciudadanos que reporten tener una mayor confianza en las Fuerzas Armadas y que se identifiquen con Morena, serán más propensos a tener mayores niveles de aprobación del trabajo del Ejecutivo, en comparación con aquellos que no se identifiquen con el partido.

I.5 Conclusiones

Este primer capítulo sirve como una base teórica, que parte de los estudios más claros en tres áreas fundamentales: trabajos de aprobación presidencial, de manejo y exposición ciudadana a la inseguridad pública y del partidismo como determinante evaluador. Con base en esto, elaboro la pregunta de investigación de la cual parto para argüir que la identidad partidista funciona como filtro de las percepciones ciudadanas de la situación de inseguridad e influye en la aprobación de la gestión presidencial. A partir de una revisión a detalle de investigaciones previas, también describo la importancia sobre la popularidad presidencial de las estrategias de seguridad para hacer frente a los altos niveles de crimen y violencia. Con base en esto, tomo un cuerpo de literatura que se enfoca en la manera en que la inseguridad moldea las percepciones de las personas y cómo su

¹⁰⁵ Alisha C. Holland, “Right on Crime? Conservative Parties and Mano Dura Policies in El Salvador”, *Latin American Research Review*, 2010, p. 46.

exposición a la delincuencia interactúa con otras variables para formar sus criterios de evaluación. En mi estudio me enfoco, particularmente, en la identidad partidista de la ciudadanía mexicana en el sexenio de López Obrador para explicar su alto grado de aprobación a pesar de la gravedad del asunto de seguridad pública.

Esbozo, entonces, cinco hipótesis, donde las últimas tres buscan vincular al partidismo con la exposición al crimen y violencia (tomo dos dimensiones: experiencias de victimización y percepción de inseguridad en el entorno inmediato), pero también con la confianza institucional (particularmente, en las Fuerzas Armadas) y en la percepción de corrupción en el funcionariado. A partir de esto, el siguiente capítulo provee un análisis de corte más contextual. Me propongo presentar la relevancia de las identidades partidistas, así como el uso militarizado de la seguridad pública. Sin embargo, inserto mi investigación en el escenario de inseguridad en la región de América Latina y en las percepciones ciudadanas al respecto. Elaboro también sobre las últimas dos décadas y media de gestión gubernamental en México. De ahí que realizo una descripción de la forma en que AMLO decidió hacer frente a la crisis de inseguridad en el país, en comparación con sus antecesores.

Capítulo II. Inseguridad, gestión y partidismo: evidencia de América Latina y México

Es importante contextualizar la problemática planteada en esta investigación. Por lo tanto, este segundo capítulo sirve como una suerte de apartado contextual, que identifica las características más importantes del contexto de inseguridad en México en los últimos años, pero también en América Latina. En este sentido, sitúo la gestión gubernamental de la región en el inicio del nuevo siglo hasta 2024. A partir de esto, esta segunda sección se divide en tres partes principales.

En primer lugar, diseño un primer apartado donde hago una revisión del caso de América Latina. Aquí, plasmo datos de reportes que resultan útiles para identificar el escenario de crimen y violencia en el que se encuentra la región. Además, expongo algunos de los argumentos existentes sobre la situación de inseguridad y su respectivo manejo. Aunada a esta perspectiva general, incluyo datos, visualizaciones y el panorama de la opinión pública de la ciudadanía de América Latina al respecto del manejo de seguridad pública en la región y en sus países.

Una segunda sección tiene como objetivos contextualizar la situación específica de la gestión gubernamental en México inmerso en contextos de alta violencia e inseguridad, a partir de la transición democrática, pero hasta antes del inicio del sexenio morenista. Con base en esto, realizo una breve descripción de cómo la alternancia política tras la transición democrática de 2000 afectó la gestión de la seguridad pública en México. Esbozo un tercer punto dedicado a la gestión de Andrés Manuel López Obrador, en específico en cuestiones de seguridad pública, que, en esencia, captura el escenario político y social del periodo de interés. En este sentido, no sólo recapitulo las políticas de seguridad que se han puesto en marcha durante su sexenio, sino que, también, asigno una sección específica al análisis de sus propuestas de campaña y como presidente

electo, más no en funciones. Esto, en aras de obtener un contraste claro entre las estrategias de seguridad plasmadas en la retórica de campaña y en el discurso del mandatario y las políticas que, en cambio, se implementaron. Me fijo también en las justificaciones que le precedieron a estas últimas.

Por último, dedico una sección a la relevancia actual del partidismo en México. En este sentido, integro estudios que han resaltado a la afinidad partidista como determinante en distintas dimensiones de evaluación en el contexto mexicano. Los estudios plasmados en esta última sección del capítulo demuestran que la identidad partidista de la ciudadanía mexicana no debe pasarse por alto en el análisis de opinión pública. Este último apartado funciona como transición al tercer capítulo, que se enfoca en la opinión pública mexicana durante el primer sexenio morenista y su relación con los altos niveles de crimen y violencia.

II.1 Crimen, violencia y estrategias de manejo de seguridad en América Latina

Para analizar la evolución de las estrategias de seguridad en México y posteriormente, las actitudes ciudadanas al respecto, es necesario situar el incremento en la violencia criminal en un contexto regional más amplio. Diversos autores señalan que América Latina está sumergida en una crisis sostenida de violencia caracterizada por la constante incapacidad de los gobiernos para resolverla.¹⁰⁶ En 2018, América Latina exhibió las tasas de homicidios más altas del mundo. La región tiene solo el 8% de la población mundial, pero el 33% de sus asesinatos.¹⁰⁷ De hecho, mientras que en un nivel internacional las tasas de homicidios se estabilizaron con una tendencia

¹⁰⁶ Magaly Sánchez, "Insecurity and Violence as a New Power Relation in Latin America", *The Annals of the American Academy of Political and Social Science*, Jul., 2006, Vol. 606, p. 181.

¹⁰⁷ Robert Muggah and Katherine Aguirre Tobón, "Citizen security in Latin America: theories of crime and violence", *Strategic Paper 33*, Igarape Institute, 2018, p. 23.

hacia la baja entre 2000 y 2015, se observó un incremento del 12% en América Latina.¹⁰⁸ En ciertos países de la región, como Brasil, Colombia, México y Honduras, esta tasa rebasa los niveles observados durante tiempos de guerra o conflictos civiles armados.

Las explicaciones sobre el origen y la lógica del aumento de la violencia criminal en la región varían según las teorías y escuelas de pensamiento. Una idea predominante es que en América Latina las sociedades enfrentan desigualdades enraizadas que han provocado cada vez mayor violencia.¹⁰⁹ Sánchez, por ejemplo, sostiene que la violencia en América Latina es consecuencia directa de las desigualdades subyacentes generadas por la imposición de políticas de reajuste económico, donde las personas desventajadas recurren al crimen como método de supervivencia.¹¹⁰ Esta explicación de corte estructural permite hacer una caracterización general del tipo de crimen predominante en la región. América Latina, por sus condiciones de profunda desigualdad estructural, ha generado condiciones que favorecen olas de crimen y violencia.¹¹¹

Ahora bien, la reproducción de la violencia en la región es un proceso complejo en el que participan grupos sociales organizados, conectados mediante redes de información tanto a nivel nacional, como internacional y que funcionan con sistemas semejantes a los de una empresa, que da lugar a una importante acumulación de capital.¹¹² Es a partir de una estructura de este tipo que se generan nuevas formas de violencia en América Latina y a mayor escala, que plantean desafíos significativos para los gobiernos regionales en términos del diseño e implementación de estrategias para hacerles frente. El escenario de combate a la inseguridad se dificulta aún más al considerar las interacciones y alianzas entre agentes estatales, grupos legales e ilegales.

¹⁰⁸ *Loc. cit.*

¹⁰⁹ *Loc. cit.*

¹¹⁰ *Loc. cit.*

¹¹¹ *Ibid.*, p. 182.

¹¹² *Ibid.*, p. 184.

Trabajos como el de Trejo y Ley sugieren que no se trata de dos actores distintos en esferas diferentes, sino que los grupos criminales coexisten con los actores estatales y sus esferas de acción se intersecan.¹¹³ En este sentido, los autores argumentan que cuando estas dos esferas se cruzan y los agentes estatales y los criminales se confabulan, la intersección crea una *zona gris de criminalidad* donde es posible el ascenso del crimen organizado.¹¹⁴ Es en esta zona gris donde la criminalidad florece y puede crecer y funcionar efectivamente.¹¹⁵ Fuera de la zona gris hay delincuentes comunes e individuales, pero no grupos de crimen organizado consolidados. En cambio, los agentes estatales que no actúan dentro de la zona gris, sostienen Trejo y Ley, son en realidad actores que hacen cumplir la ley. Estos pueden ser represivos, sobre todo cuando utilizan políticas de mano dura para combatir a los criminales, más no conviven con los grupos de delincuencia, como tal.¹¹⁶

En estos contextos caracterizados por profundas desigualdades y dinámicas de colusión entre agentes estatales y grupos criminales, las instituciones gubernamentales de seguridad pública pueden perder no sólo su poder coercitivo, sino también su legitimidad entre la ciudadanía.¹¹⁷ Es decir, se pone en tela de juicio el poder de control de la violencia por parte de la policía y la viabilidad de la procuración de justicia. América Latina ha sido un ejemplo claro del ciclo vicioso que esto produce, pues la incapacidad del Estado para controlar esa violencia y mantener el equilibrio social, ha permitido la creación de nuevos espacios en los que se perpetúa la inseguridad, la violencia y el terror.¹¹⁸

¹¹³ Sandra Ley y Guillermo Trejo, *Votes, Drugs, and Violence*, Cambridge University Press, 2020, p. 10.

¹¹⁴ *Ibid.*, p. 9.

¹¹⁵ *Loc. cit.*

¹¹⁶ *Loc. cit.*

¹¹⁷ Robert Muggah and Katherine Aguirre Tobón, “Citizen security in Latin America: theories of crime and violence”, *Strategic Paper 33*, Igarape Institute, 2018, p. 184.

¹¹⁸ *Ibid.*, p. 189

Este debilitamiento institucional tiene consecuencias profundas para el desarrollo de América Latina. El contexto de inseguridad afecta directamente el funcionamiento del Estado, la economía y el tejido social. Una de cada cuatro empresas considera que el crimen es un obstáculo rígido para hacer negocios: el costo de la violencia representó un 3.5% del PIB regional anual para 2024.¹¹⁹ Aunado a lo anterior, en áreas donde la incidencia del Estado se ha debilitado, así como su legitimidad, se ha dado la consolidación de gobernanza criminal: el 54% de los hogares de la región reportó, en 2020, la presencia de grupos delictivos locales y un 14% indicó que los grupos ejercen funciones de regulación o provisión de servicios.¹²⁰

Es preocupante que, si bien la explosión de la incidencia del crimen se ha notado a lo largo de toda América Latina, lo cierto es que no todos los sectores poblacionales sufren las consecuencias por igual. Ciertas poblaciones vulnerables son más afectadas que otras. Así es el caso de las mujeres, que para 2021, según la Organización Mundial de la Salud, una de cada tres mujeres había sido víctima de violencia física o sexual en su vida.¹²¹ O, bien, la juventud. frecuentemente reclutada y utilizada por grupos del crimen organizado, es uno de los sectores más afectados por la violencia. La tasa de homicidios entre personas de 20 a 25 años fue tres veces mayor que la del promedio poblacional en 2020, lo que refleja su alta exposición al riesgo y la vulnerabilidad estructural que enfrentan.¹²²

¹¹⁹ Banco Interamericano de Desarrollo, “Seguridad Ciudadana en América Latina y el Caribe”, BID, publicado el 7 de marzo de 2024, <https://www.iadb.org/es/noticias/seguridad-ciudadana-en-america-latina-y-el-caribe>.

¹²⁰ *Loc. cit.*

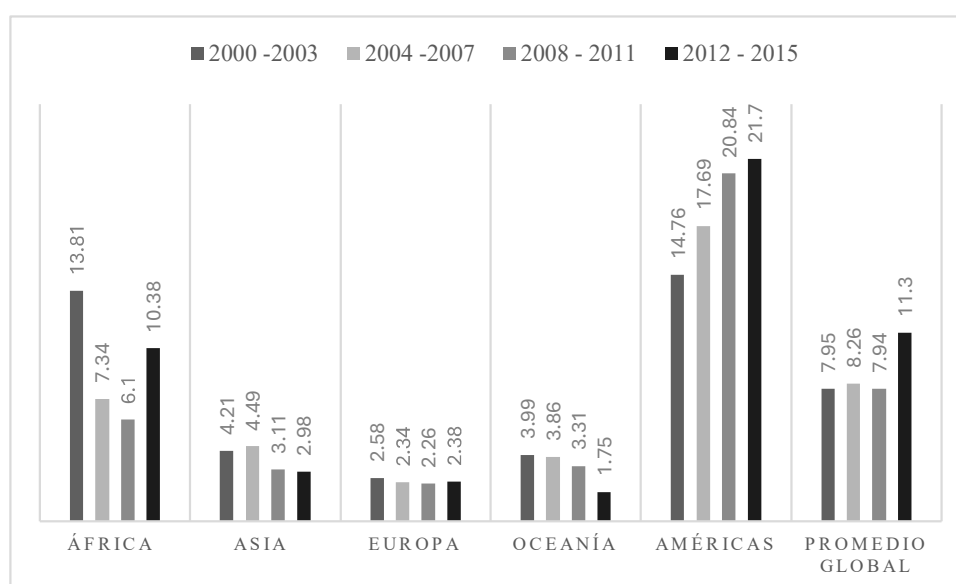
¹²¹ *Loc. cit.*

¹²² *Loc. cit.*

II.1.1 Percepciones ciudadanas frente a las tendencias de crimen y violencia en América Latina

Si bien es cierto que existe una heterogeneidad en los delitos violentos de la región, se observa una tendencia creciente de los niveles de violencia en varios países, lo que influye en las percepciones de la ciudadanía sobre sus condiciones de seguridad. Esto, en consecuencia, puede generar una percepción de falta de capacidad gubernamental, de una carencia en el bienestar de las personas y de falta de legitimidad de los agentes legales y formales de control social, así como del gobierno, en general. La persistencia del crimen crea una sensación de desconfianza entre los ciudadanos en las instituciones de gobierno y su insuficiencia de gestión en la seguridad pública. La figura I muestra la tasa de homicidios, por cada cien mil habitantes, documentada en los primeros quince años del nuevo siglo por el Instituto Agarapé. El Instituto realiza un monitoreo a nivel global de las tasas de homicidios y, por lo tanto, es posible observar cómo la región americana sobresale en todos los años, en comparación de las demás regiones. Sin embargo, desde 2008 y hasta 2015, la tasa de homicidios creció de forma notable, contraria a la tendencia mundial.

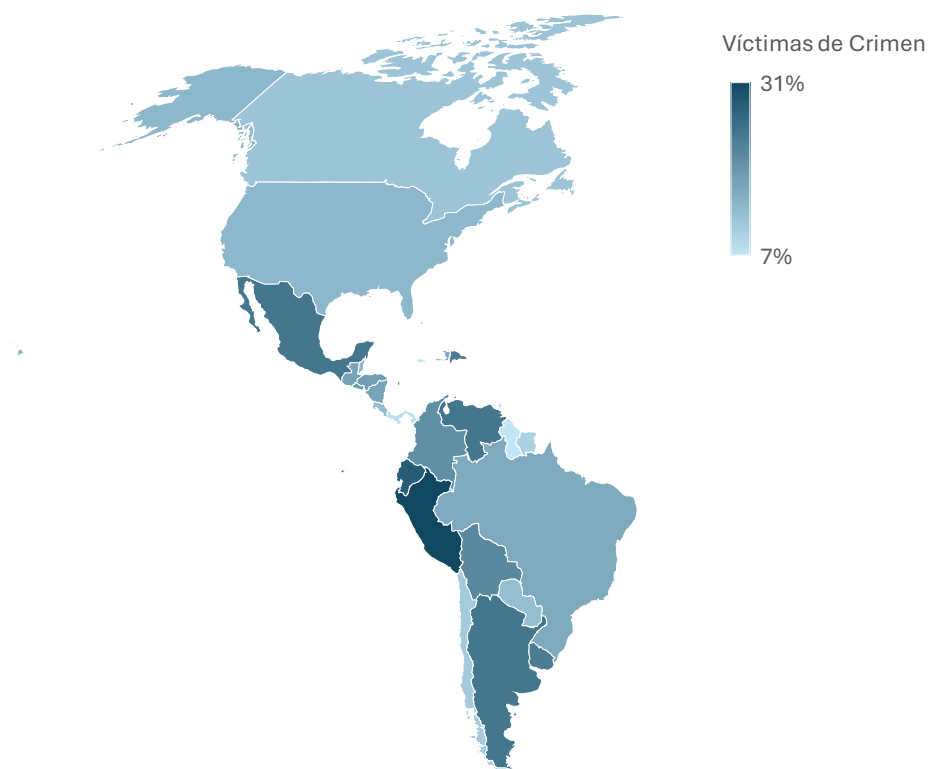
Figura I. Tasa de homicidios por cada 100,000 por región (2000 - 2015)



Fuente: Gráfico de elaboración propia con datos extraídos del Instituto Agarapé, *Homocide Monitor*.

Es relevante explorar las percepciones ciudadanas de inseguridad en este contexto para encontrar la influencia que tienen sobre la evaluación del trabajo presidencial. Datos de la encuesta regional Barómetro de las Américas (LAPOP) muestran que, para 2014, el reporte de victimización de crímenes era mucho mayor al que se hacía formalmente con las policías, los niveles de victimización en América Latina son extremadamente altos: el 15% de todos los encuestados declaró haber sido víctima de un delito.¹²³

Figura II. Porcentaje de personas en América Latina que fueron víctimas de un crimen en los últimos 12 meses (2014)



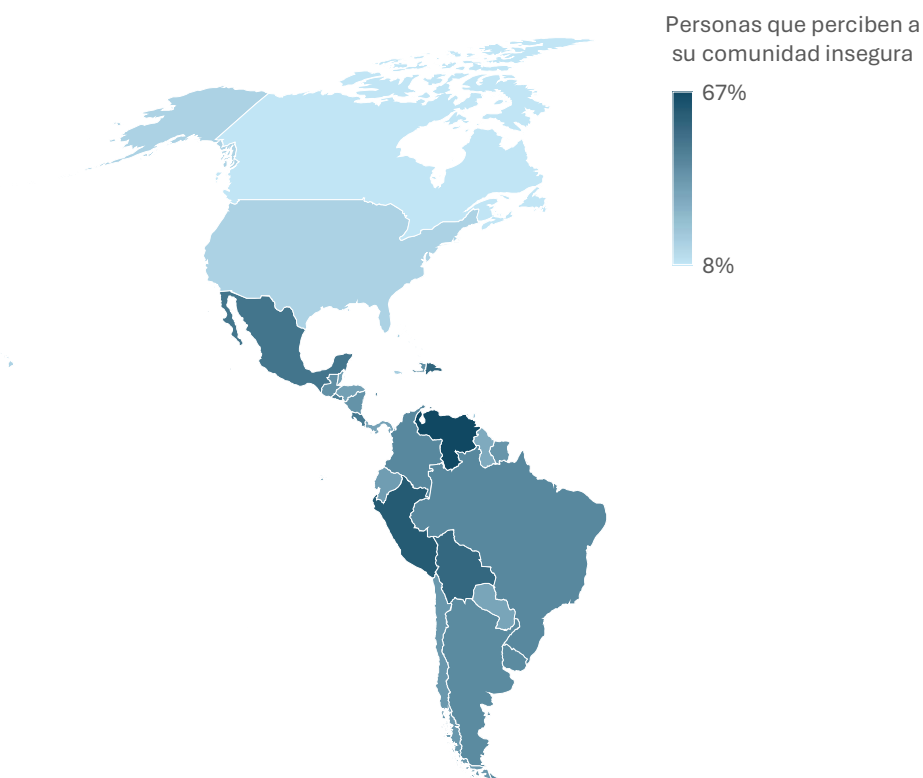
Fuente: Gráfico de elaboración propia con los datos mostrados en Robert Muggah and Katherine Aguirre Tobón, “Citizen security in Latin America: theories of crime and violence”, *Strategic Paper 33*, Igarape Institute, 2018, p. 31, a partir de los datos extraídos de LAPOP.

¹²³ Robert Muggah and Katherine Aguirre Tobón, “Citizen security in Latin America: theories of crime and violence”, *Strategic Paper 33*, Igarape Institute, 2018, p. 31.

El Barómetro de las Américas es una encuesta sobre Opinión Pública con respecto a cuestiones democráticas en la región americana (incluidas América del Norte, Central y del Sur, así como algunos países del Caribe). Se estudian 34 países y se miden las actitudes de las personas en edad de votar, así como sus percepciones y evaluaciones de las situaciones en sus países. El año 2014 es relevante dado que se incluye en los años donde la región americana tuvo un alza en la tasa de homicidios por cien mil habitantes (observar *Figura I*).

Las sensaciones de inseguridad generalizada permean hasta la esfera del vecindario, pues los ciudadanos latinoamericanos reportan, constantemente, no sentirse del todo seguros en los espacios donde habitan.¹²⁴ En 2014, el 34% de las personas encuestadas percibieron a su vecindario como un lugar inseguro, según los reportes de LAPOP.¹²⁵ Y, si bien es una tendencia clara a lo largo de la región, ciertos países resaltaron más que otros. En Venezuela, con el 49%, México, con el 46%, y Argentina, con el 41%, se encontraron los niveles más altos de victimización.¹²⁶

Figura III. Porcentaje de personas que perciben a su comunidad insegura en América Latina (2014)



¹²⁴ Ibid., p. 33.

¹²⁵ Loc. cit.

¹²⁶ Loc. cit.

Vale la pena aclarar, que con frecuencia hay una diferencia clara entre el delito denunciado y las percepciones de inseguridad.

Fuente: Gráfico de elaboración propia con los datos mostrados en Robert Muggah and Katherine Aguirre Tobón, “Citizen security in Latin America: theories of crime and violence”, *Strategic Paper 33*, Igarape Institute, 2018, p. 33, a partir de los datos extraídos de LAPOP.

América Latina no sólo se caracteriza por sus altos niveles de crimen y violencia, sino también por tener, de manera constante, los niveles más altos de miedo e inseguridad entre su población del mundo.¹²⁷ Entre 2008 y 2015, América Latina se posicionó internacionalmente como la región en la que los residentes se sentían menos seguros en sus comunidades.¹²⁸ Aunado a esto, cinco de los diez países más inseguros, según los ciudadanos, se encuentran en la región. Y, de manera contraria, cuando se les pregunta a los habitantes de estos países si se sentían seguros en sus países sólo el 14% de los venezolanos, el 36% de los salvadoreños, el 36% de los dominicanos, el 40% de los peruanos y el 40% de los mexicanos respondieron que sí.¹²⁹

A la par de estas tendencias de percepción de inseguridad, gran parte de la población latinoamericana carece de confianza en sus instituciones de protección civil y vigilancia. En 2015, sólo el 19% de los venezolanos afirmó tener confianza en la policía, la puntuación más baja en el nivel internacional. En comparación, el 32% de los afganos y el 32% de los sirios afirman tener confianza en su policía.¹³⁰ Uno de los motivos por los cuales hay una desconfianza clara en el manejo de la seguridad de América Latina es por los altos niveles de corrupción en los sistemas policiales y judiciales e impunidad.¹³¹ De manera más específica, la tasa de impunidad asociada con delitos violentos, como el homicidio, es extremadamente alta.¹³² Si en países europeos el 80%

¹²⁷ *Ibid.*, p. 35.

¹²⁸ *Loc. cit.*

¹²⁹ *Loc. cit.*

¹³⁰ *Loc. cit.*

¹³¹ *Loc. cit.*

¹³² *Loc. cit.*

de los homicidios se resuelven, en América Latina la cifra cae por abajo del 50% y, en algunos países, hasta el 8%.¹³³

Sin embargo, esta tendencia también se puede deber al ciclo vicioso de la actividad criminal en la región. La relativa fortaleza del gobierno y de las instituciones estatales también influye en la violencia criminal en varias ciudades de América Latina.¹³⁴ Cuando los despliegues de elementos de control social se hacen de manera más focalizada, como en el caso de Bogotá y Barranquilla, hay evidencia de que la tasa de homicidios tiende a disminuir.¹³⁵ Pero si el despliegue se hace de manera desbordada, como en Sao Paulo, la tasa tiende al alza y, por lo tanto, también la desconfianza de la ciudadanía.¹³⁶

La Figura IV muestra el nivel de confianza que tienen los ciudadanos de los países de América Latina en sus instituciones. Llama la atención que la principal institución en la cual los latinoamericanos confían es la Iglesia. De cierto modo, tiene sentido, dada la naturaleza religiosa y la mayoría católica y cristiana de la región. Sin embargo, vale la pena resaltar que las Fuerzas Armadas tienen el segundo lugar, antes que la Policía, con un nivel de confianza bastante alto. El gobierno, en cambio, ocupa el quinto lugar y los partidos políticos toman el último.

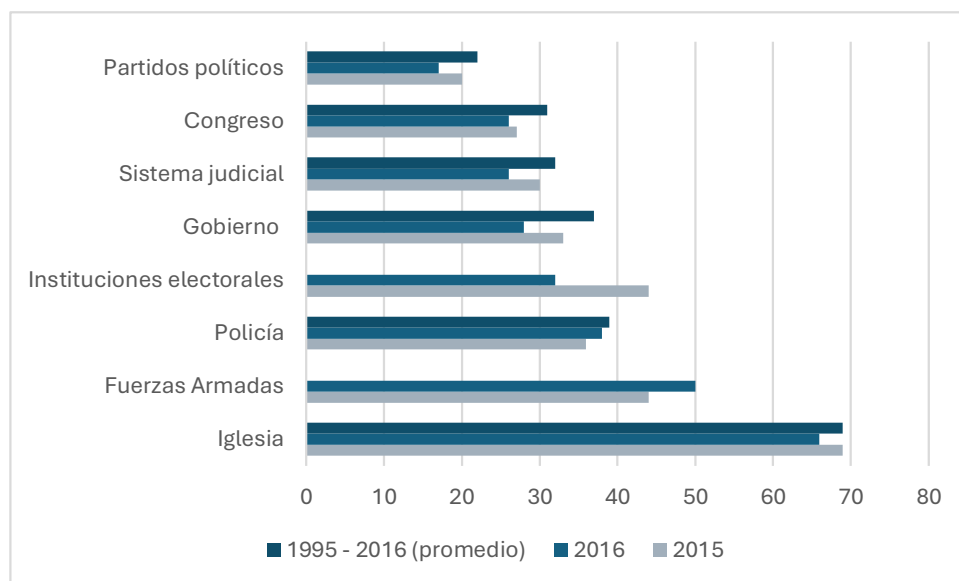
¹³³ *Loc. cit.*

¹³⁴ *Ibid.*, p. 38.

¹³⁵ *Loc. cit.*

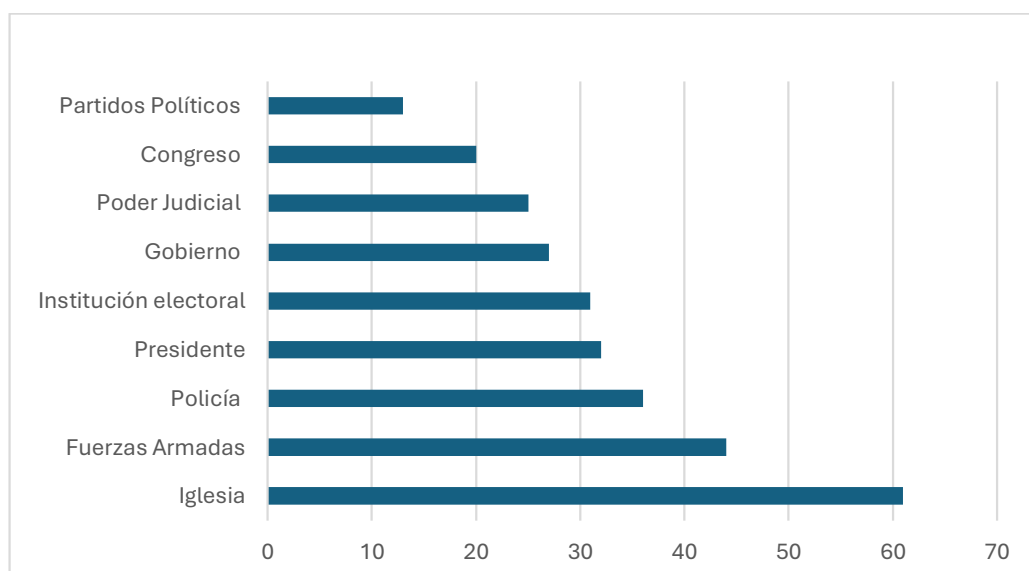
¹³⁶ *Loc. cit.*

Figura IV. Nivel de confianza ciudadana en instituciones de América Latina (2015 y 2016)



Fuente: Gráfico de elaboración propia, con los datos mostrados en Robert Muggah and Katherine Aguirre Tobón, “Citizen security in Latin America: theories of crime and violence”, *Strategic Paper* 33, Igarape Institute, 2018, p. 38, a partir de los datos extraídos del Latinobarómetro, 2016.

Figura V. Nivel de confianza ciudadana en instituciones de América Latina (2020)



Fuente: Gráfico de elaboración propia, con los datos mostrados en Corporación Latinobarómetro, “Reporte 2021”, *Latinobarómetro*, Santiago de Chile, 2021, p. 64.

Prueba de la baja confianza ciudadana en sus instituciones es el escaso número de denuncias sobre crimen y delitos. Como resultado de esta crisis de confianza de confianza institucional en la policía, la ciudadanía de América Latina recurre cada vez más a instituciones privadas, como a guardias de seguridad privados, para reforzar su seguridad.¹³⁷ No obstante, existe una clara tendencia en las actitudes de la población de la región que no es cuestión menor. Existe una aceptación generalizada de los enfoques punitivos para abordar el delito. Esto incluye solicitudes al gobierno —o a los partidos— para que se reduzca la edad de responsabilidad penal, dado que muchos jóvenes son los involucrados en el crimen organizado.¹³⁸ Pero llama la atención que ante estas peticiones y ante las coyunturas de grave violencia y crimen, han surgido en América Latina enfoques de no tolerancia, *mano dura* y militarización.

II.1.2 Estrategias de seguridad para hacer frente al crimen en América Latina

Ante el problema de la violencia y el crimen como red de actores e implicaciones complejas y la incapacidad de los gobiernos de responder de manera efectiva y garantizar el bienestar de la ciudadanía, los regímenes, incluso democráticos, recurren a medidas de corte más duro y punitivo. El Estado se vuelve cada vez menos capaz de negociar con los sectores sociales y políticos movilizadores y, por lo tanto, busca sostener su legitimidad ante ellos y ante sí mismo de alguna manera u otra.¹³⁹ Esto, según algunos autores, es una posible explicación para la creciente presencia de la milicia en las calles de América Latina.¹⁴⁰

La implementación de políticas de *mano dura* y de militarización tienen una consecuencia paradójica. En busca de mantener el orden democrático frente a alteraciones provocadas por el

¹³⁷ *Loc. cit.*

¹³⁸ *Loc. cit.*

¹³⁹ Magaly Sánchez, “Insecurity and Violence as a New Power Relation in Latin America”, *The Annals of the American Academy of Political and Social Science*, Jul., 2006, Vol. 606, p. 178.

¹⁴⁰ *Loc. cit.*

crimen o, en algunos casos, reformas poco populares, el régimen opta por el uso de la fuerza.¹⁴¹ Entonces, los Estados democráticos utilizan la violencia para mantener el control político y mantener estabilidad, relegando su propia ideología de democracia y derechos humanos.¹⁴² Por un lado, el incremento en el poder coercitivo estatal, cuando se utiliza para reprimir a la población en desacuerdo, resulta en más y mayor resistencia de las clases medias de la mano de varios segmentos de la población que han sido históricamente segregados en América Latina.¹⁴³ Por otro lado, empero, el uso punitivo de la fuerza para afrontar el crimen y la violencia ha cobrado relevancia entre las ciudadanía de América Latina.

Flores Macías y Zarkin explican esta leal aprobación de la ciudadanía al uso de las Fuerzas Armadas mediante un argumento que privilegia el uso de imágenes y el efecto de las características visuales. Lo que discuten los autores es que una característica central de la militarización vinculada a una mayor violencia –las armas militares– es, paradójicamente, un factor clave que explica las actitudes favorables de los ciudadanos.¹⁴⁴ Es decir que, con base en sus hallazgos, las armas y uniformes militares mejoran la percepción que existe de efectividad y de respeto por los civiles.¹⁴⁵ La ciudadanía asocia la vestimenta militar, así como su posesión sobre armas, con un mejor desempeño, una efectividad de la que, quizás, cuerpos “no tan profesionalizados” carecen.

La investigación de Flores Macías y Zarkin arroja evidencia sobre cómo la sociedad percibe y se relaciona con las Fuerzas Armadas en países plagados por violencia e inseguridad. Pero, quizás lo más importante, abre una discusión sobre los atributos específicos que hacen que las políticas punitivas, como la militarización, atraigan a los civiles independientemente de los

¹⁴¹ *Ibid.*, p. 179.

¹⁴² *Loc. cit.*

¹⁴³ *Loc. cit.*

¹⁴⁴ Gustavo Flores Macías y Jessica Zarkin, “Militarization and Perceptions of Law Enforcement in the Developing World: Evidence from a Conjoint Experiment in Mexico,” en *British Journal of Political Science*, 2022, p. 1377.

¹⁴⁵ *Ibid.*, 1378.

resultados.¹⁴⁶ Esto da lugar a la pertinencia de conceptos como el populismo punitivo. En el discurso, los gobiernos han justificado la implicación mayor de las Fuerzas Armadas señalando varias deficiencias de la policía y de los cuerpos civiles.¹⁴⁷ Se trata de una táctica que resalta constantemente la ineficacia de estos últimos, el desprecio por las libertades civiles y la corrupción.¹⁴⁸ Y es a partir de una retórica punitiva, que convence a la ciudadanía de la torpeza e impertinencia de la policía, que la implementación de una estrategia militar no sólo se vuelve fácil, pero también popular.¹⁴⁹

II.2 Alternancia democrática, el nuevo siglo y los altos niveles de crimen y violencia en México

La violencia en México, históricamente, ha puesto al manejo de la seguridad pública en el centro de las agendas políticas y de gobierno. Desde hace más de dos décadas, el país se ha sumergido en altos niveles de crimen e inseguridad, que ponen en riesgo la vida y el bienestar de la ciudadanía. México, al ser país productor y de tránsito de drogas, ha sido escenario ideal para las constantes batallas y riñas entre cárteles, sobre todo, desde 1997.¹⁵⁰ Y, por si fuera poco, al tiempo que la inseguridad incrementaba, sucedió el desvanecimiento del régimen autoritario del PRI. Es decir que el país, desde la década de 1990, se ha encontrado en constante cambio político y vulnerabilidad frente al control e incidencia de los agentes criminales.

La gobernanza de la seguridad en México, sostienen varios autores, tiende a asemejarse a otros países que tienen cifras de violencia parecidas.¹⁵¹ Sin embargo, hay una particularidad que

¹⁴⁶ *Loc. cit.*

¹⁴⁷ *Ibid.*, pp. 1378 – 1379.

¹⁴⁸ *Loc. cit.*

¹⁴⁹ *Loc. cit.*

¹⁵⁰ Keith Guzik, “Security a la Mexicana: on the particularities of security governance in Mexico’s War on Crime”, *Theory and Society*, vol. 42, num. 2, marzo 2013, p. 167.

¹⁵¹ *Ibid.*, p. 162.

vale mencionar: en México se han utilizado tácticas de vigilancia, leyes para combatir el crimen y demás estrategias basadas en tecnologías y políticas de innovación; pero, en el caso mexicano, estos mecanismos funcionan hacia adentro (enemigos internos), no hacia un enemigo externo como en otros países, en contra de ciertas prácticas económicas, políticas y culturales que son constitutivas de la sociedad mexicana en sí.¹⁵² De ahí que la gestión de la seguridad pública en México ha sido y permanece siendo poco entendida y mal atendida. En las siguientes secciones describo los manejos gubernamentales en cuestiones de seguridad pública de las últimas dos décadas y media en México.

II.2.1 Cambio político: contexto e implicaciones

Ante la primera victoria de un partido político distinto al hegemónico Partido Revolucionario Institucional (PRI), las ventanas de oportunidad para reformas y cambios profundos en el gobierno de México estaban abiertas. El inicio del siglo XXI trajo consigo un aire esperanzador en varios sentidos para el país. El cambio político, la transición votada, como la llama Mauricio Merino, prometía no sólo la democratización formalizada, sino también la reparación de daños perpetrados por los gobiernos priístas.¹⁵³ Con la transición democrática, el valor de sus sufragios no fue lo único que se le prometió a la ciudadanía, sino también una limpieza del régimen de corrupción, nuevas oportunidades, seguridad y bienestar general.

No obstante, la vulnerabilidad del gobierno frente a la delincuencia, sostienen algunos autores, quedó aún más expuesta dado el desmantelamiento del viejo y fuerte PRI.¹⁵⁴ Con base en

¹⁵² *Ibid.*, p. 163.

¹⁵³ Mauricio Merino, *La transición votada. Crítica a la interpretación del cambio político en México*, Fondo de Cultura Económica, México, 2003.

¹⁵⁴ Keith Guzik, "Security a la Mexicana: on the particularities of security governance in Mexico's War on Crime", *Theory and Society*, vol. 42, num. 2, marzo 2013, p.

esto, la gestión de la seguridad pública del país se convirtió, rápidamente, en un tema coyuntural, que a su vez evidenció las pocas capacidades de los nuevos mandatarios. Lo cierto es que, con la entrada del PAN al Ejecutivo Federal, “la retórica que se desplegó para enfrentar el pasado permite asegurar que el gobierno tomó las hipótesis más aceptadas dentro del debate creado por la justicia transicional sobre la verdad, la justicia y las reparaciones [...]”¹⁵⁵ Es decir que, a partir de una idea de un quiebre con el pasado injusto, represor y violento, los gobiernos del nuevo régimen democrático se mostraron bien intencionados y realmente motivados para hacer un cambio formal en el país. En este sentido, “la noción de verdad es el instrumento fundador de ‘nuevos’ pactos, pues conlleva la idea de una ‘renovación’ moral que pueda conformar la cultura política del gobierno en transición dejando atrás la ‘inmoralidad’ del pasado”.¹⁵⁶

En virtud de estos valores, los tres mandatarios que precedieron a Andrés Manuel López Obrador, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, encabezaron la administración del país durante dieciocho años que acarreaban consigo nociones de cambio y quiebre, en la retórica, pero sensaciones de que, en los hechos, la violencia e inseguridad se mantenían e, incluso, se acentuaban. En búsqueda de la legitimidad que un nuevo régimen necesita, las decisiones que se tomaron en cuestiones de seguridad han sido criticadas y cuestionadas por varios autores. Se sabe, con certidumbre, que a pesar de que el cambio político, por su naturaleza, despertó olas de inseguridad en el país, el incremento súbito y desproporcionado en la violencia durante estos tres sexenios se debe, en gran medida, al manejo de la seguridad pública en sí.

¹⁵⁵ Sergio Aguayo Quezada y Javier Treviño Rangel, “Fox y el pasado. La anatomía de una capitulación”, *Foro Internacional*, num. 4, 2007, p. 709.

¹⁵⁶ *Ibid.*, p. 712.

II.2.2 La gestión gubernamental y el manejo de la inseguridad (2000 – 2018)

Vicente Fox, el primer presidente panista, emprendió su administración con la publicación en el Diario Oficial de la Federación de la reforma de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, mediante la cual se decretaba la creación de la Secretaría de Seguridad Pública Federal.¹⁵⁷ Frente a un escenario de creciente inseguridad y violencia, Fox buscaba “desarrollar las políticas de seguridad pública; proponer una política federal contra la criminalidad, que comprendiera las normas, instrumentos y acciones para prevenir de manera eficaz la comisión de delitos, así como fomentar la participación ciudadana en la formulación de planes y programas de prevención en materia de delitos federales”.¹⁵⁸ En este sentido, la creación de una nueva instancia de gobierno dedicada a la prevención, regulación y combate al crimen, con un énfasis en el rol de la ciudadanía, pintaba como una alternativa viable y optimista para la resolución del problema de la inseguridad en el país.

El compromiso del presidente con la seguridad pública de México era claro. Más aún, en su Plan Nacional de Desarrollo 2000 – 2006, incluía un rubro denominado “Orden y respeto”. En este, la inseguridad se trató como un aspecto urgente y alarmante no solamente de la ciudadanía mexicana, pero también del nuevo gobierno.¹⁵⁹ Fox tenía un compromiso innegable, una obligación moral y política, “de enfrentar las violaciones a los derechos humanos en el régimen previo”.¹⁶⁰ En este sentido, el manejo de la seguridad de Fox se caracterizó por un esfuerzo por hacer una reparación de daños sustancial a la ciudadanía y mostrarle la capacidad de justicia y restauración del nuevo régimen.

¹⁵⁷ Héctor Chincoya Teutli, “De la seguridad pública a la política criminológica en México: 2000-2012 (los gobiernos del Partido Acción Nacional)”, *IUS*, num. 34, 2014, p. 68.

¹⁵⁸ *Loc. cit.*

¹⁵⁹ *Ibid.*, p. 70.

¹⁶⁰ Sergio Aguayo Quezada y Javier Treviño Rangel, “Fox y el pasado. La anatomía de una capitulación”, *Foro Internacional*, num. 4, 2007, p. 715.

La gestión de Fox comenzó con un escenario prometedor, con las condiciones ideales para lograr una ruptura con el pasado. Había un gran apoyo popular y el viejo régimen estaba debilitado y desconcertado por la derrota.¹⁶¹ El mandatario contempló cinco estrategias principales para gestionar la seguridad pública: prevenir el delito para garantizar la seguridad ciudadana, lograr la reforma integral del sistema de seguridad pública, combatir la corrupción, depurar y dignificar los cuerpos policiales, reestructurar integralmente el sistema penitenciario y, por último, promover la participación y organización ciudadanas en la prevención de delitos y faltas administrativas.¹⁶² Es claro que, para el inicio del gobierno de Fox, existía ya una noción generalizada de la ineficiencia de la policía para hacer frente a los agentes criminales, de la corrupción como fuente de esta ineficiencia y de la necesidad de reorganización general del sistema de seguridad pública.

Las reformas propuestas por el presidente Fox, empero, quedaron en el papel y realmente no se pusieron en práctica, quizás por los constantes frenos legislativos que encontró su administración, en general.¹⁶³ Si bien no fue un represor, no siguió las propuestas de su campaña, como la aplicación de una política integral para promover los derechos humanos y de consecuencias a los represores del régimen pasado.¹⁶⁴ En vez, se pronunció generoso y comprensivo con los involucrados más importantes en las injusticias del PRI, las Fuerzas Armadas. Sostuvo que, “nuestras Fuerzas Armadas [...] son las primeras en honrar las instituciones, en reconocer que nadie debe estar por encima de la ley y que hacer justicia no desacredita a un Ejército que es del pueblo y para el pueblo.”¹⁶⁵ En esencia, justificó la violencia perpetrada por las Fuerzas Armadas durante el régimen priísta, con el argumento de que sólo seguían las órdenes

¹⁶¹ *Ibid.*, p. 716.

¹⁶² *Ibid.*, pp. 70 – 71.

¹⁶³ *Ibid.*, p. 72.

¹⁶⁴ *Ibid.*, p. 709.

¹⁶⁵ *Ibid.*, p. 733.

presidenciales.¹⁶⁶ Tal como Hannah Arendt plasma la banalidad del mal, el Ejército mexicano “sólo estaba haciendo su trabajo”.¹⁶⁷

Frente a la inacción y actitud permisiva de la violencia por parte de Fox, como la falta de responsabilización de los crímenes del ejército, Felipe Calderón llegó a la presidencia del país con un escenario de inseguridad apabullante, pero también con una crisis de legitimidad, heredada de su dudoso triunfo electoral. Reynaldo Ortega y Fernanda Somuano sostienen, por lo tanto, que su sexenio no sólo será, muy probablemente, recordado como el más violento de los últimos cincuenta años, sino que su atropellada victoria en las casillas, de alguna manera, condicionó la evolución de su gestión.¹⁶⁸ Es bien sabido que la alternancia política en el 2000 trajo altas expectativas; sin embargo, también se produjo un aumento en la incidencia delictiva de los grupos de crimen organizado y narcotráfico.

En este sentido, Calderón asumió su cargo como presidente acompañado de un escenario de seguridad complejo, por decir lo menos.¹⁶⁹ Así, por un lado, el presidente tuvo que hacer frente al control territorial por parte del narcotráfico y resolver una guerra entre los grupos delictivos y cárteles. Y, por el otro, tuvo que atender los crecientes conflictos con Estados Unidos por la narcoviolencia en la frontera, dado “el flujo constante de drogas ilícitas hacia el norte y consumo en aumento considerable en México”.¹⁷⁰ Si bien el aumento en la violencia se veía desde años anteriores, se acentuó en el sexenio de Calderón, lo que terminó por caracterizar su periodo presidencial.

¹⁶⁶ *Ibid.*, p. 734.

¹⁶⁷ *Loc. cit.*

¹⁶⁸ Reynaldo Yunuen Ortega Ortiz y Ma. Fernanda Somuano Ventura, “Introducción: el periodo presidencial de Felipe Calderón Hinojosa”, Foro Internacional, núm. 1, 2015, p. 5.

¹⁶⁹ *Loc. cit.*

¹⁷⁰ *Loc. cit.*

El segundo mandatario panista no logró varias de las reformas que proponía, en materia de seguridad, específicamente. No logró que se aprobara el mando único policial, ni la creación de un nuevo código federal de procedimientos penales, pero tampoco le pudo brindar autonomía a la Procuraduría General de la República.¹⁷¹ Sin embargo, la creciente violencia provocada por las riñas entre los cárteles, llevaron al presidente a introducir una serie de medidas para romper con las organizaciones criminales.¹⁷² En su Programa Nacional de Seguridad Pública, subrayó estrategias como la coordinación interinstitucional entre los tres niveles de gobierno, el federal, el estatal y el municipal.¹⁷³ Se entiende, por esto, que existía ya un reconocimiento de la necesidad de brindarle atención a los municipios como entes vulnerables ante el crimen organizado, pero también de la importancia de la capacitación e innovación de los cuerpos de policía y técnicas de monitoreo.

No obstante, el manejo de la seguridad de Felipe Calderón se caracterizó por su enfoque más radical y de *mano dura* hacia el combate al crimen. Con varios objetivos, el presidente decidió implementar una estrategia de seguridad que marcaría todo su sexenio: la *Operación Conjunta Michoacán*.¹⁷⁴ La operación movilizó a cinco mil soldados y policías federales, “para acabar con una organización de narcotraficantes, La Familia Michoacana, que ya dominaba territorialmente una parte importante de ese estado gobernado por el PRD y de donde era [...] el presidente. El objetivo evidente de la operación en Michoacán era responder de manera contundente a la [...] pérdida de control territorial del gobierno local y a la creciente ola de violencia desatada por el crimen organizado, que en ese año ya había cobrado dos mil quinientas vidas en el país”.¹⁷⁵

¹⁷¹ *Ibid.*, p. 10.

¹⁷² Keith Guzik, “Security a la Mexicana: on the particularities of security governance in Mexico’s War on Crime”, *Theory and Society*, vol. 42, num. 2, marzo 2013, p. 167.

¹⁷³ *Ibid.*, p. 168.

¹⁷⁴ Lorenzo Meyer, “Felipe Calderón o el infortunio de una transición”, *Foro Internacional*, núm. 1, 2015, p. 24.

¹⁷⁵ *Ibid.*, p. 25.

Hay autores que sostienen que el uso de las Fuerzas Armadas de Felipe Calderón se debió a un intento por legitimar su gobierno, frente a la duda popular de su triunfo electoral. Existen también perspectivas que atribuyen a la medida la necesidad por centralizar el poder político en la figura presidencial. Meyer, por ejemplo, sostiene que “la política de fuerza contra el crimen organizado permitiría señalar de manera indirecta al adversario político, la izquierda”.¹⁷⁶ Irrespectivamente de la motivación, lo cierto es que el uso y disposición del Ejército para el combate al narcotráfico trajo consigo una serie de consecuencias que repercutieron de manera directa y negativa en la ciudadanía mexicana.

En 2008, el estado fronterizo de Chihuahua y, sobre todo, su ciudad capital, Ciudad Juárez, había sido tomado casi por completo por el crimen organizado. De ahí que la decisión fue aprobar el despliegue inmediato de más de dos mil elementos del Ejército mexicano, así como de la Marina.¹⁷⁷ Este mecanismo se dio no sólo bajo la idea de acabar radicalmente con el crimen de la región, sino también para depurar a la policía local, que sostenía lazos importantes con la delincuencia organizada.¹⁷⁸ Sin embargo, ambos operativos le imprimieron al gobierno de Calderón y a su gestión de seguridad un sello de militarización poco efectiva y de corrupción relacionada con la materia. Se comenzó, pues, a observar la porosidad de la frontera entre el gobierno y el crimen, lo que provocó, naturalmente, un problema en la definición del enemigo común a enfrentar. La identificación del Estado mismo como raíz de los problemas de inseguridad marcó un hito importante en la materia y, sobre todo, en el manejo y gestión de la seguridad en adelante.¹⁷⁹

¹⁷⁶ *Ibid.*, p.

¹⁷⁷ Keith Guzik, “Security a la Mexicana: on the particularities of security governance in Mexico’s War on Crime”, *Theory and Society*, vol. 42, num. 2, marzo 2013, p. 170.

¹⁷⁸ *Loc. cit.*

¹⁷⁹ *Loc. cit.*

En este sentido, para la segunda mitad del sexenio, las grandes expectativas sobre los gobiernos panistas en materia de seguridad, que prometían una ruptura con el represivo y corrupto PRI, cayeron. Para 2009, “ya dominaba la sensación de fracaso del esfuerzo, aunque la política se mantuvo invariable hasta el final”.¹⁸⁰ A pesar de esto, “la aprobación se mantuvo en un rango de entre el 44 y 68%. Aun cuando los ciudadanos se volvieron más críticos sobre la violencia que asolaba el país, daban buenas calificaciones a su gestión en general, a causa, muy probablemente, de los niveles de estabilidad económica”.¹⁸¹ Entonces, es posible observar que las bajas cifras de aprobación a las que llegó posteriormente Calderón están asociadas a las “percepciones sobre los niveles que alcanzó la violencia en México en ese punto y a la incapacidad del Gobierno para hacerle frente”.¹⁸²

En la coyuntura de una transición democrática en proceso, Lorenzo Meyer sostiene que “si una vez iniciado el proceso de consolidación éste no sigue avanzando a buen paso y no genera más apoyo tanto entre las élites como entre las masas, entonces se corre el riesgo de que surjan patologías, dinámicas que desemboquen en una regresión”.¹⁸³ En este sentido, el fracaso del partido en cumplir lo prometido, en materia de seguridad, llevó en gran medida a un retorno a la confianza ciudadana en el PRI. El gobierno de Enrique Peña Nieto comenzó en medio de una crisis de seguridad pública, propiciada por las estrategias de mano dura, el uso desmedido de las Fuerzas Armadas y la consecuente fractura de los grupos de narcotráfico en más y mayores grupos de delincuencia organizada.

¹⁸⁰ Lorenzo Meyer, “Felipe Calderón o el infortunio de una transición”, *Foro Internacional*, núm. 1, 2015, p. 25.

¹⁸¹ Ma. Fernanda Somuano, “Aprobar al presidente: una comparación entre Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto”, *Foro Internacional*, núm. 4, 2018, p. 643.

¹⁸² *Loc. cit.*

¹⁸³ Lorenzo Meyer, “Felipe Calderón o el infortunio de una transición”, *Foro Internacional*, núm. 1, 2015, p. 17.

La administración de Peña Nieto diseñó e instrumentó el Programa Nacional de Prevención del Delito (PRONAPRED) en la coyuntura de crimen y violencia desatada. El programa se implementó entre 2013 y 2016 y, a diferencia de la militarización de la administración anterior, el PRONAPRED buscó un enfoque social para reducir la violencia.¹⁸⁴ La visión del nuevo gobierno quedó clara cuando el presidente se pronunció a favor del combate a la delincuencia desde un enfoque social.¹⁸⁵ El PRONAPRED se convirtió así en el eje central de un nuevo enfoque preventivo de la seguridad durante el gobierno de Peña Nieto, cuya importancia se confirmó en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. Sobre esta base, el programa trabajaría posteriormente en dos campos complementarios: la prevención social de la violencia y la contención de la delincuencia.¹⁸⁶

Bajo este entendido, la peligrosa militarización del país pudo haber encontrado su punto final en el sexenio del priísta; sin embargo, no fue el caso. La estrategia de mano dura no sólo no cesó, sino que la crisis de violencia se profundizó.¹⁸⁷ Puesto de manera más sencilla, Amnistía Internacional expresó que “durante su campaña electoral, Peña Nieto prometió atender la crisis con estrategias diferentes; ahora, queda claro que esas promesas solo fueron retórica. En vez de cambiar las estrategias, reforzó la militarización, creando un campo fértil para la comisión de gravísimas violaciones a los derechos humanos”.¹⁸⁸ El sexenio de Peña Nieto estuvo plagado de escándalos de corrupción, pero también de inseguridad. Ejemplo concreto de esto fue el caso

¹⁸⁴ R. Guy Emerson, “Who is the citizen in citizen security?”, *Latin American Research Review*, num. 55, vol. 3, 2020, p. 531

¹⁸⁵ *Loc. cit.*

¹⁸⁶ *Loc. cit.*

¹⁸⁷ Amnistía Internacional, “Enrique Peña Nieto: el recuento de los daños”, Amnistía Internacional, publicado el 30 de noviembre de 2018, <https://www.amnesty.org/es/latest/news/2018/11/enrique-pena-nieto-el-recuento-de-los-danos/>.

¹⁸⁸ *Loc. cit.*

Ayotzinapa, donde la desaparición forzada comenzó a formar parte del vocabulario referente a las acciones del Ejército mexicano.

Enrique Peña Nieto propuso la Ley de Seguridad Interior que, posteriormente, fue aprobada legislativamente y donde la institucionalización de la estrategia militarizada tomó lugar.¹⁸⁹ En un inicio, la Ley suponía ser pauta para regular y controlar la actuación militar en México.¹⁹⁰ En este sentido, parecía responsabilizar concretamente a las autoridades civiles de ciertas tareas en la materia. Sin embargo, más que otra cosa, dio entrada a un uso más generalizado y mayor de las Fuerzas Armadas en el combate al crimen organizado.¹⁹¹ En esencia, los cuerpos de seguridad de mando civil quedaron subordinadas a las directrices de las Fuerzas Armadas y se les otorgó mayor libertad en su actuación a las últimas.¹⁹²

Para cuando Peña Nieto se acercaba al fin de su administración, las cifras eran preocupantes: más de 37 mil personas desaparecidas, al menos las reportadas, varios casos de ejecuciones arbitrarias por fuerzas de seguridad, graves acusaciones de tortura generalizada y múltiples denuncias por espionaje.¹⁹³ El número de reportes de violaciones a derechos humanos perpetradas por las Fuerzas Armadas escaló de manera exponencial durante el gobierno del priísta.¹⁹⁴ El análisis de Somuano revela que en el caso de Peña Nieto, el tema de seguridad pública aparece como el segundo factor que afecta su nivel de aprobación, sólo detrás de la economía.¹⁹⁵

En los dos sexenios que siguieron a la alternancia democrática, la ciudadanía se inclinó a favorecer electoralmente a los gobiernos opositores del PRI, quienes prometían justicia y

¹⁸⁹ *Loc. cit.*

¹⁹⁰ Daniel Wilkinson, “México: La militarización de la seguridad pública”, El Universal, publicado el 4 de octubre de 2018, <https://www.hrw.org/es/news/2018/10/04/mexico-la-militarizacion-de-la-seguridad-publica>.

¹⁹¹ *Loc. cit.*

¹⁹² *Loc. cit.*

¹⁹³ *Loc. cit.*

¹⁹⁴ *Loc. cit.*

¹⁹⁵ Ma. Fernanda Somuano, “Aprobar al presidente: una comparación entre Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto”, Foro Internacional, núm. 4, 2018, p. 663.

reparación de daños; sin embargo, la continuidad en el manejo de seguridad fue claro. Por un lado, Fox fue tolerante e indulgente con los dirigentes pasados y con los crímenes de las Fuerzas Armadas. Por otro, Calderón implementó una estrategia de fuerza y mano dura contra el crimen, que propició un incremento sin precedente en los niveles de violencia. Al concederle un último voto de confianza al PRI, la ciudadanía esperaba, en la gestión de seguridad, un cambio de acercamiento y perspectiva. No obstante, Peña Nieto, lejos de terminar con el uso de las Fuerzas Armadas en las tareas de seguridad ciudadana, lo profundizó. Y, aunada a la disposición excesiva e inefectiva del Ejecutivo Federal del ejército, la corrupción innegable del funcionariado y sus alianzas con miembros del crimen organizado, la ciudadanía encontró una tercera vía que prometía romper con el esquema: Morena.

II.3 Andrés Manuel López Obrador al frente de la gestión de seguridad pública en México

Tras un par de intentos fallidos en las batallas electorales, Andrés Manuel López Obrador logró tomar protesta como presidente de México el primero de diciembre de 2018. Le precedía una campaña diseñada cuidadosamente para ganarse la confianza del electorado. López Obrador arrasó en el resultado, al convertirse en el candidato presidencial con más votos en la historia del país, ya que obtuvo más del 53% de los sufragios.¹⁹⁶ Su candidatura sobresalió y se distinguió radicalmente de las demás, por la imagen que se creó, a partir de la idea de un rompimiento completo de las dinámicas partidistas, corruptas y dañinas que engendraban los candidatos de los partidos anteriores y que se oponían a Morena.

¹⁹⁶ BBC, "López Obrador arrasa en las elecciones presidenciales de México y dice que no va a instalar una dictadura "abierta o encubierta", BBC News Mundo, publicado el 2 de julio de 2018, <https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-44678193>.

El triunfo electoral del presidente llama la atención por dos razones: el gran apoyo popular que obtuvo y que se tratara de un partido relativamente nuevo, el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena). Con sólo cuatro años de consolidación y reconocimiento oficial como partido político, Morena fue la plataforma en la cual López Obrador consiguió la aprobación mayoritaria de la ciudadanía mexicana.¹⁹⁷ No obstante, Morena no quedó como un solo un vehículo para la victoria, sino que, por el contrario, el dirigente le otorgó un significado mucho más profundo. Morena se convirtió en un partido con un peso simbólico, asociado indudablemente a Andrés Manuel López Obrador, cuyo lema fue “Por el bien de todos, primero los pobres”.¹⁹⁸ En esencia, AMLO les confirió un espacio a las izquierdas de México en Morena y, con ello, prometió una ruptura completa de fondo y forma con el régimen de los dos partidos que habían gobernado, el PRI y el PAN.

II.3.1 “Abrazos, no balazos”: la campaña, el discurso y las promesas de seguridad de López Obrador en 2018

Con la coalición “Juntos Haremos Historia”, conformada por el Partido Encuentro Social (PES), el Partido del Trabajo (PT) y Morena, López Obrador comenzó su campaña como candidato presidencial en abril de 2018 en Ciudad Juárez.¹⁹⁹ La ciudad más poblada de Chihuahua, una década antes, había sido testigo primario de la “guerra contra las drogas” de Felipe Calderón y víctima de la violencia desatada a causa de los enfrentamientos sanguinarios entre grupos de crimen organizado y las Fuerzas Armadas del Estado. Con su discurso, el candidato sembró una semilla de esperanza y confianza en el electorado y planteó la posibilidad de una nueva época de

¹⁹⁷ José Pablo Martínez Gil, “Historia del Movimiento de Regeneración Nacional”, *Revista de Derecho Estasiológico, Ideología y Militancia*, núm. 4, 2014, p. 207.

¹⁹⁸ BBC, “López Obrador arrasa en las elecciones presidenciales de México y dice que no va a instalar una dictadura “abierta o encubierta”, BBC News Mundo, publicado el 2 de julio de 2018, <https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-44678193>.

¹⁹⁹ Aquiles Chihu Amparán, “El framing del discurso de la campaña presidencial de López Obrador”, *Iztapalapa Revista de Ciencias Sociales y Humanidades*, núm. 93, año 43, 2022, p. 265.

cambio verdadero en México, la llamada Cuarta Transformación, que prometía interrumpir por completo el sistema económico neoliberal y sus implicaciones perjudiciales para la ciudadanía mexicana.²⁰⁰

Frente a la crisis de inseguridad que México arrastraba desde inicios del nuevo siglo, AMLO se comprometió a hacer una reforma fundamental en las políticas de seguridad.²⁰¹ Su visión de cómo debería manejarse la seguridad en México se basaba en medidas que condujeran a la pacificación, en lugar de la *mano dura*, que había sido la estrategia elegida anteriormente. Así encabezó su movimiento, con la frase “abrazos, no balazos” como representación de lo que prometía. Por un lado, el candidato sostenía que había que atacar las causas iniciales de la violencia por medio de políticas dirigidas a reducir las desigualdades socioeconómicas tan profundas en el país.²⁰² Con esto, además de exponer la estrategia punitiva y fuerte, pero poco efectiva de sus antecesores como anticuada, se ganó una imagen de sensatez y asertividad.

Por el otro lado, el candidato aseguró que bajo su gobierno cualquier “complicidad corrupta entre el crimen y los funcionarios del Estado” quedaría erradicada.²⁰³ Esto tomó una relevancia específica, porque asoció uno de los mayores problemas del país, la inseguridad y la violencia perpetrada por el crimen organizado, a una cuestión que provocaba emociones comunes de hartazgo y tedio entre la ciudadanía: la corrupción de los gobiernos priístas y panistas. Con todo, varios autores argumentan que la crisis sistémica y desbordada inseguridad son los factores políticos clave que llevaron a AMLO a su triunfo electoral en 2018.²⁰⁴

²⁰⁰ *Ibid.*, p.

²⁰¹ International Crisis Group, “López Obrador redobla su apuesta militar”, en *El laberinto de los generales: crimen y militares en México, Informe de Crisis Group sobre América Latina*, num. 106, 2024, p. 4.

²⁰² *Loc. cit.*

²⁰³ *Loc. cit.*

²⁰⁴ Javier Esteinou Madrid, “Las elecciones de 2018 y el triunfo de AMLO/Morena”, *Argumentos*, UAM Xochimilco, 2019, p. 16.

Si bien la coyuntura política fue condición necesaria para su victoria, no fue suficiente. La fuerza sin precedentes con la que Morena logró que su líder asumiera el cargo en diciembre de 2018 es un resultado directo de la campaña y la retórica de AMLO, fundada en la decepción de las administraciones pasadas y la promesa de un cambio real y palpable.²⁰⁵ Con esto, le imprimió un sello partidista al combate a la corrupción desmedida en la que el gobierno mexicano había estado hundido por más de siete décadas. A partir de la deslegitimación de los otros partidos, Morena obtuvo el voto de confianza ciudadana y brindó la sensación de unidad frente a un enemigo común para todo el electorado mexicano: la corrupción. En este sentido, Morena en búsqueda de la Cuarta Transformación adquirió un poder simbólico indudable, que construyó a su vez, una identidad colectiva a partir de la desesperanza y fastidio de las constantes crisis en México con gobiernos anteriores.²⁰⁶

A partir de esta construcción identitaria, López Obrador se comprometió a reducir la violencia y redirigir los recursos hacia programas sociales que combatieran la corrupción, así como la proliferación de organizaciones criminales y de tráfico de drogas.²⁰⁷ En este sentido, uno de sus juramentos principales, desde incluso 2012 como precandidato presidencial, fue el revertir las políticas de la fallida “guerra contra el narco” y regresar al Ejército a sus cuarteles.²⁰⁸ En este sentido, sugirió que, de ser elegido como presidente de la República el 1 de julio de 2018, se centraría en que “la inseguridad no debe combatirse sólo con medidas coercitivas, sino también

²⁰⁵ Aquiles Chihu Amparán, “El framing del discurso de la campaña presidencial de López Obrador”, *Iztapalapa Revista de Ciencias Sociales y Humanidades*, núm. 93, año 43, 2022, p. 267.

²⁰⁶ *Ibid.*, p. 266.

²⁰⁷ René Rojas, “López Obrador’s Rise to Power”, *New Labor Forum*, núm. 1, vol. 29, 2020, p. 39.

²⁰⁸ Dulce Ramos, “Promete AMLO regresar al Ejército a sus cuarteles en 6 meses”, *Animal Político*, publicado el 6 de febrero de 2012, <https://animalpolitico.com/2012/02/promete-amlo-regresar-al-ejercito-a-sus-cuarteles-en-6-meses>.

con programas que ayuden a reestablecer el tejido social y alejen a la gente de la delincuencia organizada”.²⁰⁹

Llegado el año electoral, AMLO enunció un número de reformas que llevaría a cabo en funciones como presidente de México. Si bien hubo un énfasis en las transformaciones económicas que sucederían con el gobierno morenista, el gobierno de la inseguridad en el país fue asunto fundamental en su candidatura. Dos de los cambios radicales que propuso fueron desterrar la corrupción y el combate a la inseguridad.²¹⁰ En este sentido, el presidente aseguró que cambiaría de estrategia de seguridad, disminuiría el número de homicidios y la violencia perpetrada por los grupos de crimen organizado. Empero, además de sacar al ejército mexicano de las calles del país, garantizó a la ciudadanía que bajo su liderazgo los cuerpos de policías se profesionalizarían y comenzarían una coordinación a nivel nacional.²¹¹

Con un eslogan que acostumbró al electorado a la idea de una verdadera reforma y transformación del priismo, “Morena, la esperanza de México”, Andrés Manuel López Obrador consiguió más del 50% de los votos ciudadanos en 2018. Aunado a esto, su oferta de pacificación rápidamente se convirtió en uno de los pilares de su discurso y anunció que su gobierno elaboraría un “plan de reconciliación y paz para México”.²¹² Ante una ciudadanía exhausta de la inseguridad y decepcionada de las administraciones pasadas, Morena se volvió símbolo de una promesa e ilusión de cese al fuego violento.

²⁰⁹ *Loc. cit.*

²¹⁰ BBC News, “6 promesas con las que López Obrador quiere cambiar México”, *BBC News Mundo*, publicado el 2 de julio de 2018, <https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-44681165>.

²¹¹ *Loc. cit.*

²¹² *Loc. cit.*

III.3.2 La continuidad disfrazada

Andrés Manuel López Obrador tomó protesta en diciembre de 2018 con un escenario complejo de frente: más de cien mil personas desaparecidas, el número de homicidios cuaduplicados entre 2007 y 2018 y un escenario de lucha violenta entre cárteles y grupos de crimen organizado.²¹³ Entonces, el mandatario planteó el ya anunciado Plan Nacional de Paz y Seguridad. “Abrazos, no balazos” se propuso como el lema de la estrategia de seguridad pública, lo cual indicaba que habría un seguimiento de las propuestas de campaña.²¹⁴ En esencia, el plan sugería que, cuando menos, el 80% de las iniciativas de seguridad estarían dirigidas a resolver los factores de origen y raíz de los delitos violentos, sobre todo las cuestiones socioeconómicas y disparidades tan presentes en el país. Por lo tanto, los enfrentamientos armados con grupos criminales, las operaciones antinarcóticos y los arrestos de los líderes de cárteles quedarían en un segundo plano de la estrategia.²¹⁵

El documento reflejaba una serie de objetivos para reparar los daños de las medidas coercitivas de la “guerra contra las drogas” y alternativas orientadas hacia la pacificación, siempre con un énfasis presente en el combate a la corrupción. En el papel, el plan era ambicioso y con un enfoque novedoso en cuestiones de manejo de seguridad pública. Sin embargo, desde un principio fue carente en detalles prácticos y suponía más un proyecto aspiracional que una estrategia de gobierno.²¹⁶

No obstante, el mandatario dio un giro radical a su aproximación del manejo de la seguridad pública del país en los primeros meses de su gobierno. Una vez en funciones, López Obrador

²¹³ International Crisis Group, “López Obrador redobla su apuesta militar”, en *El laberinto de los generales: crimen y militares en México*, Informe de Crisis Group sobre América Latina, num. 106, 2024, p. 5.

²¹⁴ *Loc. cit.*

²¹⁵ *Loc. cit.*

²¹⁶ *Ibid.*, p. 6.

expresó su preocupación por los cuerpos policiales del país, al percatarse de que la gran mayoría estaban sumergidos en dinámicas de intereses y corrupción, donde no había espacio para el profesionalismo y disciplina.²¹⁷ Además, las policías han sido, con cada vez mayor frecuencia, infiltradas y dominadas por la delincuencia y el crimen.²¹⁸ En este sentido, el presidente observó que el regreso definitivo de las Fuerzas Armadas a sus cuarteles, como lo había prometido desde su candidatura en 2006, no sería del todo pertinente. Por el contrario, sugirió que no sólo sería un escenario *desastroso* dado el clima de violencia y delincuencia en México, sino que, a diferencia de las administraciones pasadas, en su administración, el ejército no estaría bajo el mandato de dirigentes corruptos.²¹⁹

A tal efecto, a pocos meses del inicio de sus funciones, el presidente logró una reforma constitucional en la que dismantelaba a la Policía Federal, misma que fungió como cuerpo de seguridad pública en el nivel federal por casi noventa años, y creaba un nuevo organismo llamado la Guardia Nacional.²²⁰ Si bien el Decreto respetaba la autonomía estatal y municipal en las cuestiones de gestión de seguridad, el ámbito federal quedaría en manos de la Guardia Nacional que, desde un inicio, se planteó como institución de carácter y mando civil.²²¹ Con esto, se reformó el artículo 21 de la Constitución Política: “Las instituciones de seguridad pública, incluyendo la Guardia Nacional, serán de carácter civil, disciplinado y profesional. El Ministerio Público y las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno deberán coordinarse entre sí para cumplir los fines de la seguridad pública y conformarán el Sistema Nacional de Seguridad Pública”.²²²

²¹⁷ *Ibid.*, p. 8.

²¹⁸ *Loc. cit.*

²¹⁹ *Loc. cit.*

²²⁰ Cristina Reyes y Leilani Hernández, “La Guardia Nacional: fachada civil, “seguridad militar”, en *Nexos*, publicado el 16 de mayo de 2023, <https://seguridad.nexos.com.mx/la-guardia-nacional-fachada-civil-seguridad-militar/>.

²²¹ *Loc. cit.*

²²² Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, art. 21.

La fachada civil de la Guardia Nacional duró poco, pues si bien, por su naturaleza profesional y policial, debería estar adscrita a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), el mandatario anunció que estaría *de momento* integrada a policías navales y militares con el propósito de ayudar a su consolidación para 2024.²²³ No obstante, en septiembre de 2022, “el Congreso de la Unión aprobó una serie de reformas a diversas leyes secundarias para trasladar su control operativo, administrativo y financiero a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena)”.²²⁴ La Suprema Corte de Justicia impugnó la decisión legislativa como una acción de inconstitucionalidad, por lo que fijó el primero de enero de 2024 como fecha para que la institución policial volviera a estar bajo el mando de la SSPC.²²⁵

Sin embargo, lejos de implementar una agenda orientada a la *desmilitarización* de la seguridad pública, la Guardia Nacional se conforma, en su mayoría, por militares y marinos.²²⁶ Las cifras muestran que el 87.9% de las 33 personas titulares y de las coordinaciones estatales de la Guardia Nacional provienen de la Sedena y 12.1% de la Secretaría de Marina (Semar).²²⁷ Al margen de esto, a pesar de que su adscripción a la Sedena se justificó como una medida transitoria para asegurar su profesionalización, para finales de 2021 sólo el 25% de los elementos de la Guardia Nacional tenía el Certificado Único Policial vigente, “documento que acredita los conocimientos, perfil, habilidades y aptitudes necesarias para desempeñar su cargo, y determina su ingreso o permanencia en las instituciones de seguridad pública”.²²⁸

²²³ Cristina Reyes y Leilani Hernández, “La Guardia Nacional: fachada civil, “seguridad militar”, en Nexos, publicado el 16 de mayo de 2023, <https://seguridad.nexos.com.mx/la-guardia-nacional-fachada-civil-seguridad-militar>.

²²⁴ *Loc. cit.*

²²⁵ *Loc. cit.*

²²⁶ *Loc. cit.*

²²⁷ *Loc. cit.*

²²⁸ *Loc. cit.*

La Guardia Nacional, gestada bajo el entendido de que sería una sustitución limpia, libre de corrupción y profesionalizada de la Policía Federal, es, en esencia, militar: una rama de las Fuerzas Armadas. A pesar de la sentencia de la SCJN, en septiembre de 2024, el Congreso de la Unión declaró constitucional y oficial la reforma que traslada formalmente la Guardia Nacional a la Sedena.²²⁹ Por si fuera poco, AMLO ha otorgado al ejército mexicano tareas que antes no tenía: la concesión para construir, operar y administrar los megaproyectos de su sexenio (el Aeropuerto de Santa Lucía, el Tren Maya y la refinería Dos Bocas).²³⁰ Es decir que, contrario a lo que la campaña del presidente prometió, el “abrazos, no balazos” como forma de quiebre con la gestión de seguridad pasada, López Obrador “creó una nueva corporación armada, la Guardia Nacional, con mando militar y subordinada a la Sedena, a diferencia de su predecesora, la Policía Federal, que era de mando civil y dependía de una institución civil, la Secretaría de Seguridad Pública” y le otorgó a las Fuerzas Armadas un peso sin precedentes dentro de su régimen.²³¹

II.4 El partidismo como filtro evaluador de los mexicanos

Una vez entendidos los contextos de inseguridad y de gobierno en México durante las últimas dos décadas y media, vale la pena adentrarse en la reacción de la opinión pública. Para esto, es necesario establecer la importancia de las identidades partidistas de la ciudadanía. En este sentido, numerosos estudios han mostrado cómo el partidismo en los mexicanos ha sido, generalmente, un elemento que moldea las percepciones ciudadanas sobre el desempeño gubernamental. Se han realizado extensos trabajos sobre las afinidades partidistas como determinantes de aprobación o

²²⁹ Mesa Directiva, “La reforma que traslada la Guardia Nacional a la Sedena ya es constitucional, declara la Cámara de Diputados”, Cámara de Diputados, boletín num. 0077, <https://comunicacionsocial.diputados.gob.mx/index.php/mesa/la-reforma-que-traslada-la-guardia-nacional-a-la-sedena-ya-es-constitucional-declara-la-camara-de-diputados>.

²³⁰ Ramón I. Centen, Fionn Petch y Ariel Elbaz, “López Obrador o la izquierda que no es”, *Foro Internacional*, núm.1, vol. 61, 2021, p. 199.

²³¹ *Ibid.*, p. 197.

rechazo en distintas áreas de gobierno. En un estudio sobre la formación de perspectivas ciudadanas sobre las administraciones de Calderón y Peña Nieto, Fernanda Somuano muestra una serie de factores que dan forma a las evaluaciones.²³² La autora se centra en las aprobaciones presidenciales, lo que funciona como base de esta investigación ya que tiene que ver con la legitimidad y el acuerdo con las políticas de un gobierno.

Sobre cuestiones de corrupción, Somuano observa que la identidad partidista de los individuos toma relevancia especial, bajo el supuesto de que hay una relación positiva entre identificarse con el partido del presidente y calificarlo mejor.²³³ Empero, uno de los hallazgos más significativos de su investigación, es que la variable de victimización no tiene un efecto significativo sobre la aprobación presidencial, mismo que llama al presente estudio a examinar si es el mismo caso para el gobierno obradorista.²³⁴ Sería de esperarse que “quienes han sido víctimas de un delito tenderían a evaluar de manera más negativa al Presidente, que quienes no lo han sido”.²³⁵ En tanto que este efecto no es visible en el modelo, quizás esto tiene que ver con el hecho de que “las víctimas no responsabilizan al Presidente de dicho suceso, porque hacen responsable a otro nivel de gobierno o porque, aun cuando sí responsabilizan al Gobierno federal o incluso al titular del Ejecutivo, consideran que éste está haciendo su mejor esfuerzo para combatir la delincuencia”.²³⁶

No obstante, la autora encuentra que la variable partidista tiene un efecto notable y significativo sobre la aprobación presidencial, para sus dos casos de estudio.²³⁷ Esto cumple con las expectativas generales, ya que se esperaba que “quienes se identifican con el partido del

²³² Ma. Fernanda Somuano, “Aprobar al presidente: una comparación entre Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto”, *Foro Internacional*, núm. 4, 2018, p. 646.

²³³ *Ibid.*, p. 653.

²³⁴ *Ibid.*, p. 660.

²³⁵ *Loc. cit.*

²³⁶ *Loc. cit.*

²³⁷ *Ibid.*, p. 661.

Presidente tenderán a evaluarlo mejor que quienes simpatizan con partidos de la oposición o se consideran independientes o apartidistas”.²³⁸ De manera más específica, Somuano halla que la probabilidad de aprobación “aumenta el 21% de quienes se identifican con el PAN para Calderón y 15% para quienes se identifican con el PRI para Peña Nieto”.²³⁹ Esto muestra que, en comparación con otros factores, como la percepción de corrupción o las experiencias de victimización, la variable partidista tiene un efecto mayor y mucho más significativo sobre la variable dependiente, el nivel de aprobación de los presidentes en el periodo de 2006 a 2018.

En una investigación enfocada en la vulnerabilidad económica y el partidismo, Melina Altamirano estudia la relación de ambos, así como la consecuente erosión de las relaciones entre los partidos políticos y la ciudadanía.²⁴⁰ En contextos donde la vulnerabilidad económica de algunos ciudadanos predomina, la expectativa es que, en igualdad de condiciones, aquellos que son económicamente vulnerables tienden a tener vínculos más débiles con los partidos políticos y en consecuencia muestran niveles más bajos de identificación partidaria.²⁴¹ En este sentido, la identidad partidista de la ciudadanía que se encuentra en condiciones económicamente desfavorables puede estar relacionada con la posición y el desempeño de los partidos en política económica.²⁴² El estudio sugiere que los lazos partidistas de la ciudadanía tienden a reforzarse no sólo por la agenda del partido político, sino también por las condiciones individuales de vulnerabilidad económica de las personas. En contextos de baja redistribución de recursos en América Latina, los vínculos ideológicos entre los partidos y los ciudadanos económicamente vulnerables tienen más probabilidad de erosionarse y virar entre etiquetas partidistas.²⁴³

²³⁸ *Loc. cit.*

²³⁹ *Loc. cit.*

²⁴⁰ Melina Altamirano, “Vulnerability and Partisanship in Latin America”, *Latin American Politics and Society*, num. 3, vol. 61, 2019, p. 87.

²⁴¹ *Loc. cit.*

²⁴² *Loc. cit.*

²⁴³ *Ibid.*, p. 86.

En otro estudio sobre las percepciones ciudadanas, Somuano y Ortega analizan la noción que tienen los mexicanos sobre la desigualdad económica. A partir de esta investigación, toman en cuenta la incidencia de variables que tienen que ver con la cultura y la ideología de las personas sobre la valoración que hacen sobre las desigualdades.²⁴⁴ Esto le concierne a la presente tesis, ya que una de las variables de interés es la ubicación ciudadana en el espectro ideológico. La literatura teórica muestra que la posición ideológica tiene un efecto directo sobre las evaluaciones del manejo gubernamental y también de la seguridad pública, como se expone en el primer capítulo. Esto también se observa para las cuestiones socioeconómicas. Los autores sugieren que “quienes se consideran igualitarios creen que las desigualdades deben minimizarse y que es responsabilidad del Estado hacer que esto suceda [mientras que quienes tienen] valores individualistas consideran que la situación de los individuos es producto de la libre competencia del mercado y que el Estado no tiene la obligación de reducir las diferencias en el ingreso de las personas”.²⁴⁵ Es decir que la tendencia ideológica individual tiende a ser un factor clave para la evaluación de las condiciones económicas y sociales.

No obstante, Somuano y Ortega descubren que, particularmente, en América Latina, los ciudadanos tienden a observar los problemas asociados a la desigualdad económica como menos apremiantes que otras dificultades. Entre los temas que preocupan más a la población de la región es el aumento en las tasas de incidencia delictiva y los escándalos de corrupción política.²⁴⁶ Y no es que la desigualdad económica sea aspecto menor; por el contrario, la región tiene claras brechas

²⁴⁴ Ma. Fernanda Somuano y Reynaldo Ortega, “Desigualdad económica en México, percepciones y determinantes”, en Melina Altamirano y Laura Flamand, *Desigualdades sociales en México*, Ciudad de México, El Colegio de México, 2021, p. 258.

²⁴⁵ *Loc. cit.*

²⁴⁶ *Ibid.*, pp. 261 – 263.

de desigualdad entre sus habitantes y la vulnerabilidad económica de ciertos sectores poblacionales abunda. Sin embargo, lo que se mantiene bajo es la percepción de esa desigualdad.²⁴⁷

Los autores muestran que un nivel mayor de desigualdad económica no siempre se traduce en mayor percepción del fenómeno.²⁴⁸ Además, “aunque es posible pensar que los individuos de menor estatus social perciben mayor desigualdad, diversas investigaciones han mostrado que, a menor estatus, menor es la desigualdad percibida”.²⁴⁹ Es decir que, contra intuitivamente, son aquellos sectores poblacionales que tienen peores niveles de ingreso, son los que perciben menor desigualdad económica. Con todo, “la variable del interés económico personal no es la única que está detrás de las actitudes y percepciones individuales sobre la desigualdad. Los valores y predisposiciones culturales también tienen una influencia importante sobre aquéllas”.²⁵⁰

El papel de las predisposiciones que pueden tener las personas y su relación con las actitudes y evaluaciones de la acción pública se relacionan con mi argumento. Con base en las investigaciones del contexto mexicano, me propongo evaluar si, a pesar del aumento en los niveles de inseguridad, el apoyo a la gestión gubernamental se puede entender a partir de las predisposiciones partidistas de la ciudadanía, y no a una baja en las experiencias de victimización, por ejemplo. Bajo la lógica expuesta en los estudios, supongo que, así como aquéllos que experimentan mayores niveles de vulnerabilidad económica perciben en menor medida los niveles de desigualdad (noción que está mediada por factores ideológicos y culturales), quizás los ciudadanos que más padecen el aumento en el crimen y la violencia tampoco perciben un incremento significativo en la inseguridad. Entonces, esta evaluación, intermediada por las afinidades partidistas, así como demás aspectos individuales, llevan a una aprobación general de

²⁴⁷ *Loc. cit.*

²⁴⁸ *Ibid.*, p. 259.

²⁴⁹ *Loc. cit.*

²⁵⁰ *Loc. cit.*

la gestión gubernamental. Esto adquiere sentido en el contexto específico mexicano, donde a partir de la década pasada, el repunte de los simpatizantes de Morena ha sido notorio y sin precedentes.

II.5 Conclusiones

Este segundo capítulo contextual permite tres conclusiones generales. Primero, América Latina se ha caracterizado, a nivel global, por los altos niveles de crimen y violencia que tiene. Sin embargo, la percepción de su ciudadanía también refleja que la inseguridad tiende a imperar en la región desde hace ya varias décadas. Si bien existen diferentes argumentos al respecto, es útil rescatar la lógica socioeconómica, que afirma que los altos niveles de crimen y delincuencia surgen de las constantes disparidades económicas, de la pobreza y desigualdades. Esto es una explicación estructural. Además, existen teorías que asocian la propagación de actores criminales a la falta de legitimidad y de estado de derecho que suelen tener los gobiernos de los países latinoamericanos. En este sentido, se crean espacios donde la delincuencia tiende a florecer y la violencia se extiende y se propaga en gran medida hacia la ciudadanía.

Segundo, dadas las características particulares de la región, México no es la excepción. Es cierto que, en cuestiones de cifras, México tiende a comportarse como la gran mayoría de los países en América Latina. Sin embargo, la transición democrática del país abrió ventanas de oportunidad, no sólo a los mandatarios para implementar distintas políticas innovadoras, sino también a los actores criminales, dada la debilidad del nuevo régimen. En este sentido, las administraciones panistas tuvieron un escenario difícil de manejar, pero que podía aprovechar de manera muy efectiva para consolidarse como el verdadero cambio y quiebre con el método priísta. No obstante, lo que se observó durante los primeros doce años del nuevo siglo fueron estrategias de seguridad insuficientes para atender la complejidad del problema y que, en esencia, causaron una ola de violencia mucho más pronunciada y preocupante. La militarización de la seguridad pública surgió

como metodología estelar contra el crimen organizado y el narcotráfico que resultó ser más contraproducente que efectiva. El regreso del PRI mostró el descontento general y la desilusión con la oposición panista, pero tampoco representó una mejoría. El gobierno que antecedió a López Obrador continuó el modelo de *mano dura* frente al crimen, con evidentes casos de corrupción internos y con todas las implicaciones negativas sobre la ciudadanía y la situación general del país en cuestiones de violencia.

Tercero, el líder morenista construyó su campaña electoral enfatizando los fracasos de las pasadas tres administraciones, que se convirtieron en todo lo que, se suponía, no iba a suceder. En este sentido, identificó al problema de inseguridad en México como un problema de gobernanza y de corrupción en los cuerpos de seguridad civil, en particular, la Policía Federal. Con la precisión de este enemigo común y una agenda social muy definida, además de la promesa de detener de forma total la estrategia militarizada, logró su triunfo electoral con cifras históricas. No obstante, las acciones que tomó cuando asumió el cargo cambiaron el escenario. Si bien la promesa de remover a los militares de las tareas de seguridad pública había sido clave para su campaña, López Obrador creó un nuevo cuerpo (la Guardia Nacional) conformado, en gran medida, por militares y supeditado a la Secretaría de Defensa Nacional. Bajo el supuesto de eliminar la corrupción del funcionariado público, además, le otorgó tareas que exceden el ámbito de la seguridad al Ejército mexicano. Sobre todo, el presidente, pese a lo que aseguró en el discurso, entregó a las Fuerzas Armadas un poder que no había tenido precedentes en administraciones pasadas. Y, sin embargo, la ciudadanía aún aprueba su mandato y su gestión de la seguridad pública en México.

Por último, las investigaciones existentes muestran que el partidismo de los mexicanos ha sido un factor determinante de la aprobación o el rechazo de políticas distintas. Así en cuestiones de corrupción, de desempeño económico y en el ámbito de gestión de seguridad, las identidades

partidistas han fungido como lentes evaluadores de la opinión pública, en general. En el siguiente capítulo me propongo estudiar de manera más específica esta dimensión y vincularla con la aprobación presidencial de Andrés Manuel López Obrador.

Capítulo III. La opinión pública frente a la gestión gubernamental en México

El desempeño del gobierno en los ojos de la ciudadanía se evalúa mediante distintos lentes. La literatura ha demostrado que los ciudadanos examinan la gestión gubernamental a partir de la evaluación retrospectiva de su desempeño en áreas clave, de sus experiencias individuales, pero también de sus convicciones, sus valores políticos y sus características sociales. Las expectativas preexistentes de cada individuo juegan un rol importante también. Si bien la aprobación ciudadana del trabajo del Ejecutivo Federal engloba una serie de factores como la evaluación del desempeño económico, las políticas sociales, las relaciones con la esfera internacional, entre otras varias, el manejo de la seguridad pública se ha ganado importancia en la valoración de la gestión general del país. La preocupación ciudadana por la creciente inseguridad, crimen y violencia en México puede llevar a la priorización de esta dimensión y a un mayor peso de la evaluación del manejo gubernamental de esta área. Al mismo tiempo, el partidismo también ha funcionado como filtro evaluador del trabajo de la administración. Como planteo en el primer capítulo, estos dos procesos abren interrogantes sobre cómo las identidades políticas condicionan el posible impacto de las percepciones y experiencias con la inseguridad.

El capítulo anterior presentó un recuento del manejo gubernamental de la seguridad de las administraciones desde 2000 hasta el sexenio del presidente López Obrador en un contexto de criminalidad y violencia creciente. La evolución del problema de la inseguridad y su gestión han sentado un precedente para la opinión pública. Este tercer y último capítulo tiene dos objetivos principales. En primer lugar, me propongo presentar una descripción concisa de la evolución de la opinión pública durante los gobiernos que antecedieron a Andrés Manuel López Obrador para ofrecer un punto de comparación respecto a las evaluaciones ciudadanas de la primera

administración morenista. En segundo lugar, poner a prueba las hipótesis centrales que guían la tesis. Para ello, llevo a cabo una serie de estimaciones logísticas utilizando datos individuales de la encuesta del Barómetro de las Américas (LAPOP) para el año 2023. Elijo este año por tres razones principales. Primero, por ser el último año completo del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, lo que permite observar un panorama amplio y consolidado de su gestión. Segundo, dado que para entonces más del 80% de su mandato ya había transcurrido, es razonable suponer que las percepciones y evaluaciones ciudadanas sobre su desempeño están ya formadas en gran medida. Y, por último, la elección responde también a criterios prácticos relacionados con los tiempos de realización de esta tesis. A partir de los resultados de este análisis empírico realizo un balance de la validez del argumento planteado en el primer capítulo.

III.1 Evaluaciones ciudadanas de los gobiernos en contextos de alta inseguridad (2000 – 2018)

Autores como Ricardo Gómez Vilchis sostienen que los ciudadanos de América Latina tienden a percibir negativamente el combate a la delincuencia en sus países. “Ante los ojos de la ciudadanía, la mayoría de los países latinoamericanos, incluyendo a México, han realizado un trabajo pobre para reducir el crimen. La evidencia muestra que estas naciones han fracasado para erradicar este problema”.²⁵¹ Las estrategias de seguridad pública que adoptaron los gobiernos panistas y el priistas provocaron reacciones distintas entre la ciudadanía mexicana. Las deficiencias de las estrategias gubernamentales en materia de seguridad provocaron descontentos que, posteriormente, se mostraron más claramente en las boletas electorales. Y, si bien son varias las dimensiones que influyen en la aprobación del Ejecutivo federal, la frágil situación de seguridad

²⁵¹ Ricardo R. Gómez Vilchis, “Calificando al Presidente y percibiendo el aumento del crimen en México”, *Perfiles Latinoamericanos*, núm. 42, 2013, p. 32.

y violencia en el país se ha convertido en un tema central para la evaluación de las personas sobre el gobierno.

La transición democrática prometió a la ciudadanía, entre otros aspectos, protección del crimen y la violencia que, desde finales de los años 90, comenzaba a repercutir negativamente en el bienestar de las personas.²⁵² Las expectativas ciudadanas de la gestión general y del manejo de la seguridad del primer gobierno panista, podría decirse, eran altas. Sin embargo, durante la administración de Fox, comenzaron a surgir sensaciones de insuficiencia. Prevalecía la percepción de que, aunque ya no se trataba de gobierno priista autoritario, represor y corrupto, no existía una protección real de la ciudadanía. Casi como si no existiera consecuencia para los crímenes que sucedieron en el siglo pasado, pero tampoco para los delincuentes y la violencia en el momento.²⁵³

Dadas las condiciones de inseguridad en las que la ciudadanía mexicana se encontraba y la falta de acción del gobierno, el 27 de junio de 2004, una de las mayores manifestaciones ciudadanas registradas en el país tomó lugar.²⁵⁴ Frente al Ángel de la Independencia en el Zócalo de la Ciudad de México marchaban cientos de mexicanos descontentos y aterrados de la inseguridad constante y la consigna “Rescatemos a México” encabezaba el movimiento.²⁵⁵ La movilización fue clave porque mostró la preocupación ciudadana sobre la violencia, pero también sobre la impunidad y corrupción dentro de la gestión de seguridad.²⁵⁶

Incluso, hay quienes sostienen que “la marcha ciudadana contra la delincuencia y la inseguridad fue la más clara expresión del cuestionamiento y rechazo hacia la política pública en materia de seguridad por parte de una sociedad inconforme y agraviada por los nulos avances en

²⁵² *Ibid.*, p. 38.

²⁵³ *Loc. cit.*

²⁵⁴ Héctor Chincoya Teutli, “De la seguridad pública a la política criminológica en México: 2000-2012 (los gobiernos del Partido Acción Nacional)”, *IUS*, num. 34, 2014, p. 72.

²⁵⁵ *Loc. cit.*

²⁵⁶ *Ibid.*, p. 73.

esta materia”.²⁵⁷ Para 2006, el gobierno publicó el Acuerdo Nacional para un México Seguro que contemplaba a la seguridad como máxima prioridad mediante diez líneas de acción, muy parecidas, por cierto a las ya establecidas en el PND 2000 – 2006.²⁵⁸ Y, si bien, el presidente recibió a quienes encabezaron el movimiento y sus peticiones, la administración de Fox dejó mucho qué desear en cuestiones de la gestión de seguridad pública.

Llama la atención que, dado el contexto de alternancia, la ciudadanía se encontraba con un menor grado de tolerancia al crimen, pero, sobre todo, a la inacción del gobierno frente a la inseguridad.²⁵⁹ Gómez Vilchis señala que, “los análisis muestran que la ciudadanía asocia fuertemente las demandas de tipo social, en particular el combate contra la inseguridad, con las obligaciones que tiene un régimen democrático”.²⁶⁰ Sin embargo, esto también implica que, dado que las expectativas de la ciudadanía se sostienen en un nivel muy alto, cuando el gobierno del inicio democrático no las cumple, la decepción de los ciudadanos tiende a llevar al refuerzo de valores antidemocráticos.²⁶¹

Autores como Gómez Vilchis resaltan la complejidad de los contextos en donde la delincuencia impera. “Un clima de inseguridad, caracterizado por altos niveles de criminalidad, puede ser un elemento clave que impida la consolidación democrática a través del fortalecimiento indirecto de valores autoritarios y de desconfianza hacia la democracia”.²⁶² De hecho, algunos autores atribuyen al desorden social que deriva de la inseguridad y crimen como una clave para el consiguiente apoyo a políticas de corte más autoritario.²⁶³ Lo cierto es que la ciudadanía mexicana

²⁵⁷ *Loc. cit.*

²⁵⁸ *Loc. cit.*

²⁵⁹ Ricardo R. Gómez Vilchis, “Calificando al Presidente y percibiendo el aumento del crimen en México”, *Perfiles Latinoamericanos*, núm. 42, 2013, p. 33.

²⁶⁰ *Loc. cit.*

²⁶¹ *Ibid.*, p. 34.

²⁶² *Loc. cit.*

²⁶³ *Loc. cit.*

tenía grandes expectativas de que el presidente Fox, como lo presentó en su campaña y en el resto de su administración, se diferenciara del régimen priista en aspectos como la protección contundente frente al crimen y la delincuencia.²⁶⁴ El gobierno alternante, empero, no cumplió con lo que la ciudadanía esperaba.

Tiene sentido, entonces, que, a partir del año 2000 en México “el crimen ha[bía] ganado mayor importancia como tema de la agenda política nacional”.²⁶⁵ Y, por tanto, la evaluación ciudadana sobre las cuestiones de manejo de seguridad era más “exigente” que en los años de gobierno del PRI.²⁶⁶ Los mexicanos tenían entre poca y nula confianza en los cuerpos de policía, dado que se encontraban hundidos en corrupción.²⁶⁷ Además, existía una brecha significativa entre las cifras de delincuencia reportadas por el gobierno de México y las reales, misma que se explica por la falta de denuncia, consecuencia de la desconfianza ciudadana en el proceso judicial y penal.²⁶⁸ De manera que, en 2005, a nivel nacional, el 70% de la ciudadanía que vivía en las ciudades principales del país reportaron una sensación constante de inseguridad en su localidad.²⁶⁹

Ante la compleja situación de aumento de criminalidad, los expertos en el tema atribuyen la situación a las actividades relacionadas con el narcotráfico y el crimen organizado. En este sentido, para finales de la administración de Fox, Eduardo Medina Mora, exsecretario de Seguridad Pública, sostuvo que realmente no había zona del país libre del crimen organizado.²⁷⁰ Sin embargo, parte fundamental del problema se debió a la corrupción y colaboración de los cuerpos de la policía con los grupos de crimen organizado. Para 2006, las policías de Michoacán

²⁶⁴ *Ibid.*, p. 46.

²⁶⁵ *Ibid.*, p. 49.

²⁶⁶ *Loc. cit.*

²⁶⁷ Raúl Benítez, “La seguridad nacional en la indefinida transición: mitos y realidades del sexenio de Vicente Fox”, *Foro Internacional*, 191-192, núm. 48, 2008, p. 200.

²⁶⁸ *Ibid.*, p. 202.

²⁶⁹ *Loc. cit.*

²⁷⁰ *Ibid.*, p. 203.

y Baja California, por ejemplo, habían sido penetradas por la delincuencia organizada.²⁷¹ Las estructuras de seguridad locales estaban vulneradas por lo que el esfuerzo federal era ineludible para un combate al crimen y la protección ciudadana de la violencia. No obstante, a pesar de las altísimas expectativas al inicio del gobierno del presidente Fox, la percepción ciudadana de la gestión de la seguridad pública quedó frustrada ante la promesa de protección contundente del PAN y la alternancia.

III.1.1 La ciudadanía mexicana en favor de la mano dura frente al crimen

En un análisis sobre la aprobación presidencial en los años 2000, Gómez Vilchis afirma que en democracias nuevas en América Latina, las expectativas ciudadanas son tan altas que en la decepción por el no cumplimiento de lo prometido surgen actitudes antidemocráticas y de apoyo a políticas de corte autoritario por parte de la ciudadanía.²⁷² Además, en el contexto mexicano, la asociación de las políticas de mano dura para enfrentar el crimen organizado y el problema de narcotráfico con el empleo de las Fuerzas Armadas es casi inmediato.²⁷³ Esto sucede, como lo plantean autores como Flores Macías y Zarkin, aun cuando el empleo de las Fuerzas Armadas permite abusos arbitrarios de poder, opacidad y corrupción y fuertes violaciones a los derechos humanos.²⁷⁴ Si bien el primer sexenio panista produjo una ilusión de cambio sustancial en varios aspectos, también trajo consigo una decepción. La falta de respuesta de Fox, así como el aumento de violencia, a partir del argumento de Gómez Vilchis, pueden explicar las reacciones ciudadanas

²⁷¹ *Loc. cit.*

²⁷² Ricardo R. Gómez Vilchis, “Calificando al Presidente y percibiendo el aumento del crimen en México”, *Perfiles Latinoamericanos*, núm. 42, 2013, p. 34.

²⁷³ *Ibid.*, p. 205.

²⁷⁴ Gustavo Flores Macías y Jessica Zarkin, “Militarization and Perceptions of Law Enforcement in the Developing World: Evidence from a Conjoint Experiment in Mexico,” en *British Journal of Political Science*, 2022, pp. 1377 - 1379.

de apoyo durante el gobierno calderonista, cuando el empleo de militares para el combate al crimen organizado se convirtió en la estrategia oficial y estelar de la administración.

Para cuando Calderón comenzó su administración y, al poco tiempo de su estrategia de seguridad pública militarizada, era claro que dentro de las mayores preocupaciones de los mexicanos se encontraban los problemas relacionados al crimen organizado, al narcotráfico y a la violencia.²⁷⁵ En esencia, para fines del gobierno de Calderón, tres de cada cuatro mexicanos observaron que la violencia relacionada con los cárteles era un problema muy grande para el país, pero una proporción semejante de personas sostuvo lo mismo sobre las violaciones a los derechos humanos por parte del ejército y la policía.²⁷⁶ Sin embargo, para 2012, el 73% de los mexicanos reconocía a la delincuencia como uno de los problemas más graves del país.²⁷⁷

Para 2009, según las encuestas del Centro de Investigación Pew, gran parte de la ciudadanía mostró una aprobación a la política de desplegar al ejército para combatir a los cárteles de droga. Ocho de cada diez encuestados sostuvieron que era el camino correcto.²⁷⁸ Sin embargo, las percepciones en cuestiones más prácticas parecen ser contradictorias. Para 2011, sólo el 47% de los ciudadanos pensaba que el gobierno estaba logrando avances contra los narcotraficantes.²⁷⁹ Además tres de cada diez ciudadanos expresaron observar que el gobierno estaba perdiendo terreno frente a los grupos criminales, mientras que el 19% no veía ningún cambio en la situación de enfrentamiento.²⁸⁰

La estrategia militarizada de Calderón también provocó sentimientos de preocupación en algunos sectores de la población. El público se encontraba profundamente preocupado por el costo

²⁷⁵ Pew Research Center, “Mexicans Back Military Campaign Against Cartels”, *Report on Criminal Justice*, June 20, 2012, <https://www.pewresearch.org/global/2012/06/20/mexicans-back-military-campaign-against-cartels/>.

²⁷⁶ *Loc. cit.*

²⁷⁷ *Loc. cit.*

²⁷⁸ *Loc. cit.*

²⁷⁹ *Loc. cit.*

²⁸⁰ *Loc. cit.*

social de la guerra contra las drogas. Así, el 74% expresó que las violaciones de derechos humanos por parte del ejército y la policía eran una situación problemática y poco deseable.²⁸¹ Empero, esta inquietud por los abusos a los derechos humanos coexistía con la angustia constante ante la violencia y el crimen organizado, mismo que se mantuvieron dentro de los principales problemas del país, según la ciudadanía, durante el segundo gobierno panista.²⁸²

En tanto que el apoyo a la estrategia de mano dura fue aceptada como la medida correcta dentro de la gran mayoría de la población, debido a la creciente preocupación del crimen y de la violencia, la diferenciación partidista es de resaltar. Si bien ocho de cada diez ciudadanos indicaron su apoyo al uso del ejército mexicano en la guerra contra las drogas, 88% de los ciudadanos que se identificaban con el PAN y el 84% de los partidarios del PRI respaldaron firmemente el uso del ejército por parte de Calderón.²⁸³ Sin embargo, los mexicanos más afines al PRD se mostraron más escépticos, pues solo el 66% de ellos aprobaron la estrategia.²⁸⁴

Aunado a lo anterior, los ciudadanos que se identificaban con el PAN, en su momento, resultaron ser los más entusiastas con la estrategia, dado que el 62% de ellos sostuvo que las autoridades estaban logrando avances sustanciales. En comparación con aquellos que simpatizaban más con los otros partidos, fueron 45% de aquellos afines al PRI y 34% de los partidarios del PRD los que observaron que el gobierno estaba “ganando” la guerra contra las drogas.²⁸⁵ Es decir que la identidad partidista de la ciudadanía, durante el sexenio calderonista, fue un elemento clave para la evaluación de la estrategia de seguridad empleada.

²⁸¹ *Loc. cit.*

²⁸² *Loc. cit.*

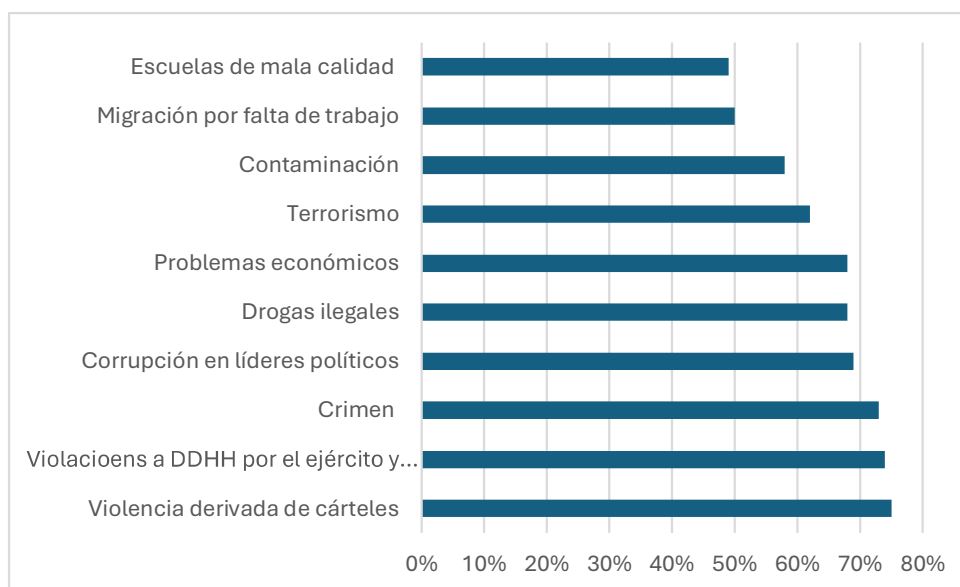
²⁸³ *Loc. cit.*

²⁸⁴ *Loc. cit.*

²⁸⁵ *Loc. cit.*

No obstante, en cuestiones de percepciones de la situación de inseguridad general del país, las cifras apuntaban hacia otra dirección. Hacia el final del sexenio panista, aproximadamente el 63% de los encuestados por el Centro de Investigaciones de Pew, se mostró insatisfecho con la situación general de México, aunque con respecto a 2011 hubo cierta mejoría, cuando la cifra era de 76% de los encuestados.²⁸⁶ De igual manera, los mexicanos reconocían al problema de violencia y crimen como problema principal, pero también la corrupción dentro del funcionariado, lo que se expresaba en la falta de confianza en los cuerpos policíacos y en los ministerios públicos.²⁸⁷ Aún más, el miedo en la población mexicana abundaba y crecía, a pesar de lo que se evaluaba en cuestiones de gobierno de la seguridad: 56% de los ciudadanos encuestados expresaron temor a caminar solos por la noche, cifra que para 2007 era de 50%. Este impacto fue diferenciado según el género de las personas entrevistadas, pues las mujeres tuvieron una probabilidad de sentirse con miedo (61%), en comparación con 51% de los hombres que expresaron preocupación.²⁸⁸

Figura VI. Mayores problemas considerados por la ciudadanía (2011)



²⁸⁶ *Loc. cit.*

²⁸⁷ *Loc. cit.*

²⁸⁸ *Loc. cit.*

Fuente: Gráfico de elaboración propia, con datos del reporte del Centro de Investigaciones Pew, “Mexicans Back Military Campaign Against Cartels”, *Report on Criminal Justice*, June 20, 2012, <https://www.pewresearch.org/global/2012/06/20/mexicans-back-military-campaign-against-cartels/>.

El apoyo general de la ciudadanía mexicana a una estrategia dura contra el crimen no significa la satisfacción con sus resultados. Lo cierto es que, aunque los ciudadanos tendieron a aprobar de la militarización de la seguridad pública durante el gobierno de Calderón, no observaron una mejora en la situación de inseguridad del país. Esto muestra un aspecto importante: la aprobación ciudadana de la mano dura frente a los altos niveles de crimen y violencia, como un *trade-off* de los efectos negativos, como la vulneración de los derechos humanos por parte de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, la guerra contra las drogas calderonista no tuvo los resultados que esperaban los mexicanos, no hubo un *trade-off* y la decepción respecto a los gobiernos panistas se sostuvo.

III.1.2 El declive de las evaluaciones ciudadanas

Hacia el 2012, la tasa de homicidios y criminalidad iban en ascenso. La estrategia de enfrentamiento duro al crimen organizado de Calderón se volvió cada vez menos popular, dado que, en esencia, no sólo no cumplió con el propósito de disminución de la incidencia delictiva, sino que empeoró la situación de inseguridad general en el país. El electorado comenzó a asociar al PAN con una guerra sangrienta que realmente no brindaba lo que prometía, por lo que continuar por la apuesta panista no estaba dentro de las preferencias de la mayoría de los ciudadanos. Para cuando ganó el PRI, de nueva cuenta, los compromisos rondaron el área económica y social, pero

también las cuestiones de seguridad, pues después de la guerra contra las drogas se volvió tema central en la agenda pública.²⁸⁹

Cuando Peña Nieto comenzó su administración, marcando el regreso del PRI, un 75% de los que respondieron otra encuesta del Centro de Investigaciones de Pew expresaron que las muertes relacionadas con los cárteles y la guerra contra las drogas representaban el problema número uno del país.²⁹⁰ Eran más de cincuenta mil las muertes reportadas que se relacionaban al problema del narcotráfico y el crimen organizado.²⁹¹ Y, aunque más del 50% de los encuestados pensaban que la estrategia no fue efectiva, seguían aprobando y respaldando el uso del ejército para la lucha contra el crimen.²⁹² Según un estudio de Gallup, la confianza en el gobierno de Calderón se mantuvo alrededor del 40%. No obstante, la confianza en las capacidades militares y policiales para detener la violencia de la delincuencia organizada fue disminuyendo poco a poco. Esto es muestra de que la ciudadanía estaba a favor de resolver el problema, pero no confiaban en la capacidad del gobierno para hacerlo.²⁹³

De acuerdo con la interpretación de algunos analistas, el electorado mexicano le otorgó un voto de confianza a Peña Nieto, pues le precedía una gobernatura en el Estado de México, donde había, supuestamente, logrado la reducción de la violencia.²⁹⁴ Aunque las afirmaciones de campaña acerca de sus principales logros, como la reducción de la tasa de homicidios del estado, tuvieron que ser revisadas cuando se señalaron discrepancias, su mensaje logró cautivar a la ciudadanía mexicana, dados los antecedentes de violencia e inseguridad crecientes.²⁹⁵ En este sentido, uno de

²⁸⁹ Stephen Johnson, "Mexico's 2012 elections: from uncertainty to a pact for progress", *CSIS Americas Program*, Washington, DC, 2013, p. 1.

²⁹⁰ *Ibid.*, p. 2.

²⁹¹ *Loc. cit.*

²⁹² *Loc. cit.*

²⁹³ *Loc. cit.*

²⁹⁴ *Ibid.*, p. 5.

²⁹⁵ *Loc. cit.*

sus primeros compromisos con los mexicanos fue la restauración de la paz, al reducir, cuando menos, a la mitad las tasas de crímenes violentos.²⁹⁶

No obstante, para la mitad de su administración, en 2015, solamente el 35% de los mexicanos pensaba que Peña Nieto estaba haciendo un buen trabajo en la gestión de la seguridad pública del país, en la lucha contra el crimen organizado y los narcotraficantes.²⁹⁷ Este porcentaje era significativamente menor en comparación con el inicio de su gobierno, cuando la cifra se encontraba alrededor del 53% en 2014.²⁹⁸ Es decir que, en un año, la percepción ciudadana del manejo de la seguridad pública de Peña Nieto cayó notablemente. De igual manera, el porcentaje de población que observaba avances del gobierno en la guerra contra la delincuencia organizada cayó de 45% en 2014 a un 39% en 2015.²⁹⁹ En cuestiones de manejo de la corrupción en el funcionariado, sólo el 27% aprobaron su trabajo.³⁰⁰

El ejército mexicano continuó obteniendo evaluaciones positivas, aunque su aprobación cayó también, en una menor medida. Para 2014, el 75% de los mexicanos encuestados expresó una sensación de satisfacción con el trabajo de los militares, pues sostenían que tenían una buena influencia sobre la seguridad del país. En cuestión de un año, la cifra cayó al 61% de las personas que sostenían esta opinión.³⁰¹ Para la policía, por otro lado, las evaluaciones se mantuvieron bajas, y continuaron en caída: en 2014 sólo un 34% consideraba que los cuerpos policiacos eran eficientes en su trabajo, y para 2015 fue sólo el 27% de las personas.³⁰² Nuevamente, el perfil partidista de la ciudadanía jugó un papel importante también en las evaluaciones que tuvieron sobre la gestión

²⁹⁶ *Loc. cit.*

²⁹⁷ Danielle Cuddington y Richard Wike, “Declining Ratings for Mexico’s Peña Nieto”, *Pew Research Center*, 2015, <https://www.pewresearch.org/global/2015/08/27/declining-ratings-for-mexicos-pena-nieto/>.

²⁹⁸ *Loc. cit.*

²⁹⁹ *Loc. cit.*

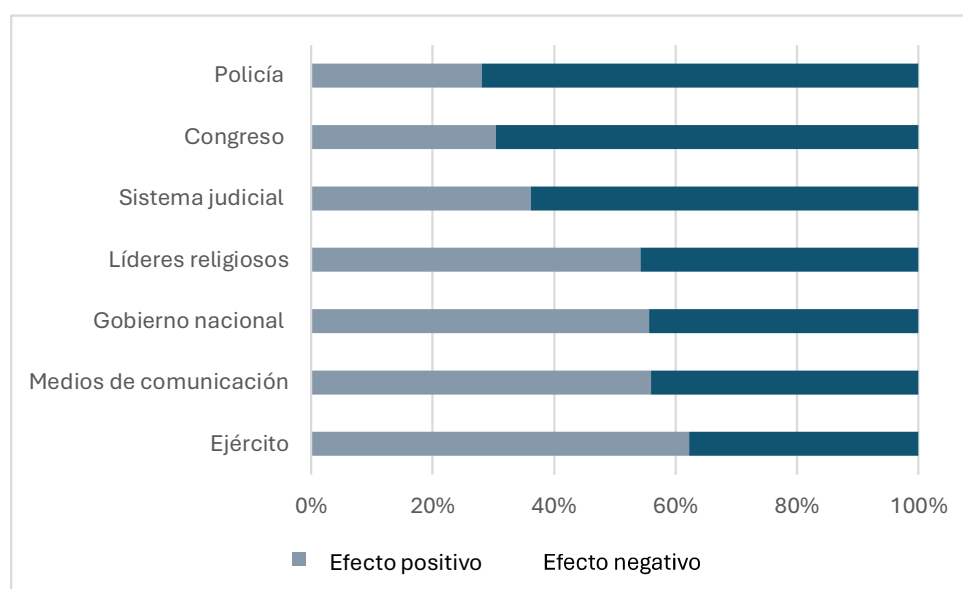
³⁰⁰ *Loc. cit.*

³⁰¹ *Loc. cit.*

³⁰² *Loc. cit.*

de seguridad general del país. De los mexicanos que se identificaban con el PAN, el 77% se mostró insatisfecho con el trabajo del mandatario priísta (ver Figura VIII).³⁰³

Figura VII. Percepciones sobre la incidencia que tienen instituciones sobre la ciudadanía (2015)



Fuente: Gráfico de elaboración propia, con los datos obtenidos en Danielle Cuddington y Richard Wike, “Declining Ratings for Mexico’s Peña Nieto”, *Pew Research Center*, 2015, <https://www.pewresearch.org/global/2015/08/27/declining-ratings-for-mexicos-pena-nieto/>.³⁰⁴

Fueron cinco los problemas que más preocuparon al electorado mexicano en esos años: el aumento de precios, criminalidad, desempleo, corrupción y violencia.³⁰⁵ De hecho, siete de cada diez encuestados mencionaron a la delincuencia, el desempleo, la corrupción de los políticos, la violencia relacionada con los cárteles y la corrupción de los cuerpos de policía como los problemas más importantes del país.³⁰⁶

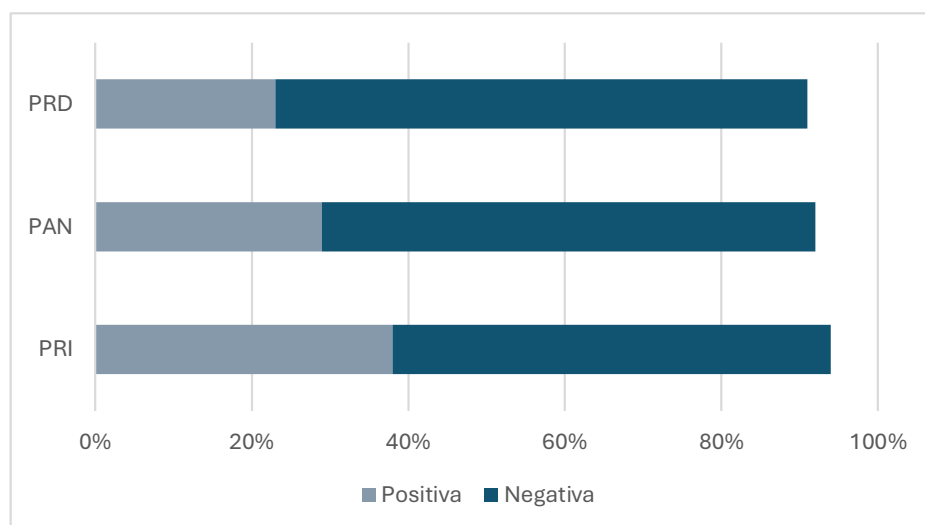
³⁰³ *Loc. cit.*

³⁰⁴ El estudio llevó a cabo la pregunta: ¿cómo crees que afecten las siguientes instituciones sobre la situación actual del país? Se respondía de manera positiva o negativa.

³⁰⁵ *Loc. cit.*

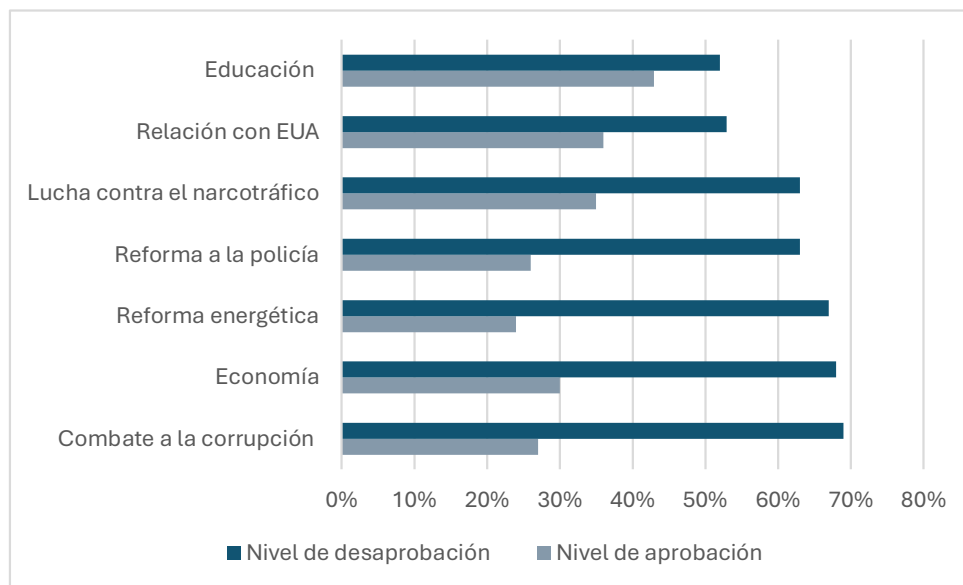
³⁰⁶ *Loc. cit.*

Figura VIII. Evaluación ciudadana del gobierno según identidad partidista (2015)



Fuente: Gráfico de elaboración propia, con los datos obtenidos en Danielle Cuddington y Richard Wike, “Declining Ratings for Mexico’s Peña Nieto”, *Pew Research Center*, 2015, <https://www.pewresearch.org/global/2015/08/27/declining-ratings-for-mexicos-pena-nieto/>.

Figura IX. Evaluaciones ciudadanas sobre principales problemas del país (jerarquía) (2015)



Fuente: Gráfico de elaboración propia, con los datos obtenidos en Danielle Cuddington y Richard Wike, “Declining Ratings for Mexico’s Peña Nieto”, *Pew Research Center*, 2015, <https://www.pewresearch.org/global/2015/08/27/declining-ratings-for-mexicos-pena-nieto/>.

A pesar de los compromisos de ambos partidos, el PAN y el PRI, la inseguridad en el país no se redujo. La violencia y la incidencia del crimen predominaron e, incluso, aumentaron exponencialmente. La tasa de homicidios continuó en subida y el dominio de los grupos de crimen organizado se profundizó. La percepción ciudadana de la gestión del gobierno de la seguridad pública fue de decepción. Y, aunque hubo una clara falta de satisfacción con cómo se luchaba contra el problema, la gran mayoría del electorado apoyaba fuertemente el uso de políticas de mano dura y el despliegue de las Fuerzas Armadas para combatir al narcotráfico. La aprobación ciudadana de las medidas de corte más antidemocrático es prueba de que, en el contexto de una democracia joven, cuando las expectativas son altísimas, ciertos valores más autoritarios pueden ocupar un lugar importante en la percepción de la ciudadanía. No obstante, también las afinidades partidistas de las personas han probado ser un filtro relevante en las evaluaciones.

III.2 La relevancia de la identidad partidista de la ciudadanía mexicana

La identidad partidista de la ciudadanía resulta relevante para entender cómo se formulan las evaluaciones al gobierno. Como lo expone el capítulo teórico, existe un extenso cuerpo de literatura que discute los efectos del partidismo sobre las opiniones de los individuos. Lupu sostiene que el vínculo entre ciudadano y partido político tiende a ser determinante no sólo en su decisión de voto, sino también en la valoración del trabajo del gobierno.³⁰⁷ Si bien los lazos partidistas en América Latina no se han consolidado completamente, en parte por las recientes transiciones democráticas, los niveles de identificación individual con los partidos varían significativamente en los países y son relativamente altos en algunos contextos.³⁰⁸ Como veremos, el peso de la identificación partidista de la ciudadanía mexicana ha aumentado en la evaluación del gobierno.

Estudiar la evaluación que hacen los mexicanos sobre el trabajo del Ejecutivo desde el ángulo partidista es relevante por, cuando menos, dos razones. En primer lugar, el vínculo partido-ciudadano permite la integración de varios intereses y preferencias presentes en la sociedad. En este sentido, el partidismo le brinda atajos de información a los votantes y reduce los costos de movilización para los políticos.³⁰⁹ Por lo tanto, es de suponer que la gestión que tiene el gobierno pasa por un filtro partidista, que predispone y precisa los detalles de la apreciación ciudadana. En esencia, las percepciones ciudadanas están curadas por una serie de factores, entre ellos, la identidad partidista que sirve como prisma evaluador.

³⁰⁷ Noam Lupu, "Partisanship in Latin America", en Carlin, Ryan E. et al (eds.), *The Latin American Voter: Pursuing Representation and Accountability in Challenging Contexts*, University of Michigan Press, 2015, p. 226.

³⁰⁸ Melina Altamirano, "Vulnerability and Partisanship in Latin America", *Latin American Politics and Society*, num. 3, vol. 61, 2019, p. 80.

³⁰⁹ *Loc. cit.*

En segundo lugar, la identidad partidista de la ciudadanía mexicana pudo haber adquirido un mayor peso en las últimas dos décadas por dos motivos: 1) la transición democrática, que ofreció una pluralidad de partidos a los votantes en su elección y 2) el repentino despegue de la identificación morenista. Es evidente que, bajo el contexto de alternancia, el partidismo de la ciudadanía logró tomar un lugar importante, dado que, después de siete décadas priistas, la oposición representaba opciones reales y tangibles, finalmente. Sin embargo y, quizás lo más importante, dada la naturaleza reciente de Morena como partido político formalmente establecido, el claro pero repentino estallido de las afinidades populares que ha alcanzado.

III.2.1 La identidad morenista

El partidismo es una expresión de afinidad con una organización política y puede considerarse un indicador de un vínculo programático ciudadano-partido.³¹⁰ Por vínculo programático se entiende la conexión entre la ciudadanía y el partido político a partir de cierta ideología o de las políticas que proponen. Los votantes observan la oferta y el desempeño del partido y, en consecuencia, evalúan si existe un sentimiento de afinidad o relación.³¹¹ Los enlaces políticos surgen de determinantes sociales y económicos que son relevantes para los ciudadanos, por lo que, si sus intereses se ven representados en las plataformas partidistas, es lógico que depositen en ellas un sentido de identidad.³¹² A partir de esto, la ciudadanía confía y utiliza el partidismo como un atajo informativo con el cual puede evaluar de manera continua al gobierno, sus políticas, su gestión y sus propuestas.³¹³

³¹⁰ Melina Altamirano, "Vulnerability and Partisanship in Latin America", *Latin American Politics and Society*, num. 3, vol. 61, 2019, p. 85.

³¹¹ *Loc. cit.*

³¹² *Ibid.*, p. 82.

³¹³ *Ibid.*, p. 81.

Aunado a lo anterior, autores como Castro Cornejo arguyen que hay otra base de la identidad partidista, que parte de los apegos afectivos y la animadversión hacia otras etiquetas partidistas.³¹⁴ En este sentido, el ciudadano puede inclinarse hacia un partido u otro a partir del rechazo a las contrapartes, o bien por una polarización afectiva hacia una marca partidista. Esto impacta directamente en sus evaluaciones, ya que cuanto más polarizadas sean las respuestas afectivas de los partidistas hacia los partidos opositores, mayor será la influencia que estos sentimientos negativos puedan tener en sus percepciones.³¹⁵ Por lo tanto, el autor afirma que la polarización afectiva influye cada vez más en el comportamiento y la formación de actitudes de los votantes, tanto en las democracias tradicionales como en las nuevas.³¹⁶

Además de esto, sin embargo, existe evidencia de que los vínculos entre ciudadanos y partidos tienden a consolidarse a medida en que el electorado los evalúa a lo largo de repetidos ciclos electorales.³¹⁷ El caso de la ciudadanía mexicana y su relación con Morena es notable. A pesar de su corta trayectoria, la identidad partidista de la gran mayoría del electorado mexicano se encuentra en favor de Morena. En cuestión de cuatro años, tuvo lugar un cambio radical en la relación de los partidos políticos de México para con la ciudadanía. La elección de Andrés Manuel López Obrador pone de manifiesto lo anterior, pues llegó a la victoria como el candidato, hasta el momento, con más votos a su favor en la historia democrática del país.

A principios de siglo, con el contexto de la transición democrática, gran parte del electorado mexicano simpatizaba fuertemente con el PAN. Esto se puede explicar porque el PAN era el partido opositor al régimen priista, que prometía el cambio real y tangible con la alternancia. Este efecto

³¹⁴ Rodrigo Castro Cornejo, “Who believes in fraud in the 2006 Mexican Presidential Election? Election Denialism, Partisan Motivated Reasoning, and Affective Polarization”, *Latin American Research Review*, vol.1, num. 22, 2024, p. 7.

³¹⁵ *Loc. cit.*

³¹⁶ *Loc. cit.*

³¹⁷ *Ibid.*, p. 91.

se puede observar en la Figura X, cuando en 2006, a finales del primer gobierno panista, la ciudadanía encontraba una fuerte preferencia por el partido en cargo y por el PRD, los dos opositores formales, en comparación con el PRI.

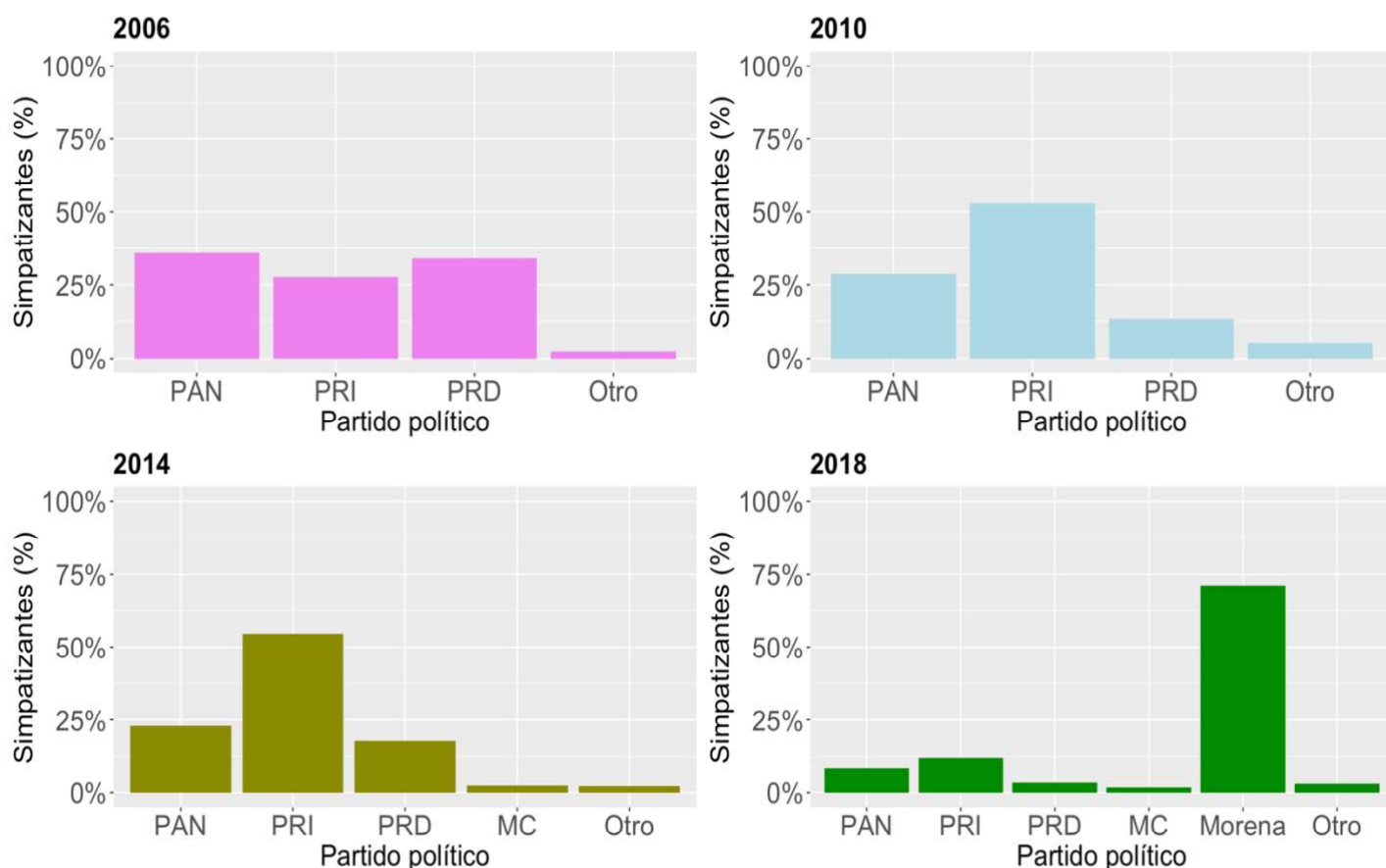
No obstante, para 2010, a un par de años del fin del gobierno de Calderón, los mexicanos regresaron a simpatizar en mayor medida con el PRI. Pareciera que gran parte del grupo de partidarios panistas se transfirió, en el sexenio calderonista, al PRI, y así también para quienes apoyaban, en 2004 al PRD. Resulta lógico este resultado, dado el regreso del gobierno del PRI después de, solamente, dos periodos de administración opositores. Llama la atención, empero, ya que esto indica no sólo un cambio notable en cuanto a la identidad partidista de la ciudadanía, sino también la probable decepción que representó el PAN para el electorado en, quizás, más de una cuestión, pero, sobre todo, en el manejo de la seguridad pública.

El desastre de inseguridad y el repunte en el número de homicidios, en la tasa de violencia y crimen que se dieron durante el sexenio de Felipe Calderón pueden ser una de las motivaciones clave para el cambio abrupto en el vínculo entre el partido y sus simpatizantes. Y, si bien, esto muestra que el manejo de la seguridad pública puede ser una causa o determinante del cambio o prevalencia en la identidad partidista de la ciudadanía mexicana, a su vez también es prueba de que la preferencia por un partido político interactúa con las percepciones ciudadanas.

Para 2014, el porcentaje de identificación con el PRI se mantuvo, como lo muestra la Figura X, cuestión que tiene sentido dado el contexto temprano de la administración de Peña Nieto. La inclinación se mantuvo durante los primeros años del gobierno de Peña Nieto, no así hacia el final de su administración. Para los últimos años de su gobierno, el desprestigio y hartazgo por parte de los votantes eran cada vez mayores.

Al mismo tiempo, desde hacía unos años se había comenzado a gestar un nuevo movimiento que se concretó como partido político: el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena). Y, aunque el surgimiento de nuevos partidos, como Movimiento Ciudadano (ver Figura X), se había dado desde el inicio de la década pasada, la popularidad, a los pocos años de su aparición, que adquirió Morena fue histórica. Para 2018, los simpatizantes del PAN y del PRI eran mínimos, los del PRD y otros eran marginales. La gran mayoría de la ciudadanía mexicana encontró en Morena un sentido de identidad que ninguno de los otros partidos, desde la transición democrática, había logrado brindarles. El número de simpatizantes de Morena se disparó y dejó a la identificación con los partidos de oposición en cifras menores.

Figura X. Identidad partidista de la ciudadanía mexicana (2006 – 2018)



Fuente: Elaboración propia, con datos del Barómetro de las Américas (2006 – 2018), LAPOP. ³¹⁸

III.2.2 Evaluaciones ciudadanas en la alternancia (2010)

Como un primer análisis exploratorio de los correlatos de las variables que inciden en la aprobación presidencial, presento la magnitud de las asociaciones en un conjunto de variables de la encuesta del Barómetro de las Américas para 2010. Utilizo la medición de este año por dos razones. En primer lugar, 2010 corresponde a un año en el que Calderón estaba hacia la mitad de su administración, después de la declarada guerra contra el narcotráfico y la crisis de 2008, por lo que es posible observar cambios significativos en las percepciones de la opinión pública. Segundo, para 2010, como se observa en la Figura X hay un desplazamiento en el partidismo de las personas, con un movimiento evidente hacia el PRI, a diferencia de la mayor identificación con el PAN en años anteriores.

Para realizar este ejercicio, selecciono algunas variables de interés: la identificación partidista de la ciudadanía, el grado en el cual se sienten seguros en donde viven, la medida en que observan que el gobierno maneja la inseguridad del país y el nivel de satisfacción con la democracia.

Cuadro I. Correlaciones entre Variables de Opinión Pública (2010)

Características de las variables		Correlaciones		
Variable	Operacionalización y frecuencia de observaciones en categorías	Variable 1	Variable 2	Variable 3
1. Seguridad en la vivienda	“Muy seguro”: 84 obs. “Algo seguro”: 169 obs. “Algo inseguro”: 113 obs. “Muy inseguro”: 39 obs.	1	Correlación: 0.175 P-Value: 0.00	Correlación: -0.1385121 P-Value: 0.00
2. Satisfacción con la democracia	“Muy satisfecho”: 16 obs. “Satisfecho”: 184 obs. “Insatisfecho”: 171 obs.	Correlación: 0.175 P-Value: 0.00	1	Correlación: -0.3580628 P-Value: < 0.00

³¹⁸ Debe considerarse que la muestra de observaciones que se utilizaron para realizar estas gráficas de comparación conforma un subgrupo de una primera pregunta *pase* en la que se interrogó si el encuestado simpatizaba o no con un partido político. Sólo aquéllos que respondieron “Sí” pasaron a la siguiente pregunta “¿con cuál partido simpatizas?” con la cual y se conformó el espacio muestral de las gráficas.

	“Muy insatisfecho”: 34 obs.			
3. Gobierno maneja la inseguridad del país	“Nada”: 141 obs. “Algo”: 158 obs. “Mucho”: 106 obs.	Correlación: -0.1385121 P-Value: 0.00	Correlación: -0.3580628 P-Value: < 0.00	1

A partir de los datos presentados en el Cuadro I, se observa que todas las correlaciones reportadas son estadísticamente significativas, mismo que llama la atención, pues es poco probable que la relación entre las variables se deba al azar. La correlación positiva entre la sensación de seguridad en la vivienda y la satisfacción con la democracia (Correlación = 0.175, p-value < 0.00) sugiere que, en general, las personas que perciben mayor seguridad en su localidad tienden a estar más satisfechas con la democracia mexicana. Esto podría indicar que la percepción de seguridad en el entorno inmediato contribuye a una visión más positiva del sistema democrático.

Por otro lado, la correlación negativa entre la percepción de que el gobierno maneja la inseguridad y la satisfacción con la democracia (Correlación = -0.358, p-value < 0.00) revela que aquellos ciudadanos que consideran que el gobierno tiene un mal manejo de la inseguridad tienden a estar menos satisfechos con la democracia. Esto muestra que la forma en que la ciudadanía evalúa la gestión gubernamental de la seguridad pública influye significativamente en su nivel de satisfacción democrática. En otras palabras, percepciones desfavorables sobre el manejo de la inseguridad podrían estar asociadas con una mayor decepción con el sistema democrático. Las siguientes secciones se enfocan en el análisis más completo de los determinantes de la aprobación presidencial en 2023, para considerar en el efecto conjunto de las variables centrales de este proyecto.

III.3 Análisis empírico

Para poner a prueba las hipótesis centrales de esta tesis, analizo los determinantes de los niveles de aprobación presidencial expresada por los mexicanos durante el sexenio del presidente López Obrador. El objetivo es analizar en qué medida la identidad partidista de los individuos incide en la manera de evaluar el desempeño gubernamental al tomar en cuenta también las percepciones y experiencias de la ciudadanía en materia seguridad. El Cuadro II presenta una síntesis de las hipótesis planteadas en el primer capítulo.

Cuadro II. Hipótesis de trabajo

H1: Las personas que hayan sido víctimas del crimen y violencia serán menos propensas a evaluar positivamente el trabajo del Ejecutivo.
H2: Las personas que perciban a su entorno inseguro serán menos propensas a evaluar positivamente el trabajo del Ejecutivo.
H3: Las personas que se identifican con el partido del presidente (Morena) serán más propensas a evaluar positivamente el trabajo del Ejecutivo, independientemente de su experiencia de victimización.
H4: Las personas que se identifican con el partido del presidente (Morena) serán más propensas a evaluar positivamente el trabajo del Ejecutivo, independientemente de su percepción de inseguridad en su entorno (en su localidad o vivienda).
H5: Los ciudadanos que reporten tener una mayor confianza en las Fuerzas Armadas y que se identifiquen con Morena, serán más propensos a tener mayores niveles de aprobación del trabajo del Ejecutivo, en comparación con aquellos que no se identifiquen con el partido.

El estudio de la relación entre las características individuales de la ciudadanía, sus afinidades políticas y evaluaciones retrospectivas con las percepciones que tienen sobre el gobierno es útil para elucidar varios aspectos. Por ejemplo, estos mecanismos resultan importantes para comprender el nivel de apoyo a ciertas políticas o propuestas para hacer frente a problemas públicos apremiantes. Además, un peso predominante de las afinidades partidistas en la aprobación

presidencial, por encima de las evaluaciones retrospectivas puede tener consecuencias para los procesos de rendición de cuentas entre la administración federal y la ciudadanía.

Por lo tanto, el análisis que realizo tiene como objetivo buscar las distintas configuraciones entre las identidades partidistas, las experiencias de victimización, las percepciones de inseguridad y las tendencias ideológicas para observar su impacto conjunto en la evaluación que hacen del gobierno de López Obrador. Los siguientes apartados presentan de manera detallada la aproximación metodológica, las fuentes de información que utilizo para el análisis y la caracterización de las variables clave utilizadas en el estudio.

III.3.1 Datos y metodología

Existen diversas encuestas que exploran las preferencias ciudadanas en México. Dada la disponibilidad de los datos y las diversas dimensiones incluidas en el instrumento, hago uso del Barómetro de las Américas para examinar mis hipótesis y poner a prueba mi argumento. La encuesta del Barómetro de las Américas es el proyecto de investigación más grande de LAPOP, *Latin American Public Opinion Project*, de la Universidad de Vanderbilt. LAPOP es la principal institución académica que realiza encuestas de opinión pública en las Américas y entre sus varios objetivos está el estudio de las actitudes, evaluaciones y experiencias individuales. Los resultados del Barómetro de las Américas son de libre acceso, se publican periódicas y cubren una gama amplia de temas relacionados con las esferas sociales y políticas en 34 países del hemisferio occidental (Norte, Centro, Sur y Caribe).³¹⁹

La información que proporciona LAPOP es de gran relevancia y utilidad, ya que es una encuesta comparativa de los valores y comportamientos democráticos de las personas en los países

³¹⁹ Vanderbilt University, “Barómetro de las Américas”, *LAPOP*, <https://www.vanderbilt.edu/lapop/mexico.php>.

que cubre a partir de muestras probabilísticas nacionales de adultos en edad de votar. Las comparaciones pueden hacerse entre países, pero también a lo largo del tiempo en una misma muestra nacional, sobre temas como la economía, el estado de derecho, la capacidad del Estado, la confianza en las instituciones, los valores individuales, la corrupción, la seguridad, la victimización y las percepciones democráticas.³²⁰

Para realizar el presente estudio, tomo en cuenta la muestra que corresponde a México. Dado que el objetivo es estudiar la evaluación ciudadana del desempeño de López Obrador, tomo el año 2023. Es decir, parto del supuesto de que, dado que más del 80% del sexenio ya había transcurrido en 2023, la ciudadanía contaba con suficiente información para realizar una evaluación. Vale la pena resaltar que la encuesta utiliza una estrategia de muestreo y estratificación, con miras a asegurar resultados representativos, con base en las áreas urbanas/rurales y el tamaño de los municipios encuestados.³²¹ Se trata de una encuesta que se realizó de manera presencial entre mayo y julio de 2023, a 1,622 personas en total.

Con base en lo anterior, tomo 13 de las preguntas realizadas en las encuestas y las codifico como variables. La variable dependiente es la evaluación del desempeño gubernamental del Ejecutivo Federal, en 2023. Las variables independientes clave son la identidad partidista y las percepciones y experiencias en materia de seguridad. A partir de la investigación empírica existente sobre aprobación presidencial incluyo también un conjunto de variables de control que han resultado relevantes en análisis anteriores.

³²⁰ *Loc. cit.*

³²¹ Barómetro de las Américas, “Información técnica: 2023”, *Universidad de Vanderbilt*, <http://datasets.americasbarometer.org/database/files/ABMEX2023-Technical-Report-v4.0-FINAL-eng-231117.pdf>

III.3.1.1 Variable dependiente

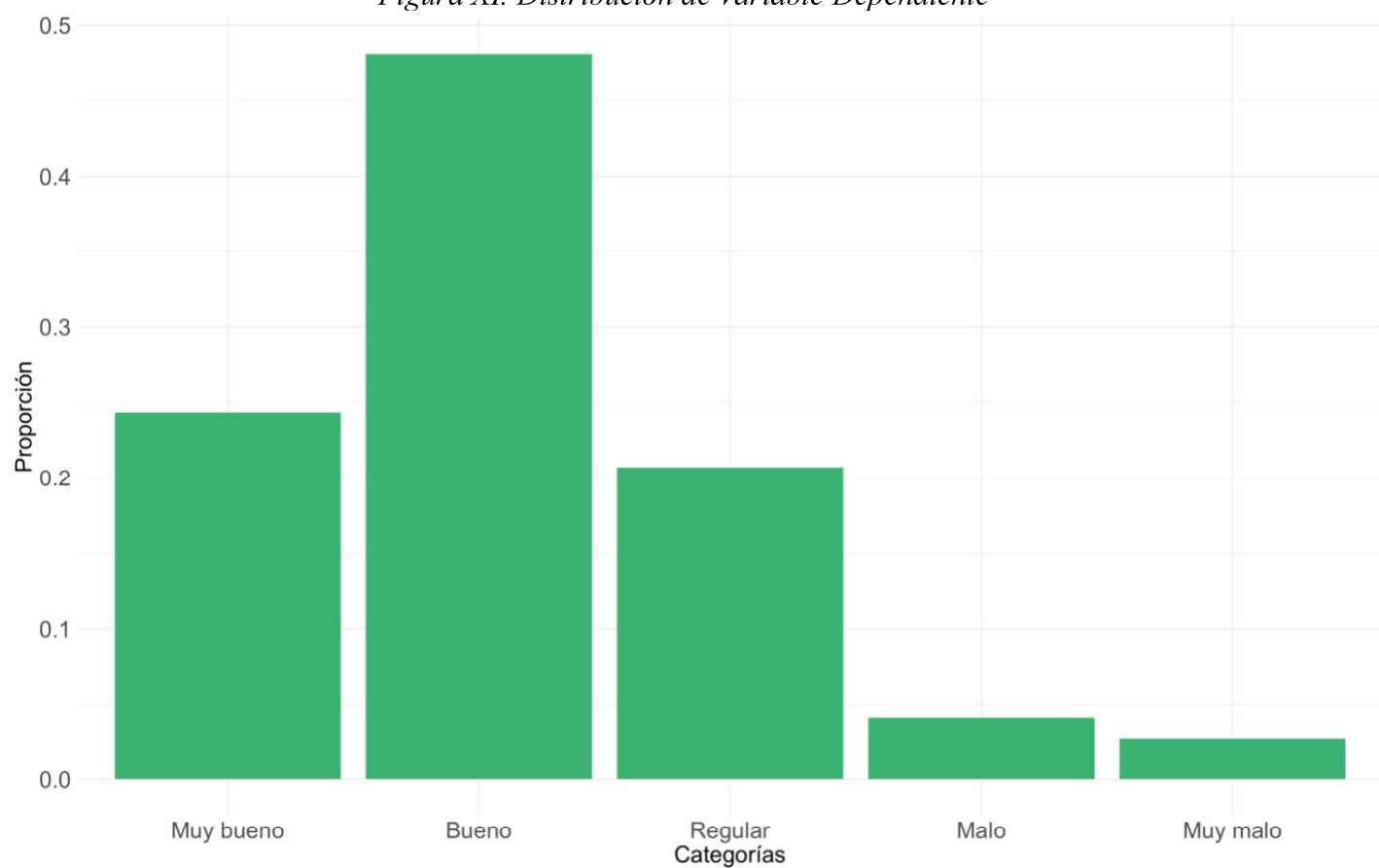
La evaluación del desempeño del Ejecutivo Federal se mide, en el Barómetro de las Américas, a partir de la siguiente pregunta: “*hablando en general acerca del gobierno actual, ¿diría usted que el trabajo que está realizando el presidente Andrés Manuel López Obrador es...?*”. Las opciones de respuesta de los encuestados son: muy bueno, bueno, regular (ni bueno/ni malo), malo y muy malo (pésimo). El cuadro II muestra la estadística descriptiva de la variable dependiente, la evaluación del desempeño del gobierno.

Tabla II. Distribución de Variable Dependiente (2023)

Respuesta (n = 1617)	Porcentaje
Muy bueno (5)	24.36%
Bueno (4)	48.11%
Regular (ni bueno/ni malo) (3)	20.71%
Malo (2)	4.08%
Muy malo (pésimo) (1)	2.72%
Estadística descriptiva	
Promedio	3.873
Mediana	4
Moda (mayor frecuencia)	4

La distribución de respuestas para la variable dependiente indica que la percepción general es mayormente positiva. La mayoría de los encuestados calificaron al trabajo de López Obrador como "buena" (48.11%) o "muy buena" (24.36%), lo que representa más del 70% de la muestra. Un 20.71% optó por una posición neutral, que se observa como "regular", mientras que solo una minoría lo percibió negativamente (4.08% calificó como "mala" y 2.72% como "muy mala").

Figura XI. Distribución de Variable Dependiente



Fuente: Elaboración propia con datos de Barómetro de las Américas (2023), LAPOP.

III.3.1.2 Variables independientes y de control

Para evaluar el efecto de los elementos influyentes, según la literatura y los distintos estudios antes presentados, utilizo doce de las preguntas realizadas en la encuesta de LAPOP y las divido en 3 grupos de variables.

Grupo 1: Exposición al crimen y violencia

Para poder explorar la manera en que la ciudadanía ha interactuado con la inseguridad del país y su efecto que tiene sobre la evaluación del desempeño gubernamental, caracterizo un primer grupo de variables como *exposición al crimen y violencia*. Utilizo dos variables principales: las experiencias de victimización y la percepción de inseguridad en su entorno inmediato (vivienda o localidad). Las experiencias de victimización se miden con la pregunta, “¿ha sido usted víctima de algún acto de delincuencia en los últimos 12 meses? Es decir, ¿ha sido usted víctima de un robo, hurto, agresión, fraude, chantaje, extorsión, amenazas o algún otro tipo de acto delictual en los últimos 12 meses?”. Las percepciones de inseguridad se miden con: “hablando del lugar o el barrio/la colonia donde usted vive y pensando en la posibilidad de ser víctima de un asalto o robo, ¿usted se siente muy seguro(a), algo seguro(a), algo inseguro(a) o muy inseguro(a)?”.

Tabla III. Grupo 1 de Variables Independientes

Operacionalización de Experiencias de Victimización	Porcentaje de respuesta
Sí (1)	33.3%
No (0)	66.7%
Percepción de inseguridad en la vivienda	Descripción
Operacionalización	1 – 4 Muy seguro – muy inseguro
Promedio	2.6
Moda	3

Grupo 2: Identidad política

El segundo grupo de variables refiere a la *identidad política* de la ciudadanía. Escojo dos variables que capturan dos dimensiones de la identidad política individual. Primero la identidad partidista, la variable independiente clave de esta tesis, que se mide a partir de la pregunta, “¿con cuál partido político simpatiza usted?” (el número de personas que contestan esta pregunta se reduce dado que primero se pregunta si simpatizan o no con un partido político y, de esta, sólo aquellos con una respuesta positiva pasan a la pregunta de “cuál”. Es decir, se trata de una pregunta “pase”, lo que reduce el universo y, por lo tanto, aumenta el porcentaje de manera notable)³²². Segundo, utilizo la posición de las personas en el espectro de ideología política, que se pregunta de esta manera: “una escala del 1 a 10 que va de izquierda a derecha, en la que el 1 significa izquierda y el 10 significa derecha. Según el sentido que tengan para usted los términos “izquierda” y “derecha” cuando piensa sobre su punto de vista político, ¿dónde se encontraría usted en esta escala?”.

Tabla IV. Grupo 2 de Variables Independientes

Operacionalización de Identidad partidista	Porcentaje de respuesta
Morena (1)	83.5% (de 387)
Oposición (0)	16.5% (de 387)
Posición ideológica	Descripción
Operacionalización	1 – 10 Izquierda - derecha
Promedio	5.148
Moda	5

Grupo 3: Confianza institucional

Para poder tener un acercamiento a la manera en que percibe la ciudadanía a ciertas instituciones de seguridad del país, tomo en cuenta tres variables de *confianza institucional* para analizar los

³²² El porcentaje de personas que, en LAPOP 2023, reportó simpatizar con algún partido político fue de 24.72%. Mientras que el porcentaje de personas que no simpatizaba con ningún partido político fue de 75.28%. De ese 24.72%, 83.5% reportó identificarse con Morena y el 16.5% con algún partido de oposición.

efectos que tienen sobre el examen que realizan los individuos sobre el trabajo del presidente. En este sentido, en primer lugar, selecciono la confianza sobre las Fuerzas Armadas y, en segundo, la confianza sobre la Policía. Ambas variables se encuentran en una pila de preguntas con el siguiente formato: “¿hasta qué punto tiene confianza en (las Fuerzas Armadas o la Policía, respectivamente)?”. Las respuestas se toman como una escala del 1 al 7, donde 1 es “Nada” y 7 es “Mucho”. La tercera variable que utilizo es la percepción de corrupción del funcionariado público, ya que captura de manera más general cuánta confianza se deposita en el gobierno. Cabe mencionar, además, la importancia del uso de la corrupción como recurso discursivo en el sexenio, por lo que añadir esta variable es, cuando menos, relevante. A partir de la pregunta, “teniendo en cuenta su experiencia o lo que ha oído mencionar, ¿la corrupción de los funcionarios públicos en el país está...?”, las respuestas varían entre muy generalizada (4), algo generalizada (3), poco generalizada (1) y nada generalizada (0).

Tabla V. Grupo 3 de Variables Independientes

Confianza en las Fuerzas Armadas	Descripción
Operacionalización	1 – 7 <i>Nada – Mucho</i>
Promedio	4.95
Moda (mayor frecuencia)	7
Confianza en la Policía	Descripción
Operacionalización	1 – 7 <i>Nada – Mucho</i>
Promedio	3.416
Moda (mayor frecuencia)	1
Percepción de Corrupción en el FP	Porcentaje de respuesta
Operacionalización	1 – 4 <i>Nada generalizada – Muy generalizada</i>
Promedio	2
Moda (mayor frecuencia)	1

Grupo 4: Variables de control

Por último, considero una serie de características sociodemográficas de la población como variables de control del estudio, las cuales seleccioné a partir de la literatura existente. Tomo, entonces, la edad, el sexo de la persona encuestada, su nivel educativo y su ocupación en el momento del estudio y, por último, el tipo de municipio en el que vive.

Agrego una última variable de control, la cual denomino “problema de seguridad” ya que tiene que ver con el problema que se considera como el más grave del país según las personas encuestadas. Esta variable funciona para observar la influencia de considerar el problema de seguridad como uno de los aspectos principales en el país sobre la aprobación del trabajo presidencial. La encuesta considera una serie de problemas, como económicos, políticos y sociales, pero para observar el impacto directo de la inseguridad, divido la variable en dos: seguridad y otros problemas, donde se encuentran todas las otras opciones de respuesta de la encuesta.

Tabla VI. Grupo 4 de Variables Independientes de Control

Edad	Descripción
Operacionalización	Número de años cumplidos (18+)
Valor máximo	94
Promedio	41.84
Operacionalización de Sexo	Porcentaje de respuesta
Hombre	48.7%
Mujer	51.3%
Operacionalización de Nivel Educativo	Porcentaje de respuesta
Ninguno	2.35%
Básica	20.1%
Media superior	58.2%
Superior	19.3%
Operacionalización de Ocupación	Porcentaje de respuesta
Empleado	53%
Busca trabajo	4.51%
Estudiante	5.88%
Trabaja en el hogar	27.6%
Jubilado/incapacitado	5.88%
Sin trabajo y no busca	3.09%
Operacionalización de Municipio	Porcentaje de respuesta

Urbano	79.8%
Rural	20.2%
Operacionalización de Problema de Seguridad	Porcentaje de respuesta
Otros problemas	53.6%
Seguridad	43.9%

III.3.2 Pruebas y modelos

Para medir el impacto de las variables de cada uno de los grupos, realizo cinco modelos de regresión logística *probit* ordenada. Esta elección de prueba estadística se debe a la naturaleza de la variable dependiente del estudio: puesto que se trata de una variable categórica ordenada, un *probit* ordenado es el análisis que mejor se ajusta a su estructura. Los cinco modelos tienen en común las cinco variables de control sociodemográfico, con el objetivo de mantener condiciones *ceteris paribus*.

III.3.3 Hallazgos e interpretación de modelos

Modelos 1 y 2:

El cuadro III muestra los resultados de las cinco estimaciones. Los primeros dos modelos funcionan como pruebas empíricas base sin considerar el partidismo. Es decir que, en el Modelo 1, sólo se toma en cuenta el impacto de las variables de confianza institucional y las de control sociodemográfico, sin la influencia de la identidad partidista, en la evaluación del trabajo del presidente. La confianza en las Fuerzas Armadas y en la percepción de corrupción en el funcionariado público tienen un efecto significativo en la aprobación: positivo en el caso de la confianza en las Fuerzas Armadas y negativo para las percepciones de corrupción. El efecto de considerar la seguridad como el problema más grave del país es negativo y significativo sobre la evaluación del trabajo presidencial.

El Modelo 2 incorpora las variables relacionadas con percepciones y experiencias individuales con la inseguridad. Los resultados sugieren que la percepción de seguridad en el entorno tiene un efecto positivo en la aprobación presidencial, mientras que las experiencias de victimización tienen un impacto negativo.

Cuadro III. Modelos de regresión probit ordenado de la aprobación presidencial en 2023

Variables	Modelo 1	Modelo 2	Modelo 3	Modelo 4	Modelo 5
Problema de seguridad	-0.23* (0.10)	-0.17 (0.10)	-0.26* (0.10)	-0.29 ** (0.10)	-0.30 ** (0.10)
Confianza en las Fuerzas Armadas	0.18 *** (0.03)	0.18 *** (0.03)	0.17 *** (0.03)	0.18 *** (0.03)	0.19 *** (0.03)
Confianza en la policía	0.08 ** (0.03)	0.05 (0.03)	0.05 (0.03)	0.09 ** (0.03)	0.08 ** (0.03)
Percepción de corrupción en el FP	-0.19 *** (0.05)	-0.17 *** (0.05)	-0.17 ** (0.05)	-0.21 *** (0.05)	-0.18 *** (0.05)
Edad	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	-0.01 (0.00)	0.00 (0.00)	-0.00 (0.00)
Mujer	-0.20 (0.12)	-0.13 (0.12)	-0.04 (0.13)	-0.19 (0.12)	-0.17 (0.13)
Educación	0.01 (0.04)	0.00 (0.04)	-0.04 (0.04)	-0.01 (0.04)	-0.02 (0.04)
Desempleado	0.23 (0.19)	0.23 (0.19)	0.29 (0.19)	0.23 (0.19)	0.27 (0.19)
Estudiante	0.68 ** (0.22)	0.61 ** (0.22)	0.42 (0.22)	0.61 ** (0.22)	0.67 ** (0.22)
No remunerado	0.12 (0.14)	0.10 (0.14)	0.05 (0.15)	0.07 (0.14)	0.11 (0.15)
Jubilado	0.63 ** (0.22)	0.64 ** (0.23)	0.57 * (0.24)	0.71 ** (0.23)	0.72 ** (0.24)
Rural	0.20 (0.12)	0.15 (0.12)	0.12 (0.13)	0.18 (0.12)	0.17 (0.13)
Percepción de seguridad en vivienda		0.30 *** (0.05)	0.31 *** (0.06)		
Víctima de crimen		-0.25 * (0.12)	-0.26 * (0.12)		
Morenista			1.39 *** (0.13)		
Ideología (izq(1) - der(10))			-0.01 (0.02)	-0.01 (0.02)	-0.01 (0.02)
Morenista víctima de crimen				1.27 *** (0.23)	
Morenista con percepción de inseguridad en vivienda					0.96 *** (0.18)
AIC	3748.83	3680.02	3455.85	3620.20	3459.94
BIC	3834.19	3775.92	3561.72	3715.75	3554.59
Log Likelihood	-1858.42	-1822.01	-1707.92	-1792.10	-1711.97
Deviance	3716.83	3644.02	3415.85	3584.20	3423.94
Num. Obs.	1533	1522	1471	1492	1420
*** p < 0.001; ** p < 0.01; * p < 0.05					

Cuadro IV. Efectos de variables en modelos

Variable	Modelo 1	Modelo 2	Modelo 3	Modelo 4	Modelo 5
Problema de seguridad	Negativo*		Negativo*	Negativo**	Negativo**
Confianza en Fuerzas Armadas	Positivo***	Positivo***	Positivo***	Positivo***	Positivo***
Confianza en Policía	Positivo**			Positivo**	Positivo**
Percepción de corrupción en funcionariado	Negativo***	Negativo***	Negativo**	Negativo***	Negativo***
Estudiante	Positivo**	Positivo**		Positivo**	Positivo**
Jubilado	Positivo**	Positivo**	Positivo*	Positivo**	Positivo**
Percepción de seguridad en vivienda		Positivo***	Positivo***		
Víctima de crimen		Negativo*	Negativo*		
Identificación morenista			Positivo***		
Morenista víctima de crimen				Positivo***	
Morenista con percepción de inseguridad en vivienda					Positivo***

*** $p < 0.001$; ** $p < 0.01$; * $p < 0.05$

El efecto positivo de la percepción de seguridad en la vivienda ($\beta = 0.30$) se debe a la operacionalización de la variable (ver cuadro IV), donde valores más altos, es decir, mientras más seguro se sienta el individuo, más probable será a brindarle una mejor evaluación al Ejecutivo Federal. En cambio, las experiencias de victimización ($\beta = -0.25$) tienen un efecto negativo sobre la aprobación del trabajo presidencial, dado que aquellas personas que han sido víctimas de delincuencia serán menos propensas a evaluarlo positivamente. Estos hallazgos proporcionan evidencia en favor de las hipótesis 1 y 2:

Cabe mencionar que, en el segundo modelo, donde se toman en cuenta estas últimas variables, el efecto de considerar a la seguridad como el principal problema del país ($\beta = -0.17$) permanece siendo negativo, pero pierde su significancia estadística.

Modelo 3:

El Modelo 3 toma en consideración las mismas variables que los primeros dos, con la diferencia de que incluye la variable independiente clave de afinidad partidista. Este modelo contempla la probabilidad de que los ciudadanos evalúen positivamente el desempeño del presidente, bajo el efecto de las tres variables de confianza institucional, las dos de exposición a la violencia, las características sociodemográficas y las dos variables de identidad política (afinidad partidista e ideología). Los resultados varían al considerar el efecto conjunto de estas variables en esta especificación.

En primer lugar, observar a la seguridad como el problema más grave que enfrenta el país ($\beta = -0.26$) vuelve a adquirir significancia estadística, su efecto continúa negativo. Es decir que, al contemplar el efecto de identificarse con Morena, asociar a la inseguridad como el aspecto más preocupante tiene relevancia e influye negativamente sobre la evaluación del trabajo del Ejecutivo.

La confianza en la policía ($\beta = 0.05$), como en el segundo modelo, permanece sin significancia estadística. El efecto de la percepción de corrupción en el funcionariado público ($\beta = -0.17$) se mantiene y sigue teniendo una relación negativa. Es decir que, a pesar de una afinidad morenista, la percepción de alta corrupción en la administración pública provoca una tendencia a una evaluación del presidente menos favorable. El tercer modelo es el único de los cinco donde el ser estudiante no es relevante estadísticamente, aunque su efecto es positivo, como en los demás casos.

La identidad morenista ($\beta = 1.39$) tiene una alta significancia estadística y un efecto positivo. Esto es consistente con las hipótesis propuestas: aquellos ciudadanos que simpatizan con el partido en el cargo serán más propensos a evaluar de manera positiva el desempeño del gobierno. Los efectos de las variables del primer grupo de independientes se mantienen casi idénticas al Modelo 2, donde no interviene la identidad política de la ciudadanía. Sin embargo, este no es indicador de que el filtro partidista pasa desapercibido.

Modelos 4 y 5:

Si bien con los modelos anteriores es posible observar el efecto independiente de ambas dimensiones de exposición al crimen y también de la identidad partidista, para poder controlar el efecto del lente partidista, diseño dos variables de interacción. Primero, elaboro una variable que tome en cuenta a la ciudadanía que se considera afín a Morena, pero que también haya sufrido experiencias de victimización recientemente. Este efecto se observa en el Modelo 4. En segundo lugar, propongo otra variable de interacción que engloba la identidad partidista y también una percepción de inseguridad en el entorno inmediato. Incluyo esta variable en el Modelo 5.

Los efectos de las variables de confianza institucional y de control sociodemográfico se mantienen relativamente parecidos en los modelos 4 y 5. La consideración del problema de seguridad como el más grave del país adquiere una mayor significancia estadística que en el resto de los modelos. Si bien el efecto negativo se mantiene en los cinco, su relevancia es mayor al considerar las interacciones de morenistas víctimas de crimen, en el modelo 4 donde $\beta = -0.29$, y de morenistas con una alta percepción de inseguridad en su vivienda, en el modelo 5 donde $\beta = -0.30$.

En el Modelo 4, la interacción de un morenista que ha sufrido experiencias de victimización ($\beta = 1.27$) adquiere una significancia estadística alta, pero el efecto se mantiene positivo. Es decir que, a pesar de haber sido víctima de delincuencia y de haber sufrido violencia, un ciudadano que simpatiza con Morena será más propenso a evaluar positivamente el trabajo del presidente. Se puede observar, claramente, el impacto del lente partidista: la β de la variable es más parecida al de identificación partidista en el Modelo 3 ($\beta = 1.39$), que al de experiencias de victimización en el Modelo 2 ($\beta = -0.25$). Su signo es positivo, a diferencia del segundo modelo, donde haber sido víctima de un crimen resultaba en un efecto negativo sobre la aprobación presidencial. Este resultado respalda la expectativa en H3.

Para el quinto modelo la variable que representa a la ciudadanía morenista que percibe a su entorno inseguro se comporta de manera similar ($\beta = 0.96$). La variable tiene una significancia estadística alta también. Pero el efecto se mantiene positivo; es decir que, a pesar de que el ciudadano se sienta inseguro en su vivienda, el lente partidista filtra esa evaluación para brindarle una mayor aprobación al trabajo de López Obrador. La β es mayor a su equivalente en el Modelo 2 ($\beta = 0.30$), donde el efecto es positivo porque mide la percepción de seguridad (cuanto más seguro se sienta un ciudadano, mejor la evaluación del trabajo del Ejecutivo). No obstante, en el Modelo 5, la variable de interacción mide percepción de inseguridad que, bajo la lógica del Modelo 2, implicaría un efecto negativo (cuanto más inseguro se sienta un ciudadano, peor la evaluación del trabajo del Ejecutivo). En tanto que no es así, sino que el efecto se mantiene positivo, los resultados ofrecen evidencia a favor de H4: el partidismo del ciudadano funciona como lente articulador de la evaluación presidencial.

Modelos 1 – 5 (todos):

Al hacer un análisis general del ajuste de los cinco modelos distintos, se pueden observar dos aspectos relevantes. En cuestión del comportamiento de las variables del grupo 3, confianza institucional, su efecto se mantiene relativamente idéntico en todas las configuraciones. La significancia estadística de la confianza en las Fuerzas Armadas es muy alta en todos los modelos y, además, el efecto de la variable es positivo (es decir que cuanta más confianza haya en las Fuerzas Armadas, mejor será la evaluación del desempeño del presidente). La H5 se confirma de manera parcial, ya que el efecto de esto es el mismo cuando no están presentes las variables de exposición a crimen y violencia o de identidad política.

Por último, de manera general, al observar los indicadores de ajuste de los modelos³²³, se puede concluir que los primeros dos, al tener los mayores valores de AIC y BIC, son los peores modelos, en cuestión de capacidad explicativa. Tiene sentido, ya que fueron los modelos *base* de los cuales se partieron para realizar un análisis más complejo. El tercer modelo, si sólo se observan los valores de AIC y BIC, es el “mejor” modelo, el cuál integra las variables de identidad política; sin embargo, no toma en cuenta interacciones, por lo cual su complejidad es menor. Los modelos cuarto y quinto, que integran las interacciones de exposición al crimen y violencia y de identidad política, tienen un mejor ajuste que los primeros dos, aunque no tanto en comparación al tercero. El Modelo 5 tiene un ajuste similar al Modelo 3, con un AIC apenas más alto (3459.94 frente a 3455.85). Es decir que, de manera general, la capacidad explicativa de los modelos mejora conforme se agregan variables de identidad política, mismo que ayuda a confirmar el argumento de la presente tesis, y se complejiza al formar interacciones con las experiencias con violencia y percepciones de inseguridad y delincuencia.

³²³ AIC y BIC funcionan como medidas relativas que comparan la bondad del ajuste entre los diferentes modelos. Ambos valores equilibran la calidad del ajuste del modelo a los datos con la complejidad del modelo.

III.4 Conclusiones

En este capítulo analizo los determinantes de la opinión pública respecto al desempeño gubernamental cuando la ciudadanía está inmersa en contextos de alta inseguridad. El segundo apartado de la presente tesis sirvió como base para entender las políticas de los gobiernos federales ante el incremento del crimen y la violencia en México en los últimos veinte años. Este tercer y último capítulo funciona estudiando el otro lado de la moneda: la reacción ciudadana al trabajo gubernamental. Se trata de un análisis empírico diseñado para poner a prueba las hipótesis formuladas al principio de la investigación, que tienen que ver con la importancia de la valoración individual de la situación de inseguridad y el efecto de la identidad partidista.

Los resultados de este capítulo muestran que la identidad partidista en México es un objeto de estudio más que relevante, sobre todo, dada la coyuntura actual. La creciente preferencia ciudadana por Morena es notable: a pesar de tratarse de un partido relativamente nuevo en la arena política mexicana, ha ganado cada vez mayor fuerza y popularidad. Esto no sólo es interesante como estudio de las reacciones públicas, sino que también llama a las investigaciones a centrarse en esta dimensión como posible filtro determinante de muchas evaluaciones. Por este motivo, lo utilizo como variable independiente clave para analizar la alta aprobación presidencial, aun cuando la violencia y el crimen imperan en el contexto mexicano.

En segundo lugar, los hallazgos del análisis empírico confirman dos aspectos de gran relevancia. Primero, que la identidad partidista durante el sexenio del presidente López Obrador ha sido un factor clave en las evaluaciones ciudadanas sobre el desempeño de su gobierno, quizá mayor que para las administraciones pasadas, ya que el peso del partidismo era mucho menor y en una menor escala.³²⁴ Dado que la situación de inseguridad y violencia se ha deteriorado, sería de

³²⁴ Ma. Fernanda Somuano, “Aprobar al presidente: una comparación entre Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto”, *Foro Internacional*, núm. 4, 2018, p. 664.

esperar que la aprobación presidencial se viera mermada por tales efectos, como en sexenios anteriores (específicamente, con Felipe Calderón). No obstante, los resultados de los modelos estadísticos que presento sugieren que, para el caso de López Obrador, el filtro partidista sirve a su favor en la evaluación de su desempeño, a pesar de las experiencias de victimización y de percepciones de alta inseguridad. En esencia, aquellas personas que se identifican claramente con Morena tienden a percibir positivamente al trabajo del presidente independientemente de las percepciones sobre la situación en su entorno o experiencias personales con la inseguridad.

Los hallazgos estadísticos muestran que la identificación partidista con Morena actúa como un lente evaluativo frente a experiencias adversas, como la victimización por el crimen. Es decir que, incluso quienes reportan haber sido víctimas de delitos mantienen niveles elevados de aprobación hacia López Obrador, si se identifican con Morena. Este resultado destaca la fuerza del partidismo como lente interpretativa, y sugiere que, en el contexto del auge de Morena, la afinidad partidista no sólo condiciona las opiniones ciudadanas, sino que tiende a estabilizar el apoyo presidencial, aun en entornos de creciente inseguridad.

Por último, vale la pena mencionar el papel que juegan los agentes de procuración de justicia y seguridad ciudadana. Para el caso del presidente López Obrador, la policía y las Fuerzas Armadas sostienen un lugar fundamental en el manejo gubernamental para hacer frente a los problemas de crimen y violencia. Los hallazgos de esta investigación muestran que, en contextos de alta inseguridad, la confianza en el trabajo del ejército abona a las evaluaciones del Ejecutivo. Esto indica que el despliegue de las Fuerzas Armadas como estrategia de seguridad, a pesar de ser impopular en algunos segmentos, tiene un peso favorable en la aprobación presidencial entre la ciudadanía en general.

Reflexiones finales

La relación entre el crimen y las evaluaciones de desempeño ha sido generalmente asociada con la política local.³²⁵ Sin embargo, debido al aumento significativo de la delincuencia y la violencia en muchos países del mundo y, sobre todo, de América Latina, la responsabilidad de la seguridad pública se ha desplazado, en gran medida, hacia la esfera nacional de gobierno.³²⁶ México se ha visto particularmente afectado por la creciente violencia relacionada con las organizaciones de crimen organizado y la crisis de delincuencia asociada. En América Latina, los presidentes han surgido cada vez más como las principales figuras responsables de la lucha contra el crimen, sobre todo en los ojos del público.³²⁷

Con base en esto, en esta tesis me propongo analizar el caso de la alta aprobación popular hacia Andrés Manuel López Obrador, dada la profundidad y la gravedad de la situación de inseguridad en México. Esta investigación permite derivar un conjunto de conclusiones relevantes. Primero, los resultados confirman la influencia determinante del partidismo en la ciudadanía mexicana, pues la identidad partidista funciona como un filtro primordial en la evaluación del desempeño gubernamental, aun en contextos de inseguridad y criminalidad. Esto refleja cómo las afinidades partidistas pueden, y tienden en el caso de la evaluación del mandatario morenista, a moldear la aprobación del gobierno, independientemente de la experiencia directa de victimización o percepción de inseguridad.

Esto tiene profundas implicaciones. Por un lado, no debe ignorarse la repentina explosión de afinidades partidistas con Morena. Si bien en la literatura se ha documentado que un partido

³²⁵ Vidal Romero *et al.*, “Presidential Approval and Public Security in Mexico's War on Crime”, *Latin American Politics and Society*, num. 2, vol. 58, 2016, p. 100.

³²⁶ *Loc. cit.*

³²⁷ *Loc. cit.*

gana mayor apoyo después de varias rondas electorales, Morena parece ser el contraejemplo perfecto.³²⁸ Dada su naturaleza reciente, se podría suponer una carencia en el apoyo ciudadano significativa; sin embargo, el cambio evidente en el partidismo del electorado mexicano ha demostrado su lealtad hacia la figura del expresidente. Además, no existe un sector poblacional específico que sea afín a Morena. En cambio, la heterogeneidad en las características (económicas, políticas y sociales) de los morenistas es de llamar la atención.

Por otro lado, vale la pena cuestionar si la lealtad a un partido nubla la visión sobre cuestiones críticas. No es cuestión menor que a pesar de la magnitud del problema de violencia e inseguridad, pero también de los altos grados de percepción de esto, las personas se sientan inclinadas a brindar una evaluación positiva al presidente por la afinidad que sienten hacia su partido. De nuevo, el nivel de aprobación que tiene un mandatario es indicador de cuestiones como la fuerza política que sostiene, su legitimidad y poder. Un Ejecutivo con los altos niveles de aprobación con los que López Obrador concluyó su mandato tiene un alto margen de maniobra y una capacidad de decisión significativa. Por lo tanto, el alto grado de aprobación le otorga una capacidad de implementar políticas que, independientemente de su pertinencia y resultados, se pueden llegar a percibir positivamente, dada su popularidad. El caso de la inseguridad y su manejo en el país es quizá un ejemplo de esto.

Las estrategias de mano dura para combatir al crimen en México (y en América Latina), en segundo lugar, se han posicionado entre las medidas más populares para manejar las cuestiones de seguridad pública. A pesar de sus implicaciones negativas, las estrategias punitivas como la militarización reciben un respaldo significativo de la ciudadanía. Aunque estas políticas tienden a vulnerar fuertemente los derechos humanos y no garantizan resultados efectivos los ciudadanos

³²⁸ Melina Altamirano, "Vulnerability and Partisanship in Latin America", *Latin American Politics and Society*, num. 3, vol. 61, 2019, p. 92.

que se enfrentan a la situación de inseguridad tienden a favorecerlas. El primer capítulo de esta tesis hace una descripción de algunos de los trabajos principales sobre el despliegue de las Fuerzas Armadas en las labores de seguridad civil y los motivos por los cuales las personas tienden a evaluar positivamente la estrategia.

Existen dos preocupaciones principales en cuanto al uso indiscriminado de las Fuerzas Armadas. La primera de estas cuestiones tiene que ver con las implicaciones democráticas y la lealtad al partido. A pesar de las consecuencias negativas en la vida de los ciudadanos del uso del Ejército en tareas de protección civil, la confianza en las Fuerzas Armadas por motivos de percepción de eficiencia debe estudiarse con mayor profundidad. La segunda preocupación tiene que ver con la incoherencia entre las propuestas de campaña, la retórica y las políticas implementadas. La administración pasada se mantuvo sobre una base de política pasiva y pacificadora frente al crimen. “Abrazos, no balazos” fungió como el lema de su estrategia de seguridad, mientras que, en un segundo plano, en la realidad, la política implementada distó poco de sus antecesores.

El apoyo de la ciudadanía a López Obrador ha sido histórico. Y, a pesar de no diferenciarse demasiado de las administraciones anteriores (impopulares) en cuestiones de manejo de inseguridad, recibió evaluaciones muy positivas. Esto es contrastante con las percepciones de inseguridad y con la exposición de las personas a la delincuencia. En sexenios anteriores, donde la militarización de la seguridad pública y la mano dura para combatir al crimen se hizo de manera explícita, la ciudadanía desaprobó ampliamente la gestión gubernamental. Así fue el caso de Felipe Calderón, como se expuso en el capítulo segundo. La primera administración morenista, empero, continuó un modelo donde las Fuerzas Armadas no abandonaron las calles de manera inmediata, como sí se había prometido. Y, sin embargo, AMLO dejó su cargo, en 2024, con más del 60% de

los mexicanos de su lado. Mi argumento es que la identidad partidista actúa como un filtro determinante en la aprobación presidencial pues moderan la influencia de factores como la victimización, la percepción de inseguridad y la confianza en las instituciones públicas.

De ahí que valga mencionar que quizás el hallazgo más significativo de este estudio la fuerza del filtro partidista en la evaluación presidencial de AMLO. Los datos muestran que incluso entre personas que han sido víctimas directas de algún delito, aquellas que se identifican con el presidente López Obrador continúan otorgándole altos niveles de aprobación. Este resultado sugiere que la identidad partidista no sólo moldea las percepciones sobre temas de seguridad, sino que también “amortigua” el impacto de experiencias negativas en la evaluación del Ejecutivo. La lealtad partidista opera como un mecanismo de resistencia frente a experiencias desfavorables, de tal forma que afecta directamente evaluación del electorado. Esta evidencia aporta una nueva capa al entendimiento del partidismo en México, con el surgimiento de Morena, pues funciona como un lente dominante aun en un contexto de altísima inseguridad y violencia.

Es de reconocer que mi investigación tiene limitantes y áreas de oportunidad. Vale la pena recordarlo: lo que planteo es sólo una aproximación al estudio sobre los históricos niveles de aprobación al presidente López Obrador. Si bien el fenómeno del partidismo adquiere, en la coyuntura actual, una relevancia clara, dada la dimensión de la inclinación ciudadana por Morena, habría que evaluar si el impacto es el mismo para otras cuestiones como el desarrollo económico o las políticas sociales. Además, sería provechoso, para futuras investigaciones, hacer un estudio similar para el sexenio de Claudia Sheinbaum, sucesora directa de López Obrador y quien lo superó en el resultado electoral.

En otro plano, también sería útil hacer un estudio de cómo la identificación con la oposición partidista moldea estas percepciones. O bien, si el partidismo negativo, es decir, aquellas personas

que apoyan a un partido por desaprobar a otro, tiene un impacto similar en las evaluaciones, conjugadas con la exposición al crimen y violencia. Sugiero esto al reconocer otra limitante de mi investigación: los modelos estadísticos que consideran las variables de identidad partidista utilizan la variable morenista que se basa en sólo un subconjunto de personas que primero reportaron simpatizar con un partido político. Es decir, la toma muestral de personas que se identifican con Morena es, en realidad, reducido, ya que se trata de un recorte en la encuesta a un grupo que primero respondió que sí al preguntarles si simpatizaban con algún partido mexicano.

La metodología de la tesis, aunque sumamente útil para explorar la relación entre percepciones de inseguridad y violencia y la aprobación presidencial, presenta ciertas limitaciones. Un enfoque cualitativo más profundo, como entrevistas en profundidad o grupos focales, podría ser provechoso para valorar de manera más precisa y detallada cómo el partidismo influye en la evaluación del gobierno por parte de los ciudadanos. Un estudio de este tipo ayudaría a complementar esta investigación, ya que permitiría explorar las motivaciones y justificaciones implícitas en las respuestas de los individuos. Además, aportaría un entendimiento más profundo de las experiencias de victimización y las percepciones de inseguridad. Una metodología de este tipo podría ofrecer una visión más matizada de cómo diferentes segmentos de la población, más allá de los resultados cuantitativos, perciben la relación entre la violencia, la seguridad, las políticas públicas y la gestión del Ejecutivo, lo cual enriquecería la interpretación de los datos obtenidos en este estudio.

Una de las limitantes más claras de esta tesis es la elección de un solo año de estudio. Si bien utilizo al 2023 porque permite capturar una imagen consolidada de la gestión presidencial de López Obrador, también implica una restricción temporal que impide analizar la evolución de las percepciones ciudadanas a lo largo del sexenio. Es cierto que, al centrarse únicamente en una

observación de un solo periodo, el estudio no puede identificar variaciones interanuales ni efectos acumulativos en la opinión pública. Sin embargo, esta limitación responde tanto a criterios metodológicos como prácticos, ya que un análisis del sexenio completo excede el alcance de la tesis.

Con todo, es relevante seguir estudiando la delicada situación de seguridad en la que se encuentra México, a pesar de que otros indicadores, como la aprobación presidencial, muestren que la ciudadanía se encuentra satisfecha con la gestión gubernamental. Un objetivo clave de este trabajo es dilucidar cómo las evaluaciones positivas del Ejecutivo no son radiografías directas de las condiciones del país. Si bien el primer sexenio de Morena concluyó con niveles significativos de aprobación presidencial, también quedó registrado como uno de los periodos más violentos de la historia reciente del país. El incremento en la violencia, en el crimen y en la incidencia delictiva continúan siendo desafíos profundos para las personas gobernantes en México y en América Latina. Si bien el apoyo popular les otorga la legitimidad que buscan y el margen de acción que necesitan, es crucial evaluar si las estrategias de protección y seguridad pública son eficientes y si se mantienen los mecanismos de rendición de cuentas hacia la ciudadanía que los respalda.

Bibliografía

Aguayo Quezada, Sergio y Javier Treviño Rangel, “Fox y el pasado. La anatomía de una capitulación”, *Foro Internacional*, num. 4, 2007.

Altamirano, Melina, “Vulnerability and Partisanship in Latin America”, *Latin American Politics and Society*, num. 3, vol. 61, 2019.

Amnistía Internacional, “Américas: Intentos de militarización de la seguridad pública en la región son una amenaza para los derechos humanos”, *Amnistía Internacional*, publicado el 29 de noviembre de 2022, <https://www.amnesty.org/es/latest/news/2022/11/americas-intentos-de-militarizacion-de-la-seguridad-publica-en-la-region-son-una-amenaza-para-los-derechos-humanos/>.

Amnistía Internacional, “Enrique Peña Nieto: el recuento de los daños”, *Amnistía Internacional*, publicado el 30 de noviembre de 2018, <https://www.amnesty.org/es/latest/news/2018/11/enrique-pena-nieto-el-recuento-de-los-danos/>.

Banco Interamericano de Desarrollo, “Seguridad Ciudadana en América Latina y el Caribe”, *BID*, publicado el 7 de marzo de 2024, <https://www.iadb.org/es/noticias/seguridad-ciudadana-en-america-latina-y-el-caribe>.

Barómetro de las Américas, “Información técnica: 2023”, *Universidad de Vanderbilt*, <http://datasets.americasbarometer.org/database/files/ABMEX2023-Technical-Report-v4.0-FINAL-eng-231117.pdf>

BBC News, “6 promesas con las que López Obrador quiere cambiar México”, *BBC News Mundo*, publicado el 2 de julio de 2018, <https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-44681165>.

- BBC, “López Obrador arrasa en las elecciones presidenciales de México y dice que no va a instalar una dictadura "abierta o encubierta", *BBC News Mundo*, publicado el 2 de julio de 2018, <https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-44678193>.
- Benítez, Raúl, “La seguridad nacional en la indefinida transición: mitos y realidades del sexenio de Vicente Fox”, *Foro Internacional*, 191-192, núm. 48, 2008.
- Castro, Rodrigo et al, “Las claves de la victoria: ¿ideología, programas sociales o aprobación presidencial?” en *Nexos*, publicado el 25 de septiembre de 2024, <https://datos.nexos.com.mx/las-claves-de-la-victoria-ideologia-programas-sociales-o-aprobacion-presidencial/>.
- Castro Cornejo, Rodrigo, “Who believes in fraud in the 2006 Mexican Presidential Election? Election Denialism, Partisan Motivated Reasoning, and Affective Polarization”, *Latin American Research Review*, vol.1, num. 22, 2024.
- Centeno, Ramón I., Fionn Petch y Ariel Elbaz, “López Obrador o la izquierda que no es”, *Foro Internacional*, núm.1, vol. 61, 2021.
- Chihu Amparán, Aquiles, “El framing del discurso de la campaña presidencial de López Obrador”, *Iztapalapa Revista de Ciencias Sociales y Humanidades*, núm. 93, año 43, 2022.
- Chincoya Teutli, Héctor, “De la seguridad pública a la política criminológica”, en México: 2000-2012 (los gobiernos del Partido Acción Nacional), *IUS*, num. 34, 2014.
- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, art. 21.
- Corporación Latinobarómetro, “Reporte 2021”, *Latinobarómetro*, Santiago de Chile, 2021, p. 64.
- Crimen en México, “Reporte de mayo 2024 sobre la delincuencia en México”, <https://elcri.men>.

- Cuddington, Danielle y Richard Wike, “Declining Ratings for Mexico’s Peña Nieto”, *Pew Research Center*, 2015, <https://www.pewresearch.org/global/2015/08/27/declining-ratings-for-mexicos-pena-nieto/>.
- Emerson, R. Guy, “Who is the citizen in citizen security?”, *Latin American Research Review*, num. 55, vol. 3, 2020.
- Esteinou Madrid, Javier, “Las elecciones de 2018 y el triunfo de AMLO/Morena”, *Argumentos*, UAM Xochimilco, 2019.
- Ferri, Pablo, “México mantiene los altos niveles de violencia y registra 30.523 asesinatos en 2023”, en *El País*, publicado el 16 de enero de 2024, <https://elpais.com/mexico/2024-01-16/mexico-mantiene-los-altos-niveles-de-violencia-y-registra-30523-asesinatos-en-2023.html>.
- Flores Macías, Gustavo y Jessica Zarkin, “Militarization and Perceptions of Law Enforcement in the Developing World: Evidence from a Conjoint Experiment in Mexico,” en *British Journal of Political Science*, 2022.
- Gerber, Brian J. y Grant W. Neely, “Perceived Risk and Citizen Preferences for Governmental Management of Routine Hazards”, *The Policy Studies Journal*, vol. 33, num. 3, 2005.
- Gómez Vilchis, Ricardo R., “Calificando al Presidente y percibiendo el aumento del crimen en México”, *Perfiles Latinoamericanos*, núm. 42, 2013.
- Green, Donald *et al.*, “Chapter 2: Partisan Groups as Objects of Identification”, en *Partisan hearts and minds: political parties and the social identities of voters*, New Haven, Yale University Press, 1961.
- Guzik, Keith, “Security a la Mexicana: on the particularities of security governance in Mexico’s War on Crime”, *Theory and Society*, vol. 42, num. 2, marzo 2013.

- Holland, Alisha C., “Right on Crime? Conservative Parties and Mano Dura Policies in El Salvador”, *Latin American Research Review*, 2010.
- Huddy, Leonie *et al.*, “The Political Consequences of Perceived Threat and Felt Insecurity”, *The Annals of the American Academy of Political and Social Science*, vol. 614, 2007.
- Índice de Paz México 2023, “El cambiante panorama de la delincuencia organizada,” *Institute for Economics and Peace*, www.indicedepazmexico.org
- International Crisis Group, “López Obrador redobla su apuesta militar”, en *El laberinto de los generales: crimen y militares en México, Informe de Crisis Group sobre America Latina*, num. 106, 2024.
- Iyengar, Shanto, “How Citizens Think about National Issues: A Matter of Responsibility”, *American Journal of Political Science*, vol. 33, num. 4, 1989.
- Laterzo, Isabel G., “Progressive Ideology and Support for Punitive Crime Policy: Evidence from Argentina and Brazil”, *Comparative Political Studies*, vol. 57, num. 6, 2023.
- Ley, Sandra y Guillermo Trejo, *Votes, Drugs, and Violence*, Cambridge University Press, 2020.
- López Obrador, Andrés Manuel, “Percepción social de inseguridad llega a su nivel más bajo en diez años, destaca presidente,” conferencia de prensa, 18 de enero de 2024, lopezobrador.org.mx
- Lupu, Noam, “Partisanship in Latin America”, en Carlin, Ryan E. et al (eds.), *The Latin American Voter: Pursuing Representation and Accountability in Challenging Contexts*, University of Michigan Press, 2015.
- Lupu, Noam, “Party Brands and Partisanship: Theory with Evidence from a Survey Experiment in Argentina”, en *American Journal of Political Science*, vol. 57, num. 1, 2013.

- Martín Montes de Oca, José Alfredo, “La seguridad ciudadana ante la seguridad pública: un estudio preliminar”, *DIGNITAS*, num. 12, 2018, p. 16, <https://dignitas.codhem.org.mx/index.php/dignitas/article/download/56/52>.
- Martínez Gil, José Pablo, “Historia del Movimiento de Regeneración Nacional”, *Revista de Derecho Estasiológico, Ideología y Militancia*, núm. 4, 2014.
- Merino, Mauricio, *La transición votada. Crítica a la interpretación del cambio político en México*, Fondo de Cultura Económica, México, 2003.
- Mesa Directiva, “La reforma que traslada la Guardia Nacional a la Sedena ya es constitucional, declara la Cámara de Diputados”, *Cámara de Diputados*, boletín num. 0077, <https://comunicacionsocial.diputados.gob.mx/index.php/mesa/la-reforma-que-traslada-la-guardia-nacional-a-la-sedena-ya-es-constitucional-declara-la-camara-de-diputados>.
- Meyer, Lorenzo, “Felipe Calderón o el infortunio de una transición”, *Foro Internacional*, núm. 1, 2015.
- Mitofsky, “Aprobación presidencial de Andrés Manuel López Obrador, promedio julio 2024”, en *Mitofsky: Reinventing Research*, publicado en julio de 2024, <https://www.mitofsky.mx/post/aprobacion-presidencial-de-andres-manuel-lopez-obrador-promedio-julio-2024>.
- Muggah, Robert and Katherine Aguirre Tobón, “Citizen security in Latin America: theories of crime and violence”, *Strategic Paper 33*, Igarape Institute, 2018.
- Ortega Ortiz, Reynaldo Yunuen y Ma. Fernanda Somuano Ventura, “Introducción: el periodo presidencial de Felipe Calderón Hinojosa”, *Foro Internacional*, núm. 1, 2015.
- Pew Research Center, “Mexicans Back Military Campaign Against Cartels”, *Report on Criminal Justice*, June 20, 2012,

<https://www.pewresearch.org/global/2012/06/20/mexicans-back-military-campaign-against-cartels/>.

Ramos, Dulce, “Promete AMLO regresar al Ejército a sus cuarteles en 6 meses”, *Animal Político*, publicado el 6 de febrero de 2012, <https://animalpolitico.com/2012/02/promete-amlo-regresar-al-ejercito-a-sus-cuarteles-en-6-meses> .

Reyes, Cristina y Leilani Hernández, “La Guardia Nacional: fachada civil, “seguridad militar”, en *Nexos*, publicado el 16 de mayo de 2023, <https://seguridad.nexos.com.mx/la-guardia-nacional-fachada-civil-seguridad-militar/>.

Rojas, René, “López Obrador’s Rise to Power”, *New Labor Forum*, num. 1, vol. 29, 2020.

Romero, Vidal *et al*, “Presidential Approval and Public Security in Mexico's War on Crime”, *Latin American Politics and Society*, num. 2, vol. 58, 2016.

Sánchez, Magaly, “Insecurity and Violence as a New Power Relation in Latin America”, *The Annals of the American Academy of Political and Social Science*, Vol. 606, 2006.

Sommano, Ma. Fernanda y Reynaldo Ortega, “Desigualdad económica en México, percepciones y determinantes”, en Melina Altamirano y Laura Flamand, *Desigualdades sociales en México*, Ciudad de México, El Colegio de México, 2021.

Sommano, Ma. Fernanda, “Aprobar al Presidente: una comparación entre Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto”, *Foro Internacional*, num. 4, vol. 58, 2018.

Tiscornia, Lucía y Verónica Pérez Bentancur, “Dilemmas of substitution: Why the urban poor support punitive policing in a Latin American city”, *Journal of Urban Affairs*, 2022, <https://doi.org/10.1080/07352166.2022.2112902>.

Vanderbilt University, “Barómetro de las Américas”, *LAPOP*, <https://www.vanderbilt.edu/lapop/mexico.php>.

Wilkinson, Daniel, “México: La militarización de la seguridad pública”, *El Universal*, publicado el 4 de octubre de 2018, <https://www.hrw.org/es/news/2018/10/04/mexico-la-militarizacion-de-la-seguridad-publica>.

Anexo 1

Con el fin de elaborar un análisis más riguroso, diseño dos modelos adicionales (Modelos 6 y 7) que contemplan las interacciones de la identidad partidista con las percepciones de inseguridad en su entorno y las experiencias de victimización, pero agregando las variables independientes del segundo modelo original (ver Cuadro I). En este sentido, los últimos dos modelos se pueden observar en el Cuadro V a la par del Modelo 5, para una comparación más inmediata.

Cabe resaltar que, para los tres modelos mostrados, considerar el tema de seguridad como el problema más grave de México tiene efectos casi idénticos: negativos y estadísticamente significativos. Es decir que, con la conjugación de las variables en los tres modelos, el priorizar el problema de seguridad repercute negativamente en la evaluación del trabajo del Ejecutivo Federal. De igual manera, la confianza en las Fuerzas Armadas se mantiene casi igual para todos los modelos (con relevancia estadística alta y un efecto positivo). Sin embargo, la confianza en la policía pierde su significancia estadística para los modelos seis y siete, en comparación con el quinto modelo (el tercero y el cuarto, también).

Lo interesante es observar el efecto de las variables independientes agregadas (percepción de inseguridad en la vivienda y experiencias de victimización) en conjunción con las interacciones (morenista con experiencias de victimización, Modelo 6, y morenista con percepción de alta inseguridad en la vivienda, Modelo 7) sobre la evaluación del desempeño del Ejecutivo. Es posible observar que el efecto de la percepción de seguridad en la vivienda tiene un efecto positivo y significativo en ambos modelos adicionales. De igual manera, la variable de experiencias de victimización (independiente), para ambos modelos, tiene un efecto negativo y estadísticamente significativo.

Esto se traduce en que una mayor percepción de seguridad en la vivienda (donde un valor más alto significa mayor seguridad percibida) se asocia de manera significativa y positiva con la evaluación del desempeño del Ejecutivo. Por otro lado, es posible interpretar que las experiencias directas de victimización erosionan la percepción positiva hacia el trabajo del Ejecutivo, aunque este efecto es menos pronunciado en el Modelo 7 ($\beta = -0.28$), que en el Modelo 6 ($\beta = -0.63$). El análisis se complejiza aún más al observar los efectos combinados de las variables de victimización y percepción independientes con las interacciones de la identidad morenistas.

La sensación de mayor seguridad en la vivienda o en el entorno inmediato por sí sola tiene un efecto positivo ($\beta = 0.34$) en el Modelo 7, pero este efecto se intensifica para los morenistas ($\beta = 1.33$). Esto sugiere que las personas que se identifican con Morena pueden atribuir los avances en la seguridad de su localidad directamente al trabajo del Ejecutivo, lo que conduce a una evaluación positiva en mayor medida.

Del mismo modo, las experiencias de victimización por sí solas tienen un efecto negativo ($\beta = -0.28$) en el Modelo 7, pero cuando se combina con el factor partidista (a favor de Morena), el efecto cambia a positivo ($\beta = 1.93$) en el Modelo 6. Esto podría reflejar que los morenistas tienen un nivel de tolerancia más alto ante las fallas en seguridad pública, en su evaluación del Ejecutivo, que se puede atribuir a su identidad partidista.

Esto último ayuda a comprobar de nueva cuenta el efecto moderador que tiene el lente partidista sobre las evaluaciones ciudadanas. Para los morenistas, el efecto de percibir seguridad en la vivienda es más fuerte que para otros grupos. Y, a diferencia de quienes son víctimas de crimen pero que no simpatizan con Morena, aquéllos que encuentran una afinidad con el partido tienden a tener una mejor evaluación del desempeño del presidente.

Cuadro V. Modelos de regresión probit adicionales

Variables	Modelo 5	Modelo 6	Modelo 7
Problema de seguridad	-0.30 ** (0.10)	-0.24* (0.10)	-0.25* (0.10)
Confianza en Fuerzas Armadas	0.19 *** (0.03)	0.17 *** (0.03)	0.18 *** (0.03)
Confianza en Policía	0.08 ** (0.03)	0.05 (0.03)	0.05 (0.03)
Percepción de corrupción en FP	-0.18 *** (0.05)	-0.19 *** (0.05)	-0.17 *** (0.05)
Edad	-0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
Mujer	-0.17 (0.13)	-0.10 (0.13)	-0.08 (0.13)
Educación	-0.02 (0.04)	0.02 (0.04)	-0.03 (0.04)
Desempleado	0.27 (0.19)	0.21 (0.19)	0.28 (0.19)
Estudiante	0.67 ** (0.22)	0.51 * (0.22)	0.62 ** (0.23)
No remunerado	0.11 (0.15)	0.00 (0.15)	0.08 (0.15)
Jubilado	0.72 ** (0.24)	0.70 ** (0.23)	0.67 ** (0.24)
Rural	0.17 (0.13)	0.12 (0.13)	0.11 (0.13)
Percepción de seguridad en vivienda		0.31 *** (0.06)	0.34 *** (0.06)
Víctima de crimen		-0.63 *** (0.13)	-0.28 * (0.12)
Ideología (izq(1) - der(10))	-0.01 (0.02)	-0.01 (0.02)	-0.01 (0.02)
Morenista víctima de crimen		1.93 *** (0.25)	
Morenista con percepción de inseguridad en vivienda	0.96 *** (0.18)		1.33*** (0.19)
AIC	3459.94	3523.59	3399.41
BIC	3554.59	3629.60	3504.48
Log Likelihood	-1711.97	-1741.79	-1679.70
Deviance	3423.94	3483.59	3359.41
Num. Obs.	1420	1481	1413
*** p < 0.001; ** p < 0.01; * p < 0.05			

Los resultados muestran que la percepción de seguridad, la confianza en las instituciones y la victimización por crimen son factores clave en la evaluación de la aprobación presidencial. La percepción de que la seguridad es un problema y la percepción de corrupción en las fuerzas policiales tienen un efecto negativo y significativo, mientras que la confianza en las Fuerzas Armadas y la percepción de seguridad en la vivienda tienen un efecto positivo y significativo. Finalmente, la identidad partidista influye en la manera en que se perciben la inseguridad pero también el trabajo presidencial: los simpatizantes de Morena que han sido víctimas de crimen o tienen una percepción de inseguridad en su vivienda presentan efectos positivos y significativos.